

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2016
ORDEN DEL DIA N° 604

Impreso el día 31 de agosto de 2016

SUMARIO

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE JUSTICIA Y ASUNTOS
PENALES

Dictamen en los proyectos de ley, el venido en revisión y el de varios señores senadores por el que se garantiza el derecho de acceso a la información pública. SE ACONSEJA APROBAR EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISION (CD.- 17/16, S-2060, 3240, 3832, 3934, 4074 Y 4128/15, 24, 225, 611, 1081 Y 2236/16)

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, han considerado los expedientes CD-17/16: "Proyecto de ley en revisión garantizando el derecho de acceso a la información pública"; Exp. S-2060/15: Irrazabal: "Proyecto de ley de acceso a la información pública"; Exp. S-3240/15: Solanas: "Proyecto de ley sobre acceso a la información pública"; Exp. S-3832/15: Abal Medina: "Proyecto de ley de acceso a la información pública"; Exp. S-3934/15: Morandini: "Proyecto de ley de derecho de acceso a la información pública"; Exp. S-4074/15: Rozas: "Proyecto de ley reglamentando el derecho de acceso a la información pública"; Exp. S-4128/15: Odarda: "Proyecto de ley de acceso a la información pública"; Exp. S-24/16: Pais y otros: "Proyecto de ley de acceso a la información y de transparencia de gestión pública"; Exp. S-225/16: Persico: "Proyecto de ley de acceso a la información pública"; Exp. S-611/16: Naidenoff: "Reproduce el proyecto de ley de acceso a la información pública. (Ref. S. 1293/14)"; Exp. S-1081/16: Marino: "Proyecto de ley de acceso a la información pública"; y Exp. S-2236/16: "Giacoppo: Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública", y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del expediente CD-17/16: "Proyecto de ley en revisión garantizando el derecho de acceso a la información pública".

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016

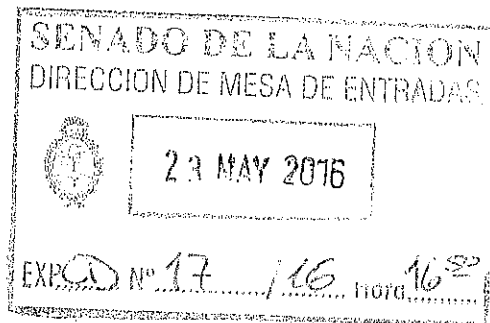
Juan M. Abal Medina.- Pedro G. A. Guastavino.- Ernesto Félix Martínez.- Julio C. Cobos.- Sigrid E. Kunath.- Juan M. Pais.- Dalmacio E. Mera.- Rodolfo J. Urtubey.- Walter B. Barrionuevo.- Carlos M. Espínola.- Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.- Silvia B. Elías de Perez.- Ángel Rozas.- Néstor P. Brillard Pocard.- Oscar A. Castillo.- Luis P. Naidenoff.- Juan C. Marino.- Laura E. Rodríguez Machado.- Federico Pinedo.- Marta Varela.-

H. Cámara de Diputados de la Nación

Presidencia

8-PE-16

OD 23



Buenos Aires, 18 MAY 2016

Señora Presidenta del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

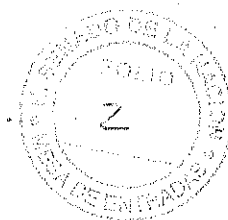
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1° - *Objeto*. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios:

Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley.

Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
2/.

Informalismo: las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.

Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.

Apertura: la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.

Disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.

No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

Máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.

Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.

Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la información,



↓



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
3/.

como el silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente.

Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.

Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información.

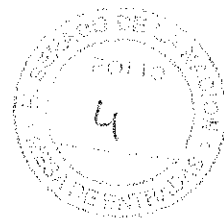
In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Facilitación: ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra, o no, en su poder o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener la información.

Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.



↓
[Handwritten signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

4/.

TÍTULO I

Derecho de acceso a la información pública

Capítulo I

Régimen general

Art. 2° - *Derecho de acceso a la información pública.* El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

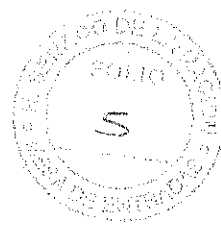
Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.

Art. 3° - *Definiciones.* A los fines de la presente ley se entiende por:

- a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
- b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.

Art. 4° - *Legitimación activa.* Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

5/.

pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.

Art. 5° - *Entrega de información.* La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.

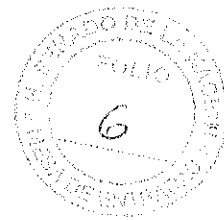
El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Art. 6° - *Gratuidad.* El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo del solicitante.

Art. 7° - *Ámbito de aplicación.* Son sujetos obligados a brindar información pública:

- a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
- b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
- c) El Poder Judicial de la Nación;
- d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
- e) El Ministerio Público de la Defensa;
- f) El Consejo de la Magistratura;
- g) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

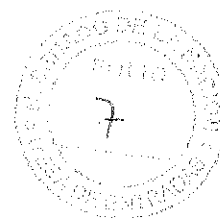
OD 23

6/.

con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

- h) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
- i) Concesionarios, permisionarios y licenciarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
- j) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos;
- k) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
- l) Personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público, y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos;
- m) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
- n) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

7/.

objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;

- o) El Banco Central de la República Argentina;
- p) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación.
- q) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.

El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.

Capítulo II

Excepciones

Art. 8º - *Excepciones*. Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

- a) Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas;
- b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;



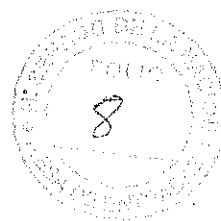
↓

H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

8/.



- c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
- d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
- e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
- f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;
- g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgar las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
- h) Información protegida por el secreto profesional;
- i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias;



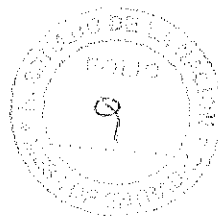
↓

H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

9/.



- j) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
- k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;
- l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.
- m) Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

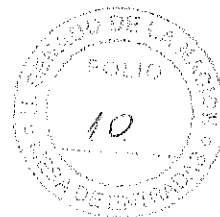
Capítulo III

Solicitud de información y vías de reclamo

Art. 9º - *Solicitud de información.* La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública, en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.

El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
10/.

Art. 10.- *Tramitación.* Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días, computado desde la presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.

Art. 11.- *Plazos.* Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada.

En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga.

El peticionante podrá requerir, por razones fundadas, la reducción del plazo para responder y satisfacer su requerimiento.

Art. 12.- *Información parcial.* Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 8° de la presente ley, deberá suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.

Art. 13.- *Denegatoria.* El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de



↓



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16

OD 23

11/.

la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida.

La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida.

El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos previstos en el artículo 11 de la presente ley, así como la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como denegatoria injustificada a brindar la información.

La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo 14 de la presente ley.

Art. 14.- *Vías de reclamo.* Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del domicilio del requirente o el del domicilio del ente requerido, a opción del primero.

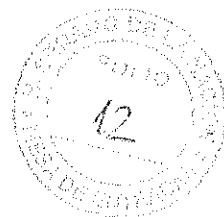
En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa.

El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley, será sustitutivo de los recursos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 1991).

El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera notificada la resolución denegatoria de la solicitud o desde que venciera el plazo para responderla, o bien, a partir de la verificación de



[Handwritten signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
12/.

cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal previstos en el artículo 2° de la ley 16.986.

Art. 15.- *Reclamo por incumplimiento.* Ante los supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley o ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el artículo 11 de esta norma, interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su opción, ante el organismo originalmente requerido. Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación a la Agencia de Acceso a la Información Pública para su resolución.

Art. 16.- *Requisitos formales.* El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, indicando el nombre completo, apellido y domicilio del solicitante, el sujeto obligado ante el cual fue dirigida la solicitud de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del sujeto obligado.

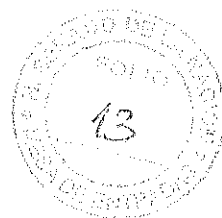
Art. 17.- *Resolución del reclamo interpuesto.* Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia de Acceso a la Información Pública, deberá decidir:

a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo motivos para dicha resolución:

I. Que se hubiese presentado fuera del plazo previsto;



↓
[Handwritten signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
13/.

- II. Que con anterioridad hubiera resuelto la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información;
- III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la presente ley;
- IV. Que se trate de información contemplada en alguna o algunas de las excepciones establecidas en el artículo 8º de la presente ley.
- V. Que la información proporcionada haya sido completa y suficiente.

Si la resolución no implicara la publicidad de la información, la notificación al sujeto requirente deberá informar sobre el derecho a recurrir a la justicia y los plazos para interponer la acción; -

- b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado la información requerida a cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.

La decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública deberá ser notificada en un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de la información y al sujeto obligado, al mismo tiempo que deberá ser publicada en su página oficial de la red informática.

Si la resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido con las disposiciones de la presente ley, deberá entregar la información solicitada en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde recibida la intimación.

Art. 18.- *Responsabilidades.* El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u



↓



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
14/.

obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.

Capítulo IV

Agencia de Acceso a la Información Pública

Art. 19.- *Agencia de Acceso a la Información Pública.* Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información Pública debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa.

Art. 20.- *Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.* La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser reelegido por una única vez. El director será designado por el Poder Ejecutivo nacional mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato.

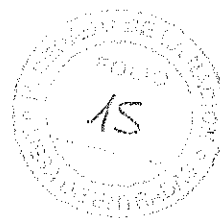
Art. 21.- *Procedimiento de selección del director.* El procedimiento de selección del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto a continuación:

- a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1) persona y publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de la



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
15/.



misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días;

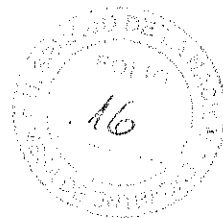
- b) El candidato deberá presentar una declaración jurada conforme la normativa prevista en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, y su reglamentación;
- c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas del candidato;
- d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
- e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial prevista en el inciso a) del presente artículo, presentar al organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo plazo podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración;
- f) Dentro de los quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar una audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días de celebrada la audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará la decisión de confirmar o retirar la candidatura



↓
/

H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
16/.



de la persona propuesta, debiendo en este último caso proponer a un nuevo candidato y reiniciar el procedimiento de selección.

Art. 22.- *Rango y jerarquía del director.* El director a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.

Art. 23.- *Requisitos e incompatibilidades.* Para ser designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.

Asimismo, deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función.

El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función.

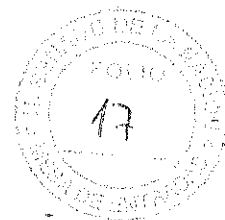
Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y su reglamentación.

El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5) años previos a la designación.

Art. 24.- *Competencias y funciones.* Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública:

- a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
- b) Preparar su presupuesto anual;





H. Cámara de Diputados de la Nación

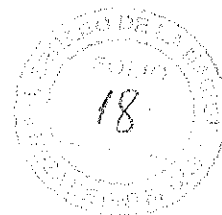
8-PE-16
OD 23
17/.

- c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los sujetos obligados;
- d) Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas;
- e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a la normativa aplicable a los fines de cumplir con el objeto de la presente ley;
- f) Proveer un canal de comunicación con la ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de información pública y, en particular, colaborando en el direccionamiento del pedido y refinamiento de la búsqueda;
- g) Coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública designados por cada uno de los sujetos obligados, en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la presente ley;
- h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra cuestión que permita el control ciudadano a lo establecido por la presente ley;
- i) Publicar periódicamente un índice y listado de la información pública frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes de información por vía de la página oficial de la red informática de la Agencia de Acceso a la Información Pública;
- j) Publicar un informe anual de rendición de cuentas de gestión;
- k) Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a los sujetos obligados;



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
18/.



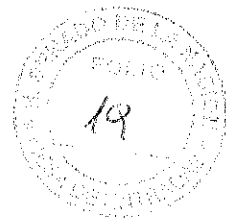
- l) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma legislativa respecto de su área de competencia;
- m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de ejercer su labor;
- n) Difundir las capacitaciones que se lleven a cabo con el objeto de conocer los alcances de la presente ley;
- o) Recibir y resolver los reclamos administrativos que interpongan los solicitantes de información pública según lo establecido por la presente ley respecto de todos los obligados, con excepción de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7° de la presente, y publicar las resoluciones que se dicten en ese marco;
- p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso a la Información Pública tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
- q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo establecido en la presente ley;
- r) Celebrar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
- s) Publicar los índices de información reservada elaborados por los sujetos obligados.

Art. 25.- *Personal de la Agencia de Acceso a la Información Pública.*

La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el personal



↓
[Signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
19/.

técnico y administrativo que establezca la ley de presupuesto general de la administración nacional.

Art. 26.- *Cese del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.* El funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Renuncia;
- b) Vencimiento del mandato;
- c) Fallecimiento;
- d) Estar comprendido en alguna situación que le genere incompatibilidad o inhabilidad.

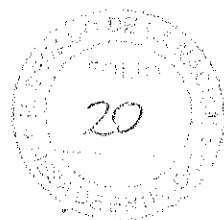
Art. 27.- *Remoción del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.* El funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá ser removido por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.

El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, dándole intervención a una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, que será presidida por el presidente del Senado y estará integrada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.

Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.



↓
/



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
20/.

Art. 28.- *Organismos de acceso a la información pública en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos.* En un plazo máximo de noventa (90) días contado desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de ellos, un organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública previstas en el artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito del organismo en el que se crea.

La designación del director de cada uno de dichos organismos debe realizarse mediante un procedimiento de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.

Art. 29.- *Consejo Federal para la Transparencia.* Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública, de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para su funcionamiento.

El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia será presidido por el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, quien convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el grado de avance en materia de transparencia activa y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.



↓
[Signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
21/.

Capítulo V

Responsables de acceso a la información pública

Art. 30.- *Responsables de acceso a la información pública.* Cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.

Art. 31.- *Funciones de los responsables de acceso a la información pública.* Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:

- a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al funcionario pertinente;
- b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
- c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
- d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la Información Pública;
- e) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida;
- f) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información;





H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
22/.

- g) Elaborar informes mensuales para ser remitidos a la Agencia de Acceso a la Información Pública o a los organismos detallados en el artículo 28 de la presente ley, según corresponda, sobre la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos de respuesta y las solicitudes respondidas y rechazadas;
- h) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
- i) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la información;
- j) Participar de las reuniones convocadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública;
- k) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación de las disposiciones de la presente ley.

TÍTULO II

Transparencia Activa

Art. 32.- *Transparencia activa.* Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.



↓

H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
23/.



Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos:

- a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, indicando, además, dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;
- b) Su estructura orgánica y funciones;
- c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, - incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón;
- d) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
- e) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel de desagregación en que se procese;
- f) Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios;
- g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales, de las sociedades o empresas proveedoras;



↓



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
24/.

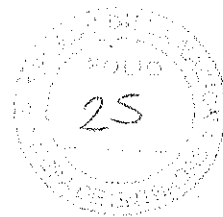
- h) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente;
- i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;
- j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares;
- k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
- l) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado;
- m) Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información pública y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la denegatoria;
- n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
- o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado;



↓

H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
25/.



- p) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de información que publica;
- q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén obligados a publicar de acuerdo con lo establecido en la ley 26.856;
- r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con mayor frecuencia;
- s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción;
- t) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través de Internet.

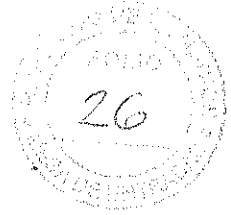
Art. 33.- *Régimen más amplio de publicidad.* Las obligaciones de transparencia activa contenidas en el artículo 32 de la presente ley, se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Art. 34.- *Excepciones a la transparencia activa.* A los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso, las excepciones al derecho de acceso a la información pública previstas en el artículo 8° de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga datos personales.



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
26/.



TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitorias

Art. 35.- *Presupuesto.* Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren necesarios para la implementación de la presente ley.

Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Art. 36.- *Adhesión.* Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.

Art. 37.- *Reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días desde su promulgación.

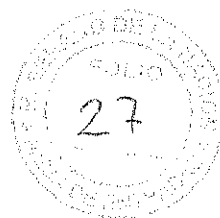
Art. 38.- *Cláusula transitoria 1.* Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al año de su publicación en el Boletín Oficial.

Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo de un (1) año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. En dicho plazo, conservarán plena vigencia el decreto 1172, del 3 de diciembre de 2003, y el decreto 117, del 12 de enero de 2016, así como toda otra norma que regule la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.



H. Cámara de Diputados de la Nación

8-PE-16
OD 23
27/.



Art. 39.- *Cláusula transitoria* 2. Hasta tanto los sujetos pasivos enumerados en el artículo 7º de la presente creen los organismos previstos en el artículo 28, la Agencia de Acceso a la Información Pública creada por el artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de ese organismo.

Art. 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.



EL

ANTECEDENTE

(I)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..

LEY NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - OBJETO. La presente ley regula el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

Art. 2º - ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional en los términos de la ley 24.156, el que a tal efecto está integrado por:

- a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
- b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
- c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
- d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Las disposiciones de la presente ley son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

Art. 3º - DESCRIPCIÓN. El Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2º y de las

personas depositarias de la información obtenida en los términos de esta ley.

Art. 4º - FINALIDAD. La finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz y su irrestricta difusión por parte de la comunidad.

Art. 5º - ALCANCES. Se considera información a los efectos del presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.

Los sujetos mencionados en el artículo 2º deben proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuenten al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso deben proveerla.

Art. 6º - SUJETOS. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

Art. 7º - PRINCIPIOS. El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad, gratuidad y difusión.

Art. 8º - PUBLICIDAD. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 2º.

Art. 9º - GRATUIDAD. El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante.

Art. 10. – ACCESIBILIDAD. Los sujetos enumerados en el artículo 2º en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en la presente ley. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.

Art. 11. – DIFUSIÓN. Las personas que reciban información en los términos de esta ley serán agentes de difusión de información pública y estarán obligados a entregar la información recibida en los términos de esta ley a toda otra persona que se la solicite, con carácter de carga pública. El Poder Ejecutivo implementará en Internet un sistema único de publicación de los pedidos de información cumplimentados,

con datos de contacto por localidad de sus respectivos depositarios, los que agregarán al sistema los datos de contacto de nuevos depositarios cuando actúen como agentes de difusión. En el caso de la información entregada en formato digital, el Poder Ejecutivo habilitará repositorios de acceso público en Internet para descargarla.

CAPÍTULO II

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Art. 12. – REQUISITOS. La solicitud de información a los sujetos mencionados en el artículo 2° debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente y su domicilio, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

Art. 13. – RESPUESTA. El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.

La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.

Art. 14. – DENEGATORIA. Los sujetos mencionados en el artículo 2° sólo pueden negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el presente. La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General.

Art. 15. – SILENCIO. Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 12 la demanda de información a los sujetos enumerados en el artículo 2° no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa en brindarla, quedando expedita la Acción prevista en el artículo 28 de la Ley 19.549 y modificatorias.

Art. 16. – RESPONSABILIDADES. El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.

Art. 17. – EXCEPCIONES. Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley o decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

- a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;
- b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
- c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;
- d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
- e) información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
- f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgar las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
- g) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;
- h) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;
- i) información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la ley 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;
- j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.

Art. 18. - INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA. En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el artículo 2º deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 17.

Art. 19. - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art.20. - REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días.

Art. 21. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan M. Irrazabal. –

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El objeto del presente proyecto es establecer un marco legislativo al derecho al acceso a la información pública.

En diciembre de 2003 el presidente Néstor Kirchner instituyó mediante el decreto 1172/2003 un Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional considerando que el derecho a acceder a la información pública es un prerequisite de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos para una mejor comunidad.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ya temprano en 1946, al convocar una conferencia internacional de libertad de información, afirmó que "la libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas" y que la misma "implica el derecho a recopilar, transmitir y publicar noticias en cualquier parte y sin restricción alguna y como tal es un factor esencial en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el progreso del mundo" (Resolución 59/1946).

El derecho a buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente en disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, a saber, el artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979 (ley 23.054 de 1984).

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado consistentemente que el artículo 13 de la Convención incluye un derecho al acceso a la información en poder del Estado y ha resaltado que "todas las personas tienen el derecho de solicitar, entre otros, documentación e información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado y, en general, cualquier tipo de información que se considera que es de fuente pública o que proviene de documentación gubernamental oficial" (Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002, citado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en C.830 XLVI, "CIPPEC con Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social, decreto 1172/03 según amparo Ley 16.986").

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- ha desprendido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el referido artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica el derecho al acceso a la información, afirmando que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de

acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Así, sostuvo que "en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones" (Corte Interamericana de Derechos Humanos caso "Claude Reyes y otros v. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006).

De esta manera, ese tribunal internacional ha reconocido el carácter fundamental de dicho derecho en su doble vertiente, como derecho individual de toda persona descrito en la palabra "buscar" y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a "recibir la información solicitada", entendiendo que la información pertenece a las personas, que la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. A tal fin, debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar el reconocimiento y la aplicación efectiva de ese derecho. El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores (Informe citado de 2002).

Desde la firma del decreto 1172/2003, numerosas iniciativas han sido presentadas en este Congreso de la Nación para legislar sobre el derecho al acceso a la información pública. El Senado de la Nación incluso sancionó un proyecto que no alcanzó a tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

El acceso a la información pública involucra de forma directa el imperativo de la transparencia en el manejo de la cosa pública, en tanto la información sobre las políticas públicas en curso es una ventana de observación privilegiada para determinar los criterios, técnicas y métodos específicos de los que se vale la administración para llevarlas adelante y de esta manera la expone a la crítica fundada en esa misma información. En tal sentido, se vuelve un elemento relevante para evaluar la responsabilidad política de los funcionarios en un régimen democrático. Asimismo, es de utilidad para el mismo Estado, ya que incrementa la información disponible sobre el funcionamiento de sus diferentes reparticiones y así, se constituye en un insumo más para quienes se encuentran en capacidad de decidir para evaluar la revisión de estructuras y procedimientos.

El presente proyecto busca aportar a este debate a partir del texto del decreto referido, dándole rango legislativo y ampliando su alcance a todas las jurisdicciones nacionales, agregando al mismo como novedad el "principio de difusión", éste, que consiste en la obligación – como contrapartida de todo derecho- que asume quien recibe

información pública, de ponerla a disposición de terceros. La aplicación de este principio tiene como consecuencia que los depositarios de información se vuelven agentes de difusión con carácter de carga pública. En el caso de la información entregada en formato digital, el Poder Ejecutivo implementará repositorios de acceso público en Internet para su descarga. De esta manera la información entregada con motivo de una solicitud de información queda liberada al acceso general.

El principio de difusión consagra la máxima de compartir la información pública, en perfecta sintonía con las posiciones expresadas más arriba y citadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un importante fallo sobre acceso a la información pública, a saber, que la información pertenece a las personas, que el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información y de prevenir los actos que lo nieguen y que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible. Este principio, además, busca afianzar dos aspectos relacionados a garantizar el acceso igualitario a la información de todos los ciudadanos de la República.

Primero, la obligación de difusión atiende el problema práctico propio de un país geográficamente extenso como el nuestro donde los organismos alcanzados por la jurisdicción federal que disponen de información de interés se concentran mayormente en la Capital Federal. Una vez evacuado un pedido de información puntual por los sujetos enumerados, la obligación de compartirla permitirá a los demás ciudadanos acceder a esta información en donde esta información se encuentre, y no necesariamente en su punto geográfico de origen. A tal fin el proyecto, además de repositorios digitales, establece que el Poder Ejecutivo implementará un registro de pedidos cumplimentados y dará los datos de contacto por localidad de quienes sean depositarios de la información, los que en caso de actuar como agentes de difusión a requerimiento de un tercero, agregarán al sistema los datos de contacto de éste. De esta manera, quien esté interesado en una información cuyo pedido ha sido cumplimentado no necesitará reiterar el pedido y en vez podrá requerir la información del depositario más cercano. Así, ante cada requerimiento no habrá que peregrinar para ser atendido en Buenos Aires sino que se podrá buscar al depositario más cercano en un directorio de fácil acceso.

Segundo, la obligación de difusión apunta a incrementar el volumen de la información disponible y a afianzar su carácter público y de acceso para todos los habitantes sin ninguna clase de discriminación o barreras fácticas, fomentando al mismo tiempo una cultura de datos públicos compartidos, en orden al incremento del conocimiento general sobre los asuntos de interés de la ciudadanía. Vale como ilustración un ejemplo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde rige una ley de acceso a la información pública, los datos disponibles muestran una fuerte tendencia a la concentración de solicitantes. En efecto, de acuerdo al portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad en Internet, 60% de los pedidos de información

pública registrados en 2013 fueron producidos por 3% de los solicitantes. Más aún, un solo solicitante efectuó 45% de los pedidos de información pública ese año. Esto sugiere que sin un mecanismo de difusión, incluso en un distrito con niveles de ingreso y bienestar muy por sobre el promedio del país y una importante producción de información pública, el acceso a la información tiende a beneficiar a una pequeña minoría, visto que solicitar información requiere intereses, conocimientos y habilidades que difícilmente se encuentran distribuidas igualitariamente en la población. Este hecho impone barreras a la toma de conocimiento del estado de los asuntos públicos de importantes franjas de la ciudadanía, cuyo interés puede ser fácilmente movilizado a partir del acceso a un catálogo de información liberada gracias a solicitudes puntuales, fácilmente accesible contactando a quien ya cuenta en su poder con tal información. Siendo que por aplicación del principio de difusión propuesto cada depositario nuevo se convierte a su vez en agente de difusión con carácter de carga pública, y como tal, obligado a dar la información recibida a quien se lo requiera, es esperable un "efecto multiplicador" de la información disponible y como consecuencia un aumento en el conocimiento popular, reduciendo el impacto de las barreras de acceso señaladas. Accesoriamente, expandir la disponibilidad de la información en el territorio y volverla más fácilmente accesible reduce su valor de exclusividad y aventa la tentación de explotar la información obtenida como si fuera una mercancía privada susceptible de comercialización.

Por los motivos expuestos, y por los que se darán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Juan M. Irrazabal. -

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- El acceso a la información pública, constituye un derecho de todas las personas, que teniendo recepción constitucional debe ser garantizado por el Estado, evitando toda acción que restrinja su ejercicio y promoviendo políticas que lo hagan efectivo, para así transparentar los actos de gobierno. El efectivo ejercicio del derecho a saber es un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.

Art. 2º.- Son objetivos de la presente Ley:

- a) Implementar, las disposiciones del Artículo 38 de la Constitución de la Nación
- b) Promover la publicidad de los actos gubernamentales, propia del sistema representativo, republicano y federal.
- c) Cumplir con los pactos internacionales suscriptos por la Nación.
- d) Lograr un conocimiento adecuado de los actos de gobierno que facilite el debido control ciudadano de los mismos.

e) Facilitar el libre acceso a los documentos que se encuentren en los archivos de los distintos organismos de la Administración Pública.

Art. 3°.- Toda autoridad pública perteneciente a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal), los ministerios, secretarías de Estado, entidades de la administración pública nacional, empresas, sociedades, personas jurídicas de derecho público o privado que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado, o sean concesionarias de este, en cualquiera de sus modalidades; las organizaciones de trabajadores, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales, que reciban subsidios del Estado de cualquier naturaleza, estarán sometidas, conforme a las normas de la presente Ley, al principio de publicidad de la información que posean, con las excepciones que a continuación se establecen.

Art. 4°.- Toda la documentación con datos de interés informativo, en cualquier formato, que posean los archivos del Estado y todos los organismos que se encuentren bajo su jurisdicción, será en principio pública, exceptuando los casos contemplados en la presente ley.

Art. 5°.- En concordancia con lo establecido precedentemente y a título enunciativo, se entiende que la presente ley será aplicable a:

- a) Los organismos y entidades que conforman la administración del Estado, en los órdenes federal, regional, provincial y municipal.
- b) El Poder Legislativo
- c) El Poder Judicial
- d) Las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, y las personas físicas
- e) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus distintas jurisdicciones o entidades.
- f) Corporaciones, fundaciones o entidades privadas, que a través de su actividad tengan contratos con el Estado Nacional o reciban subsidios del mismo, y las personas físicas que por cualquier carácter reciban subsidios del Estado
- g) Toda persona jurídica de derecho privado, que por su gestión o actividad sean concesionarias de servicios públicos del Estado o tengan alguna otra forma de relación contractual, y las personas físicas que por cualquier actividad tengan una relación contractual con la autoridad pública
- h) Las organizaciones no gubernamentales, que reciban aportes o rentas del Estado, o tengan algún tipo de relación contractual vinculada con su finalidad.

Art. 6°.- Se considera que está sujeto a información pública todo dato, que se encuentre en poder de las instituciones citadas en el artículo precedente contenido en notas, textos, memorándums, télex, cartas, informes, radiogramas, ordenes diarias, requerimientos, soportes magnéticos, , en cuerpos principales y anexos, y en cualquier formato existente.

Art. 7°.- Se considera que no están librados a la información pública:

- a) Los documentos clasificados de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 10° incisos a, b y c del anexo 1 del Decreto 950/02 cuyo conocimiento público pudiera afectar la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores de la Nación.
- b) Todo acto protegido por el derecho a la privacidad, en los términos de los artículos 19 y concordantes de la Constitución Nacional, y sus leyes complementarias.
- c) Las patentes, los derechos de autor y secretos comerciales, financieros, científicos o técnicos, por el tiempo y en la forma que establezca la legislación respectiva. El domicilio y los papeles privados, de conformidad a los artículos 18 y concordantes de la Constitución Nacional, ajenos al orden público. Esta excepción no se hará efectiva, cuando de las circunstancias del caso, surja que los datos y lugares fueron librados a la autoridad pública, sin reserva alguna.
- d) La excepción indicada en el inciso b) no tendrá aplicación con respecto a los asuntos y actividades propios de las funciones ejercidas por funcionarios públicos, o que legalmente les competen.
- e) Las comunicaciones confidenciales, incluida la información requerida por las cámaras y organismos parlamentarios, en base al artículo 75, inciso 33, de la Constitución Nacional, que debe ser considerada privilegiada.
- f) La información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
- g) La información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero, obtenida con carácter confidencial.
- h) La información preparada por los sujetos dedicados a regular o supervisar instituciones financieras, o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos, y que esté relacionadas con exámenes de situación, evaluación de sus sistemas operativos y formas de funcionamiento referidos a la prevención y funcionamiento de la legitimación de activos provenientes de actos ilícitos.
- i) La información preparada por abogados o asesores jurídicos de la Administración del Estado, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de causas judiciales, o aquella que divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de su derecho a la defensa en juicio y la garantía del debido proceso.
- j) La información que pudiera poner en peligro la vida y la seguridad de una persona.
- k) La información relacionada con datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.
- l) Toda información que esté relacionada con el secreto profesional.

Art. 8°.- Para el caso de que la documentación requerida, fuera parcialmente reservada, se podrán mostrar todas aquellas partes no alcanzadas por las excepciones contenidas en el artículo precedente.

Art. 9°.- Las excepciones contenidas en el artículo 7° no regirán para las solicitudes de información que efectúen los miembros o comisiones de las dos Cámaras del Congreso de la Nación en el ejercicio de su

función. Tampoco regirán para la Auditoría General de la Nación, salvo las protegidas por reglas de carácter constitucional.

Art.10°.- Las excepciones establecidas en el artículo 7° tampoco regirán en el caso de documentos solicitados por el Poder Judicial de la Nación, en el marco de investigaciones que se realicen respecto a violaciones de los derechos humanos o la comisión de crímenes de lesa humanidad, y siempre que las mismas resultaren fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco regirá la limitación en el caso de investigaciones que se efectúen por la comisión de delitos económicos. En todos los casos, salvo las protegidas por reglas de carácter constitucional.

Art. 11.- En cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno, las instituciones indicadas en el artículo 5° de la presente Ley, deberán disponer de una página web, en la que se consignarán:

- a) La estructura orgánica funcional de la institución, y la nómina de los integrantes de la misma, ambos actualizados. Ubicación de sus departamentos y horarios de actividad y atención al público.
- b) Las calificaciones y remuneraciones de los más altos funcionarios de la institución.
- c) Informes periódicos de gestión, con indicadores del desempeño de los agentes públicos y monitoreo de la autoridad pública, incluyendo planes estratégicos.
- d) Todo mecanismo interno o externo de supervisión adoptada.
- e) La información completa y detallada de todos aquellos procesos contractuales o precontractuales que se hayan realizado, procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y el respectivo seguimiento de las mismas.
- f) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total correspondiente a todas las categorías de funcionarios y consultores que trabajan en la autoridad pública, actualizando periódicamente la información.
- g) Las Auditorías internas realizadas y los sistemas de control empleados para la transparencia de los trámites administrativos.
- h) Información sobre contratos internos o externos realizados, con detalle de los fondos, indicando la fuente de donde provienen los mismos y modalidades de la contratación.
- i) Presupuesto anual, modos de financiamiento, gastos operativos, indicación de recursos, contrataciones y adquisición de bienes.
- j) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño del órgano en el cumplimiento de sus funciones.
- k) Una guía práctica que contenga la información adecuada sobre la documentación que se guarda en los archivos.
- l) Toda otra información inherente al funcionamiento de la institución.

Art. 12.- Toda persona física o jurídica, pública o privada que solicite información pública tiene derecho a:

- a) Saber si los documentos que contienen o de algún modo están relacionados con la información solicitada, se encuentran en poder de la autoridad pública.

- b) En caso afirmativo, es decir si los documentos referidos en el inciso precedente obran en poder de la autoridad pública que recibió la solicitud: a que se entregue copia de los mismos en forma inmediata.
- c) Si los documentos no son entregados, o es denegada la solicitud, a recurrir tal acto (u omisión), siendo aplicable al caso la Ley de Procedimientos Administrativos, a falta de un procedimiento específico.
- d) Solicitar información y obtener respuesta, sin tener que justificar en ningún caso las razones del pedido que se efectúa.
- e) No ser víctima de discriminación, pretextando la naturaleza del pedido solicitado.
- f) No ser sancionado de manera explícita o encubierta por el ejercicio de su derecho, cuando su petición se efectúe en el ente en el cual se encuentra empleado.

Art. 13.- Todo los trámites que requiera el acceso a la información pública serán de carácter gratuito, mientras no resulte necesario el copiado de la documentación pertinente. En caso contrario las copias u otra forma de reproducción, serán a costa del solicitante.

Se exceptuará del pago de cualquier reproducción a toda aquella persona, que pueda acreditar que carece de medios para hacerlo.

Las entidades en cuyo poder se encuentre la información pública, deben prever los mecanismos adecuados para un amplio y fácil acceso a la misma, como así también permitir la obtención de copias de documentación que sea solicitada, sin otra restricción que las fijadas en la presente Ley.

Cuando solo se solicite la consulta de documentación original, la autoridad pública facilitará el ámbito y las instalaciones adecuadas para que el solicitante pueda acceder a la misma.

Art. 14.- La solicitud de información, deberá ser realizada por escrito, con la identificación del requirente y firmada por el mismo, consignando su documento de identidad, sin que exista ningún otro requisito para hacerlo

También se podrá realizar la solicitud por vía electrónica, consignando los datos de identidad del peticionario. En todos los casos las solicitudes deben quedar registradas y se les dará curso en forma inmediata.

Dentro de los diez (10) días hábiles del pedido, la información, deberá ser suministrada, salvo que existan impedimentos justificados que no permitan hacerlo en el plazo indicado, el que podrá ser prorrogado por otros diez (10) días, en forma excepcional.

Para el caso de que la solicitud haya sido transferida a otra autoridad pública, se tomará como fecha de recepción, la que haga constar el órgano receptor de la misma.

Art. 15.- La solicitud de información podrá ser denegada, mediante resolución fundada únicamente por las causas señaladas en la presente Ley, o si la documentación requerida no existiere.

En el caso de producirse una denegatoria de la solicitud de información, se podrá r apelar la misma ante la Comisión de Seguimiento del Acceso a la Información que se crea en el artículo 16 de la presente ley, en los términos del artículo 12, inciso c), de la misma. En caso de confirmarse la misma, la parte afectada por la

decisión podrá ejercer las acciones administrativas y legales que le correspondan.

En el caso de que la documentación requerida se encontrare en otra institución, la solicitud deberá ser enviada a la misma a los efectos de darle el trámite respectivo. En tal caso deberá informarse al solicitante sobre el curso que se le ha dado a su pedido, de modo que pueda efectuar el seguimiento respectivo.

Art. 16.- Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información. Créase la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información que tendrá a su cargo la promoción y el control efectivo de la implementación de la presente Ley.

Art. 17.- La Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información dependerá del Congreso de la Nación tendrá personalidad jurídica, autonomía operativa e independencia financiera, y podrá elaborar un proyecto anual de presupuesto, debiendo entregar informes semestrales al Poder Legislativo, acerca de los resultados de su gestión.

Art.18.- El Poder Legislativo aprobará el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información, el que deberá ser acorde a la importancia de las tareas para las cuales fue creada.

Art. 19.- La Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información estará integrada por cinco (5) miembros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. Por mayoría simple elegirán al presidente de la misma, en la primera reunión que lleven a cabo después de su constitución.

Art. 20.- Nadie podrá ser designado miembro de la comisión sino cumple con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano argentino
- b) Tener calidades morales debidamente acreditadas a través de su actuación.
- c) No haber ocupado cargos políticos en el gobierno de la Nación en los dos (2) años precedentes.
- d) No haber sido condenado por la comisión dolosa de ningún tipo de delito en los últimos cinco (5) años, salvo que haya sido objeto de amnistía.

Art. 21.- Los miembros de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información serán designados por el Poder Ejecutivo, luego de su nominación por los dos (2) tercios de votos sobre los presentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. A los efectos de ser nominados se deberá efectuar un proceso que estará sometido a los siguientes principios:

- a) Participación del público en el proceso de nominación a cuyo fin declárase aplicable el Reglamento General de Audiencias Públicas (Anexo I) aprobado por Decreto 1172/03 del Poder Ejecutivo Nacional.
- b) Transparencia en la difusión de los antecedentes

c) Publicación de la lista de los candidatos que se consideren más idóneos para el cargo, en el Boletín Oficial y en los cuatro diarios de mayor circulación en el país.

Art. 22.- Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos a tiempo completo, debiendo ser remunerados con un sueldo equivalente al de Juez de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional.

Art.23.- Durante el ejercicio de su función y hasta la cesación de la misma, los miembros de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información no podrán realizar ninguna otra actividad, ni tener empleo alguno, con la excepción de ejercer cargos docentes y participar en actividades académicas, científicas o filantrópicas.

Art. 24.- Los miembros de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información duran cinco (5) años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegidos una sola vez. Solo pueden ser destituidos de su cargo o suspendidos por las causas y el procedimiento establecidos en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Tales causas incluyen:

- a) Tener condena firme por la comisión dolosa de un delito contemplado en el Código Penal.
- b) Afecciones de salud que signifiquen incapacidad para el ejercicio de la función.
- c) Infracciones u omisiones a la Constitución Nacional. y a la Leyes
- d) Negativa u omisión de cumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en la presente Ley, y también a hacer público el origen y composición de su patrimonio, su salario o los beneficios de que goza.

Art. 25.- Todo miembro de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información que sea destituido, podrá recurrir tal resolución ante los tribunales competentes.

Art. 26.- La Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información deberá presentar informes semestrales al Congreso de la Nación, los que como mínimo deberán contener:

- a) Cantidad de solicitudes de información presentadas a los organismos públicos, con especificación de las que fueron concedidas y denegadas.
- b) La normativa utilizada para fundar las denegatorias, en concordancia con las disposiciones de la presente ley, y la frecuencia con la que fuera invocada.
- c) Los recursos interpuestos contra la denegatoria de información efectuada por la autoridad pública, y la resolución recaída en las mismas.
- d) El funcionamiento de la Comisión como organismo de control,
- e) Cualquier otra información referida al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Art. 27.- Será reprimido con las penas de los artículos 292, 293 y concordantes del Código Penal el que provocare o permitiere la destrucción o alteración de algún documento que haya sido objeto de una solicitud de información.

Art. 28.- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 29 de la presente Ley, el Congreso de la Nación deberá monitorear el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información a través de las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías de ambas Cámaras.

Art. 29.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información, la que tendrá su cargo la verificación y el cumplimiento de las normas contenidas en la misma.

Ar. 30.- La presente Ley es de orden público

Art. 31.- Derogase el artículo 4° y el anexo VII del Decreto 1172/2003.

Art. 32.- La reglamentación de la presente Ley, deberá ser efectuada dentro de los sesenta (60) días de publicada en el Boletín Oficial, sin perjuicio de lo cual sus normas tienen carácter operativo.

Art. 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando E. Solanas. –

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La accesibilidad de los documentos oficiales ha constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente de acceder a los archivos oficiales, cuando se trabaja sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien existen una serie de normas que regulan la publicidad de los actos de gobierno, existen ciertas convenciones no escritas, que determinan que resulte vedado a la consulta de investigadores y estudiosos documentación de importancia que resulta necesaria a los efectos de aclarar distintas circunstancias y hechos históricos que por determinadas razones sus protagonistas quisieron ocultar. A eso se suman las disposiciones del Decreto 950/2002, en cuanto establecen determinadas clasificaciones para impedir el conocimiento público de documentos sin hacer mención alguna a la posibilidad de desclasificarlos una vez transcurrido un tiempo prudencial y cuando han desaparecido las razones que justificaron su reserva o el carácter secreto de los mismos.

La última disposición clasificadora de estos documentos es la del Decreto 950/02 que reglamentara la Ley 25.520 y que amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes clasificaciones de seguridad: Estrictamente Secreto y Confidencial: Aplicable a toda información, documento o material que esté relacionado con la organización y actividades específicas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional; Secreto: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación; Confidencial: Aplicable a toda información, documento o

material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del Estado; Reservado: Aplicable a toda información, documento o material que no estando comprendido en las categorías anteriores, no convenga a los intereses del estado que su conocimiento trascienda fuera de determinados ámbitos institucionales y sea accesible a personas no autorizadas.

Si exceptuamos lo referido al Sistema de Inteligencia Nacional, nunca quedó bien definido quienes deben ser los funcionarios encargados de las respectivas clasificaciones. Si bien los Ministros son los que en definitiva ejercen tal responsabilidad, en muchos casos la función ha sido delegada en otros funcionarios, sin que existan criterios generales acerca de la documentación que posee valor histórico y debe ser conservada o bien ser eliminada por considerársela irrelevante después de haber cumplido su función. Tampoco existen criterios adecuados sobre la desclasificación del material una vez transcurrido determinado tiempo y cuando haya dejado de tener la afectación establecida en las categorías enunciadas en el decreto 950/02.

El secretismo no solo está relacionado con los documentos secretos, reservados o confidenciales, sino con toda aquella documentación donde se manejan contrataciones del Estado, pre-contratos, información económica sensible, documentos diplomáticos que debieran ser públicos y todos aquellos papeles que por su naturaleza debieran ser públicos, como corresponde a un gobierno republicano y democrático. Pareciera que los funcionarios desde hace décadas, se hubieran apropiado de la función pública, no prestando un servicio, sino ejerciendo sus cargos de manera discrecional, decidiendo en cada caso que se informa y que no, lo que provoca que los asuntos de Estado que debieran comunicarse, siempre estén sometidos a una suerte de censura, que responde a la arbitraria decisión de un funcionario, sin que exista control alguno sobre tal conductas, ni posibilidad de ejercer reclamos sobre las mismas.

La falta de transparencia permite que se puedan realizar negociaciones lesivas al interés del Estado, contrataciones inconvenientes, actos ilícitos, tramitaciones irregulares y una variada gama de actos administrativos que la ciudadanía ignora y que escapan al control de los organismos públicos, que cantidades de veces no son informados, y en muchos casos ante sus requerimientos se les niega la información que han solicitado.

En la demorada y larga investigación llevada a cabo por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 sobre el endeudamiento externo, tanto el banco Central, como el Ministerio de Economía, se negaron a entregar documentos, y a informar lo requerido por el Tribunal, debiendo ser intimados a hacerlo. En otras oportunidades debieron reiterar pedidos que nunca se cumplían, o acceder a pedidos de ampliación de plazos, porque la documentación no se encontraba o resultaba de difícil acceso.

Precisamente en el caso del endeudamiento externo, y con excepción de las normas legales respectivas (leyes y decretos), y las pocas informaciones publicadas en la página web del Ministerio de Economía, es exiguu lo que se conoce, sin que en ningún caso se sepa cómo se instrumentaron los contratos, los que intervinieron en la celebración de los mismos, las comisiones que se pagaron, los cuantiosos honorarios pagados a abogados extranjeros. Todo realizado en el más absoluto secreto sobre operaciones, que aún hoy significan una formidable transferencia de recursos públicos.

Naturalmente que este culto por el secreto tiene viejos antecedentes, y es así, que en el Banco de la Nación no existen archivos sobre operaciones crediticias realizadas con anterioridad a la década del 50, habiéndose destruido las carpetas de los mayores deudores del banco hasta el año 1940. En rigor, el Banco de la Nación no tiene un archivo que conserve la documentación originada desde su creación. De la misma manera el Ministerio de Economía, carece de un archivo donde se conserven de manera ordenada todos los documentos referidos al sector externo, y cuando se hacen pedidos al Banco Central, donde se conservaba la documentación hasta el año 1992, se informa que la misma se transfirió a Economía, pero allí o no informan, o solo se dan informes limitados.

Y si vamos más lejos en el tiempo, podremos observar, que lo "secreto" ha sido una constante, no ya en cuanto a lo referido a secretos militares, lo que resultaría entendible, sino a las negociaciones económicas externas realizadas por los gobiernos de la Argentina desde el tristemente célebre empréstito celebrado en 1824, con la banca Baring Brothers, hasta el último canje de deuda celebrado en el año 2010, que fuera materia de una denuncia que presentáramos contra el entonces ministro de Economía, Lic. Amado Boudou, en la Justicia Federal. Pareciera que el comprometer abultados fondos para el pago a los acreedores, debiera permanecer en la oscuridad más absoluta, poniendo en tela de juicio nuestro sistema republicano y consagrando así la impunidad de los que negociaron el patrimonio público.

Ante la certeza de que se estaban realizando negociaciones que podían afectar el patrimonio público debimos recurrir a la Justicia Federal, ante la reiterada negativa de los funcionarios a entregar documentación, quienes utilizaban supuestos argumentos de confidencialidad, que podían ser admisibles en el caso de que el requerimiento partiera de un ciudadano común, pero resultaban injustificables cuando el pedido lo efectuaba una de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el año 2003, el entonces Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner emitió el Decreto 1172, por medio del cual, a través del anexo VII se reglamentó el acceso a la información pública. Sin perjuicio que tal norma significó un avance para el conocimiento de información que debía ser puesta a disposición de los ciudadanos, la misma tenía una serie de excepciones contenidas en el artículo 16 de la citada norma, que si bien en algún caso podían estar justificadas por razones de confidencialidad, no tenían por qué aplicarse a los órganos de control,

o al Poder Legislativo, como ocurriera. Decimos estos, porque varias informaciones que fueran reiteradamente solicitadas por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, fueron finalmente no respondidas por diversos ministerios, amparándose en las excepciones fijadas por el citado artículo 16.

El acceso a la información pública es uno de los elementos básicos de un régimen representativo y republicano, ya que permite un fortalecimiento del sistema democrático, y la posibilidad de que los ciudadanos conozcan debidamente el funcionamiento del Estado, siendo un derecho fundamental del hombre y de la sociedad, el derecho de saber.

Ese derecho estuvo siempre limitado, aunque muchos países fueron pioneros en permitir el acceso a los documentos públicos, como Suecia que lo hizo en 1766. Francia en 1794 también legisló precariamente sobre el acceso a la información, y todos sus gobiernos, con diversas alternativas, reconocieron la legitimidad de ese, derecho, pero recién en la segunda mitad del siglo XX, comenzaría a gestarse una corriente liberalizadora que comenzó con Finlandia en 1951, siguió con Estados Unidos quienes adoptaron el Freedom of Information Act (FOIA) en 1966, luego Dinamarca y Noruega en 1970, Francia y Holanda en 1978, Australia y Nueva Zelanda en 1982; y Canadá en 1983.

Muchos países de Europa del este, modificaron sus legislaciones de acceso a la información, después de la caída del Muro de Berlín de allí se produjo una avalancha de normas en distintos lugares, estando en vigencia en el año 2012 en 88 países. Si nos detenemos en lo ocurrido en Latinoamérica, podemos señalar que han dictado leyes de acceso a la información, Perú, México y Panamá (2002); Ecuador y la República Dominicana (2004), Honduras (2006), Nicaragua (2007), Uruguay, Chile y Guatemala (2008), y El Salvador, hace dos años.

El Consejo de Europa puso un documento de acceso a la información a la firma de los estados miembros en el año 2009, porque se ha considerado que es un derecho humano fundamental. Y al respecto es conocida la propuesta que efectuara el relator especial de la ONU Louis Joinet, que contenían tres principios básicos a los que deberían tener los ciudadanos en cualquier sociedad democrática: el derecho de saber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Es por eso que el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano por expertos de la ONU, la OEA y la UNESCO. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en fallos como "Claude Reyes vs. Chile y Gomes-Lund y al. (Guerrilha do Araguaia) vs. Brazil, y la Corte Europea de derechos Humanos en el fallo "Társasag a Szabadságjogokért c/ Hungría".

En el año 2009 la Asamblea General de la OEA, le encargó al Departamento de Derecho Internacional (resol. AG/RES 2514 (XXXIX-O/09) la elaboración de un proyecto de ley modelo sobre Acceso a la Información y una guía para su adecuada implementación con la colaboración del Comité Jurídico Interamericano, la Relatoría Especial

sobre la Libertad de Expresión, teniendo en cuenta las convenciones internacionales y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile ya citado.

Hemos utilizado algunas normas contenidas en esa ley modelo, pero básicamente se trata de un proyecto donde se establecen una serie de mecanismos, para evitar que se continúe con la falta de transparencia en la información pública, permitiendo el acceso a la misma a todos los ciudadanos, con algunas excepciones que también están contenidas en casi la totalidad de leyes similares que se han consultado. Sin embargo ha quedado claramente explicitado en la normativa, que tales excepciones no rigen en ningún caso para el Poder Judicial, el Congreso Nacional y la Auditoría General de la Nación, los que no deberán ser objeto de restricción alguna en la información que soliciten, como ocurre hasta ahora.

Entendemos que el proceso que permita el acceso a la información pública debe tener reglas claras, precisas, justas y razonables, con plazos determinados y excepciones que están relacionadas con ciertos actos que por sus características deben tener cierta confidencialidad y no pueden ser puestos libremente al conocimiento de todos. Pero tales excepciones no pueden ser utilizadas discrecionalmente por los poderes públicos para justificar cualquier negativa. Por ello se crea una Comisión de Información que será la encargada de controlar la estricta aplicación de las normas contenidas en el proyecto, y a las que se podrá recurrir, en caso de actos arbitrarios o irregulares, que le nieguen a un ciudadano la posibilidad de conocer toda la información a la que tiene derecho.

El acceso a la información es también una de las formas que permitirá acabar con la discrecionalidad con el que se manejan ciertos funcionarios en el ejercicio de su cargo, lográndose la transparencia necesaria en todo lo relacionado con los negocios estatales, acabando con un secretismo, que si bien es parte de nuestra historia, ha terminado por contaminar a toda la estructura administrativa, ejerciendo una suerte de dictadura informativa, que no permite conocer cómo se administra el patrimonio común, generando una forma de impunidad en todos aquellos que son responsables de las instituciones públicas, y no precisamente dueños de ellas, para manejarlas a su voluntad.

En razón de los fundamentos expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de Ley.

Fernando E. Solanas. –

(III)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

DIPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto. La presente ley fija los principios, las bases y las reglas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en las cuestiones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Art. 2º - Definición. Todos los actos y actividades del gobierno, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos al principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

CAPÍTULO I

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Art.3º - Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública según los términos de esta ley:

- a) Los organismos y/o entes de la administración central, descentralizada y entes estatales en general;
- b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
- c) El Poder Judicial;
- d) El Ministerio Público;
- e) El Consejo de la Magistratura;
- f) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo las empresas y las sociedades anónimas con participación estatal, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
- g) Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un dominio público. Quedan incluidas las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido contratadas por el Estado para la prestación de un bien o servicio en todo lo vinculado con el objeto de la contratación.
- h) Las organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, universidades y cualquier otra entidad privada a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado Nacional, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos.
- i) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
- j) Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;

- k) Las corporaciones regionales;
- l) Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones públicas;
- m) El Banco Central de la República Argentina.
- n) Los demás órganos de carácter federal creados por la Constitución Nacional;

TÍTULO II

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I. AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO

Art. 4º — Créase la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO, organismo descentralizado en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con autarquía económica y financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado, la que tendrá como misión:

- a) Impulsar la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y uso de vías para solicitar la opinión del público;
- b) Entender en todas las materias relativas al gobierno abierto y el acceso a la información pública
- c) Ser la autoridad de aplicación de la presente ley
- d) Ser la autoridad de aplicación del decreto número 1172 del 3 de diciembre del año 2003.

Art. 5º — Serán funciones de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO:

- a) Establecer los mecanismos digitales de diálogo que permitan la participación ciudadana en las políticas públicas.
- b) Poner a disposición de la ciudadanía información y datos en tiempo real sobre la actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- c) Impulsar la creación de servicios para que los ciudadanos y ciudadanas utilicen datos de las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la Administración Pública Nacional.
- d) Evaluar, clasificar y compilar la información que realizan los sujetos obligados.

- e) Dictar las normas aclaratorias y complementarias en materias relativas al gobierno abierto y el acceso a la información pública.
- f) Garantizar la efectiva apertura de los datos públicos que obran en el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- g) Impulsar iniciativas relacionadas con el Gobierno Abierto con los diferentes actores de la sociedad civil interesados en la temática.
- h) Formular recomendaciones a los sujetos obligados tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean.
- i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados y sobre el cumplimiento de esta ley.

Art. 6° — El gobierno y administración de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO estará a cargo de un Directorio integrado por UN (1) Presidente con rango de Secretario y DOS (2) Vocales con rango de Subsecretario, los que durarán CUATRO (4) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente. El Directorio formará quórum con DOS (2) de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. La totalidad de los funcionarios antes mencionados serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 7° - El Directorio de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO será asesorado por un Consejo Consultivo, el cual deberá estar integrado por reconocidas personalidades que acrediten experiencia y/o conocimiento en temáticas relacionadas con el Gobierno Abierto y el acceso a la información pública.

Art. 8° — El Directorio de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Dictar el reglamento interno del cuerpo.
- b) Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto de la AGENCIA.
- c) Delegar en el Presidente de la Agencia las facultades que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO
- d) Promover las relaciones institucionales de la Agencia y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.

e) Aprobar el plan estratégico de la Agencia como así también las estrategias de fomento de la inversión previa intervención del Consejo Consultivo.

f) Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento de la Agencia.

g) Elevar el anteproyecto de presupuesto del organismo.

h) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.

i) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

k) Requerir a los distintos organismos de la Administración Pública Nacional la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento de la Agencia.

l) Proceder anualmente a la confección y publicación de la Memoria de la Agencia.

Art. 9º — El presidente del Directorio de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la representación y dirección general de la Agencia, y actuar en juicio como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia. Podrá absolver posiciones en juicio por escrito, no estando obligado a hacerlo personalmente.

b) Ejercer la administración de la AGENCIA NACIONAL PARA EL GOBIERNO ABIERTO suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes y nombrar, contratar expertos nacionales o extranjeros, remover, sancionar y dirigir el personal.

c) Elaborar el plan operativo anual.

e) Convocar y presidir las sesiones del Directorio con voz y voto.

f) Designar y convocar al CONSEJO CONSULTIVO por lo menos UNA (1) vez cada TRES (3) meses y someter a su consideración las cuestiones respectivas.

h) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia.

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Art. 10° - Solicitud. La solicitud de información será presentada ante el sujeto obligado que posea o se presuma que posee la información. La presentación podrá realizarse en forma escrita, por vía electrónica o correo postal, verbalmente, por vía telefónica o por cualquier otro medio análogo.

El solicitante deberá brindar una descripción suficiente como para permitir la individualización de la información requerida, y sus datos de contacto para una eventual consulta o envío de la información solicitada. La solicitud de información no podría ser sujeta a ninguna otra formalidad. El solicitante no deberá manifestar las razones que motivan la solicitud ni la identificación del requirente.

Al recibir la solicitud, el agente deberá indicar al solicitante su número de gestión y comunicarle que se encuentra a su disposición una constancia de solicitud para su seguimiento, que podrá ser entregada al requirente a través de un medio electrónico o físico. En dicha constancia deberá detallarse: número de gestión, datos del organismo receptor, el objeto de la solicitud, datos del agente que recibió la consulta, fecha de ingreso del requerimiento, y cualquier otro dato que se considere pertinente.

Art. 11° - Plazos. El sujeto obligado deberá responder a las solicitudes de información en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles. De existir circunstancias que dificulten la reunión de la información en el plazo estipulado, éste podrá ser prorrogado de manera excepcional por otros diez (10) días hábiles. En éste caso, el sujeto requerido deberá informar el uso de la prórroga al requirente de la información y fundar las razones que motivaron la decisión.

Serán consideradas circunstancias especiales para la utilización de la prórroga:

a) La necesidad de recurrir a documentos escritos de gran volumen, o que se encuentren archivados o ubicados en otros establecimientos alejados de la oficina en donde se encuentre el Responsable de Acceso a la Información o sujeto obligado;

b) Que para responder a la solicitud sea necesaria la consulta de gran cantidad de informes de distinta fuente o naturaleza, o que el tratamiento de las fuentes consultadas o la elaboración de la respuesta requieran de una gran labor posterior de análisis o tratamiento;

c) Si hubiese necesidad de realizar consultas a un tercero o a otro organismo;

Si el sujeto requerido, de manera fundada, sostuviera que no es el responsable de brindar la información solicitada, deberá comunicar esta circunstancia al solicitante y remitir el pedido a la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. Se deberá poner a disposición del solicitante una constancia de remisión, en la

que consten los fundamentos, la fecha y los datos del agente encargado de la remisión.

La Autoridad de Aplicación deberá, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, reasignar el pedido y enviárselo al correspondiente sujeto obligado. El nuevo sujeto obligado deberá ponerse en contacto con el requirente de la información para comunicarle la reasignación de la solicitud y poner a su disposición una nueva constancia de pedido.

El nuevo sujeto obligado deberá resolver la solicitud de información en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados desde la recepción del pedido enviado por la Autoridad de Aplicación.

En caso de que por razones de necesidad y urgencia el plazo previsto por esta ley pusiere en riesgo la utilidad y eficacia de la respuesta, el solicitante podrá solicitar un procedimiento expedito, comunicando al agente los fundamentos de dicha necesidad, que a pedido del solicitante podrán ser mantenidos en confidencialidad. El agente deberá analizar los fundamentos y el objeto del pedido en el acto y manifestarse en favor o en contra de la adecuación de la solicitud de procedimiento expedito o de la posibilidad de su realización. En caso de corresponder, el sujeto obligado deberá responder en un plazo menor a los diez (10) días hábiles, basándose en la necesidad del solicitante y la naturaleza y complejidad del pedido. En caso de negativa, deberá darse intervención a la Autoridad de Aplicación.

Art. 12º - Respuesta. La información solicitada será puesta a disposición del solicitante para su consulta priorizando la integridad, eficiencia y celeridad de la respuesta. La misma será entregada en el medio elegido por el solicitante dentro de los medios disponibles.

El costo de su reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo la información solicitada; el costo del envío, de haberlo requerido, no deberá exceder el costo que éste pudiera tener en el mercado. El envío electrónico de la información será sin costo. A pedido del solicitante, o cuando el valor de la reproducción de la información y/o envío ascienda a valores irrazonables, se deberá contactar al requirente para comunicarle el presupuesto de la reproducción en el medio solicitado. El solicitante podrá, en este caso, aceptar el presupuesto o solicitar la información por otro medio.

Las autoridades públicas podrán absorber los costos de reproducción y/o envío de la información cuando el solicitante sea un ciudadano de ingresos anuales menores a una cantidad establecida por Autoridad de Aplicación o una entidad civil sin fines de lucro que requiera la información con fines benéficos o sociales.

En todo caso, debe velarse el respeto por el principio de gratuidad.

Los solicitantes cuentan con el derecho a realizar consultas posteriores relacionadas con la información concedida, así como a solicitar la revisión y/o expansión de la información brindados, siempre que ésta exista y que no exceda el objeto de la solicitud original. De excederse el objeto de la solicitud original, el solicitante deberá

efectuar un nuevo pedido de información. El sujeto obligado deberá conceder la consulta, revisión y/o expansión de la información en un plazo no superior a los dos (2) días hábiles.

La solicitud de información no implica la obligación del sujeto obligado de producir el material con que no cuente al momento de realizarse el pedido, salvo que el ente u organismo estuviera legalmente obligado a producirla.

Toda respuesta, tanto las que concedieren la información como aquellas que la denegaran, debe incluir una leyenda que indique las vías de reclamo previstas por la presente ley que se encuentran disponibles en caso de no resultar satisfactoria la respuesta brindada al solicitante, reproduciéndose textualmente los artículos que regulan dichas vías de reclamo.

Art. 13° - Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud por acto fundado, si se verificara que la misma no existe -y el Estado no estuviera obligado a producirla- o que está incluida dentro de alguna de las excepciones explícitamente previstas en la presente ley. El sujeto obligado deberá entregar al solicitante una constancia de la denegatoria con sus fundamentos. En caso de tratarse de una denegatoria parcial, deberá entregarse constancia de la misma junto con la información brindada. La denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo.

En el caso de los sujetos obligados que no fueran entes u organismos públicos, será responsable de la denegatoria de una solicitud de información a aquel que ocupe el cargo de gerente o director general o cualquier miembro del directorio o consejo de administración.

Cuando fundándose en alguna de las excepciones previstas en el artículo 15° de la presente se disponga la denegatoria de una solicitud en beneficio de la protección del interés de un tercero, y el solicitante recurra dicha denegatoria, deberá notificarse al tercero a instancias de que pueda defender su derecho durante el proceso de apelación.

En caso de denegatoria o de incumplimiento injustificado de una solicitud, el solicitante podrá recurrir a través de las vías de reclamo dispuestas por la presente ley. El solicitante de la información, la autoridad de aplicación y los terceros interesados podrán actuar instando los procedimientos administrativos y judiciales.

Tanto la obstrucción, ambigüedad, falsedad, ocultamiento o falta de respuesta en el plazo indicado por parte del sujeto obligado como la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que afecte el regular ejercicio del derecho de acceso a la información de manera arbitraria, serán considerados como denegatorias injustificadas y violatorias de la presente ley. En dichos supuestos quedará habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes.

Art. 14° - Responsabilidad de los funcionarios. Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre en las prescripciones del artículo 13° será pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 25.164, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen a los que se encontrara sujeto el funcionario

Responsabilidad de los entes. Los organismos y/o entes públicos y privados y demás sujetos obligados que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las sanciones administrativas previstas por la Autoridad de Aplicación que corresponda a su jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

Las sanciones aplicadas a los sujetos obligados serán publicadas de modo permanente en la página web de la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO II. EXCEPCIONES

Art.15° - Excepciones. Las autoridades públicas solo podrán negarse a brindar la información requerida únicamente cuando una ley, decreto o resolución ministerial así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Información expresamente clasificada como reservada, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación.

b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.

c) Secretos comerciales, industriales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos que se encuentren registrados o cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado; o cuando su revelación pudiera provocar importantes pérdidas o ganancias financieras, pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos entre partes. Sin embargo, deberá revelarse la información cuando el interés público comprometido fuera superior a los intereses particulares de terceros;

d) Información sensible sometida al análisis de la Unidad de Información Financiera y cuya revelación pudiera comprometer su función;

e) Información preparada por los órganos de la Administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos organismos y que se refirieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;

f) Información obtenida con carácter reservado por organismos de investigación y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito sus funciones;

g) Información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, o cuando la divulgación de la información pudiera comprometer el pleno ejercicio del derecho de defensa de las partes.

h) Información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la Ley 25.326, cuya publicidad constituyera una vulneración al derecho a la intimidad y al honor, salvo que se contara con expreso consentimiento de la persona a la que se refiriera la información solicitada;

i) La divulgación que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

j) La información protegida por el secreto profesional;

k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada; Los funcionarios facultados a denegar el acceso a la información sólo podrán hacerlo bajo circunstancias establecidas en la presente ley, cuando la restricción fuera legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática.

Cuando la divulgación de la información no fuera estrictamente obligatoria y existiere riesgo de que su divulgación pudiera recaer en uno de los supuestos de excepción, el agente responsable deberá notificar a la Autoridad de Aplicación y al sujeto obligado o persona privada involucrada cuyo interés pudiera verse comprometido para que defienda su derecho mediante las vías dispuestas por la presente ley. Entretanto, deberá darse acceso al solicitante a toda la información no reservada que pudiera corresponder con sus requerimientos.

Art. 16° - Información parcialmente reservada. Cuando existiera un documento que contuviera parte de información de carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente ley, el sujeto obligado debe permitir el acceso y reproducción de la parte del documento que no revirtiera ese carácter. En cualquier caso deberá indicarse qué parte del documento ha sido mantenida bajo reserva, así como la extensión y ubicación de la información omitida, siempre que ese dato no atentare contra el interés protegido por la excepción.

Art.17° - Restricciones al acceso a la información. Requisitos.

Cuando el sujeto obligado se negare a brindar la información en virtud de algunas de las excepciones previstas en el artículo 15° de la presente ley, ya sea total o parcialmente, deberá entregar al solicitante una constancia donde figuren:

a) Identidad y cargo de la autoridad que disponga la denegatoria;

- b) Identificación del ente u organismo responsable de generar la información reservada;
- c) De corresponder, la fecha de clasificación de la información como reservada, y la fecha o evento que disponga el fin de la reserva;
- d) Las razones que fundamentan la clasificación;
- e) Un detalle que especifique qué partes de la información solicitada son sometidas a reserva y cuáles están disponibles para el acceso público.

Art. 18º - Duración de la reserva. Al disponerse la reserva de la información podrá indicarse una fecha o evento tras lo cual la información será de acceso público en los términos de la presente ley. El plazo de reserva no podrá exceder los diez (10) años.

Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciera una fecha o evento que le pusiera fin a la misma, la información será de libre acceso a los tres (3) años desde el momento en que ésta fue establecida.

En caso de que cesaran las circunstancias que fundaron la restricción o hubiese razones de interés público superiores a las causas que dieron lugar a la reserva, la información se considerará pública, a pesar de que no se haya cumplido el plazo u ocurrido el evento establecido en la norma.

La reserva podrá extenderse por dos períodos sucesivos que no podrán exceder los diez (10) años cada uno, siempre que se cumpla con lo establecido por esta ley. Ninguna información podrá mantener el carácter de reserva por más de treinta (30) años desde su primera clasificación como tal, a excepción de la que hubiera sido proporcionada por una fuente diplomática. En este caso, la reserva de información no podrá ser superior a cincuenta (50) años.

En ningún caso una información que hubiera sido abierta al acceso público podrá ser nuevamente reservada.

Art. 19º - Apertura al público de la información clasificada como reservada. Durante los doce (12) meses de entrada en vigencia de la presente ley, toda información que hubiese sido establecida como reservada y hubiese cumplido el plazo de los diez (10) años, será de acceso libre para el público, salvo en los casos en los que fuera expresamente reclasificada. La información reservada será considerada de acceso público aun cuando no se hubiere cumplido el plazo estipulado en el primer párrafo, cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su reserva, o cuando concurriera un interés público superior a dicha restricción

CAPÍTULO III.

VÍAS DE RECLAMO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ACCIÓN JUDICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Art. 20° - Recurso administrativo. En caso de denegación de una solicitud de información o de cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, el requirente podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante la autoridad de aplicación correspondiente. Cuando se trate de un incumplimiento de las medidas de transparencia activa, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento.

Art.21° - Requisitos formales. El recurso por incumplimiento será presentado por escrito y debe identificar a los sujetos obligados frente a los cuales se haya hecho la solicitud, la fecha de presentación y el número de gestión. Deberá consignarse también el nombre completo del solicitante y su domicilio procesal. El recurso deberá acompañarse con la constancia de solicitud entregada por el sujeto obligado y, en caso de existir, la respuesta que éste le hubiese otorgado.

Art. 22° - Audiencias entre partes. La Agencia Nacional para el Gobierno Abierto, como autoridad de aplicación de la presente ley, podrá mediar entre el solicitante y el sujeto obligado y/o el tercero interesado con el objeto de permitir el acceso a la información, sin necesidad de que se hubiese agotado la instancia administrativa. En cualquier caso, el requirente podrá negarse a participar de la mediación o finalizarla en cualquier momento del proceso.

Art. 23° - Resolución del recurso interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del recurso, la autoridad de aplicación deberá decidir:

- a) Rechazar el recurso;
- b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.

El rechazo deberá ser fundado. Serán motivos de rechazo:

- a) Cuando se hubiese presentado fuera del plazo previsto;
- b) Cuando ya hubiera resuelto la misma cuestión en relación respecto del mismo requirente y de la misma información;
- c) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la presente ley;
- d) Cuando se trate de información reservada o enmarcada dentro de los supuestos de excepción previstos por la ley;

La decisión de la autoridad de aplicación deberá ser notificada en un plazo de 3 (tres) días hábiles al solicitante de la información y al sujeto obligado, y deberá ser publicada en su página web.

En caso de una resolución favorable al solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido deberá entregar la información solicitada en un

plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde la notificación de la autoridad de aplicación.

En caso de rechazarse el recurso interpuesto por el solicitante, la decisión administrativa será apelable por vía judicial. En este supuesto, la notificación deberá informar sobre el derecho a recurrir a la Justicia, la jurisdicción correspondiente y los plazos del proceso.

Art. 24º - Acción judicial de acceso a la información. El solicitante de la información pública, sea una persona física o jurídica, pública o privada, cuyo derecho de acceso a la información pública hubiese sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de acceso a la información.

Las actuaciones judiciales que se inicien en virtud de lo establecido por esta ley gozarán del beneficio de la justicia gratuita. Si la parte demandada demostrara mediante incidente la solvencia de la parte actora, este beneficio quedará sin efecto.

Art. 25º - Trámite. La acción judicial se presentará ante los tribunales de Primera Instancia con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal cuando el obligado sea un ente u órgano estatal, y en los Tribunales Civiles y Comerciales Federales, cuando el obligado sea un ente público no estatal o ente privado, siempre que se encuentre agotada la vía administrativa.

La acción de acceso a la información tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley. Cuando la acción de acceso a la información sea motivada por un caso de denegatoria injustificada según lo dispuesto por el artículo 13º de la presente, la misma deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los cuarenta (40) días hábiles contados, según corresponda, a partir de la recepción de la respuesta denegatoria o del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley y siempre que no se hubiera elegido recurrir por vía administrativa. En este último caso, la apelación se regirá como en los demás supuestos.

En los demás casos, la acción de acceso a la información deberá ser interpuesta dentro de los treinta (30) días hábiles de recibida la notificación de la resolución que rechace el recurso administrativo previsto en el artículo 20º o el vencimiento del plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación administrativa, de acuerdo con lo establecido por la presente ley;

El demandante deberá informar si ha iniciado otra acción con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.

De existir un tercero involucrado cuyos intereses pudieran verse comprometidos o en cuya defensa se estipulara la negatoria según lo

dispuesto por esta ley, se deberá notificar al mismo para que forme parte del proceso como tercero interesado.

Art. 26° - Carga de la prueba. La carga de la prueba de la existencia de una de las excepciones previstas en esta ley recaerá en el sujeto obligado que sea objeto de la demanda o de la autoridad pública. En particular, el sujeto o la autoridad deberán establecer:

- a) Que la excepción se ajusta a las dispuestas por la presente ley;
- b) Que la divulgación de la información puede causar un daño sustancial a un interés protegido por la ley; y
- c) Que la probabilidad y el grado de éste daño es superior al interés público en la divulgación de la información.

CAPÍTULO IV

TRANSPARENCIA ACTIVA

Art. 27° - Los sujetos obligados establecidos en el artículo 3° deberán prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información para asegurar un acceso fácil y amplio. Para ello deberán implementarse los medios electrónicos necesarios que permitan cumplir con lo dispuesto en la presente ley.

Los sujetos obligados deberán digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia total de la información disponible en formato digital y posibilitar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5° de la presente ley.

Art. 28° - Los sujetos obligados deberán desarrollar sitios de internet que permitan el acceso a la información de forma transparente, clara y en lenguaje de simple comprensión. Además, deberán instrumentar los medios necesarios para que la búsqueda y utilización de información a través de medios electrónicos permita:

- a) La grabación de informes en formatos electrónicos, abiertos y sin protección, a fin de facilitar el análisis de la información;
- b) El acceso remoto a través de sistemas de internet en formatos abiertos, estructurados y legibles en computadoras;
- c) Divulgar con detalle los formatos utilizados para la estructuración de la información;
- d) Garantizar la autenticidad e integridad de las informaciones disponibles;
- e) Indicar lugar e instrucciones que permitan al interesado comunicarse por vía electrónica o telefónica con el organismo o entidad titular del sitio;

Art. 29° - Además de lo dispuesto en el artículo 28°, los sujetos obligados deberán publicar en forma obligatoria en sus respectivas páginas web, de manera accesible, gratuita, actualizada y procesable por otros medios, la siguiente información:

a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Indicando dónde y cómo deberá realizarse la solicitud y los costos previstos de la reproducción;

b) La estructura orgánica, funciones y atribuciones;

c) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos y los procedimientos que se siguen para tomar decisiones;

d) El marco normativo que les sea aplicable;

e) La nómina de autoridades y personal permanente, transitoria o por una relación contractual, incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón;

f) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;

g) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;

h) Transferencia de fondos, en cualquier concepto, provenientes de y dirigidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y los beneficiarios de las mismas;

i) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas proveedoras;

j) Todo acto o resolución, de carácter general o particular,

k) Los informes de los votos de cada miembro en todos los procesos de decisión de los organismos colegiados;

l) Los informes de auditorías y/o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;

m) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares;

n) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;

- o) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, o de alguna manera incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado;
- p) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
- q) Un registro de solicitudes de información y respuestas, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y la información divulgada;
- r) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado;
- s) Información sobre los procedimientos para presentar recursos de apelación o acciones judiciales de acceso a la información pública;
- t) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de información que publica.
- u) Las sentencias definitivas o resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así como los dictámenes del Ministerio Público, con omisión de los nombres, en los casos en que no procediere revelarlos por disposición de otras leyes o convenciones internacionales;
- v) Información que responda a las preguntas realizadas con mayor frecuencia;
- w) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública;

El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica, será libre y gratuito.

La Autoridad de Aplicación será la responsable de definir los esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser implementados obligatoriamente por los sujetos obligados.

Art.30º- Exhibición de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Agencia Nacional para el Gobierno Abierto y los sujetos obligados deberán exhibir en lugar visible del acceso al o a los edificio/s el texto de la presente ley.

Art.31º - Presentación de informes anuales. Antes del 1º de marzo de cada año, los sujetos obligados de los poderes y organismos contemplados en el artículo 3º incisos a), b), c) d) y e) deberán

presentar a la autoridad de aplicación un informe correspondiente al año calendario anterior. Este informe deberá contener:

- a) Cantidad de solicitudes de información recibidas;
- b) Cantidad de solicitudes respondidas, pendientes y el tiempo de respuesta de las mismas;
- c) Cantidad de denegatorias y los fundamentos de cada una de ellas;
- d) Cantidad de apelaciones administrativas y acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la presente ley y, en su caso, el resultado;
- e) Las mediaciones realizadas y el resultado de las mismas;
- f) Información sobre las sanciones disciplinarias;
- g) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de la ley.

TITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 32° - El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Art. 33° - La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 34° - El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional establecido en el Decreto 1.172/03 continuará vigente hasta tanto la autoridad de aplicación quede conformada.

Art. 35° - En todos los pliegos y contrataciones realizadas por el Estado debe agregarse una leyenda que explicita las condiciones de acceso a la información pública.

Art. 36° - Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.

Art.37° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan M. Abal Medina.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El derecho de acceso a la información pública se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional desde la reforma de 1994, cuando se incorporaron, en el artículo 75 inciso 22, los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. En tal sentido, el

derecho a la información se deriva de nuestro propio principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

Al referirnos a un derecho operativo, se torna imprescindible establecer una reglamentación para propender a su normal ejercicio, tal como ocurre en los países que sancionan leyes y emiten normas que fijan principios y criterios de acceso a la información pública.

En referencia al derecho de acceso a la información pública cabe destacar que no sólo permite el control de los actos de gobierno sino que posibilita también el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, tal como se prevé en el presente proyecto de ley. A su vez, el presente proyecto se complementa con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, toda vez que la misma establece en el Artículo 3° inciso g) que, entre sus principales objetivos, se encuentra garantizar el ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública.

Mediante la aprobación del presente proyecto de ley, nuestro país no sólo continúa ampliando la frontera de derechos y consolidando la plena aplicación de la legislación vigente, sino que se une al elenco de naciones de nuestra región que ya han avanzado en políticas similares a la contenida en la presente. En tal sentido, merece destacarse los avances que han realizado Brasil, Uruguay y Chile sancionando normas que regulan el acceso a la información pública como un bien público que debe ser resguardado y puesto a disposición de todas y todos los ciudadanos.

Para la redacción del presente Proyecto de Ley se consideraron las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en lo que concierne a encomendar a un organismo, sea el órgano garante o algún otro con amplias facultades, la obligación de evaluar la clasificación de la información que realizan los sujetos obligados, ya que no es posible la información si no se sabe si existe o en que sitio se encuentra. Sin un sistema que contemple la creación de activos de información, archivo, almacenamiento y clasificación uniformes se complejiza hacer válido el derecho a su acceso.

En tal sentido, se establece la creación de la Agencia Nacional para el Gobierno Abierto como Autoridad de Aplicación, con el objetivo de instaurar un órgano garante de Transparencia y Gobierno Abierto que impulse la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y la utilización de herramientas para solicitar la opinión del público, y a todo lo expresamente contenido en el Artículo 5° del presente.

A su vez, la propuesta contiene proposiciones y perspectivas aportadas por diferentes Organizaciones no Gubernamentales, miembros de la Sociedad Civil interesados en la temática, así como académicos y especialistas en la materia. Como se expresó anteriormente, se recoge asimismo el invalorable aporte de la Ley Modelo de la OEA, elaborada en 2010 por expertos nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, se estudiaron e incorporaron propuestas de representantes legislativos con el objetivo de lograr un

texto normativo abarcativo y plural. Respecto a esto último, vale destacar los aportes que han realizado y continúan efectuando los legisladores interesados en la temática, entre los cuales quiero mencionar los proyectos que han servido de referencia a la presente, fundamentalmente los de la diputada Diana Conti, el diputado Manuel Garrido y el senador Rubén Giustiniani (y otros), todos ellos distintivos de la trascendencia de la temática para continuar avanzando en el camino de la vigorización de nuestro sistema democrático.

El presente proyecto de ley sostiene un concepto amplio de la información, esto es, entiende que el acceso está plenamente garantizado mediante la obligación explícita que permita contar con todos aquellos datos que soliciten los requirentes en todo tipo de formato.

Por su parte, el presente texto prevé mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y establece dispositivos de apelación simples y rápidos. Además, fija las funciones y la composición de la Autoridad de Aplicación y establece de forma manifiesta los aspectos vinculados a la solicitud de información, los plazos, las respuestas de las autoridades públicas, la denegatoria y las responsabilidades y la prevención de sanciones a los funcionarios y los sujetos obligados.

De la misma forma, el presente proyecto de ley establece claramente las excepciones y los sistemas de reserva y desclasificación; prevé la obligación de que los sujetos abarcados establezcan mecanismos de transparencia activa y se suma a aquellos países que avanzaron en la implementación de gobierno abierto, con los atestiguan numerosos ejemplos en América Latina y Europa.

Este tipo de iniciativas está en plena concordancia con las acciones que viene desarrollando el gobierno argentino en los últimos años. En efecto, desde el año 2003 el Gobierno Nacional ha llevado adelante políticas que promueven la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas. A través del Decreto N° 1172/2003 sancionado por el Presidente Néstor Kirchner, se estableció un mecanismo de acceso ciudadano a la Información Pública producido por el Poder Ejecutivo Nacional. Cabe destacar que el Poder Ejecutivo es el único poder del Estado que se autoimpone mecanismos de transparencia y apertura.

En consonancia con este decreto, durante los últimos doce años se trabajó en medidas tales como la publicación del patrimonio de los funcionarios públicos, mediante la sanción de la Ley 26.857. Mediante esta ley se estableció que las declaraciones juradas son efectivamente de público conocimiento y de libre acceso para cualquier persona que desee consultarlas, al tiempo que todas ellas deben estar disponibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (<https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj>), tal como instituye su reglamentación (<http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215002/norma.htm>).

Por su parte, durante el cumplimiento de mi rol como Jefe de Gabinete Ministros hemos trabajado en la promoción e implementación de políticas de Gobierno Abierto, con el objetivo de generar mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y una activa participación ciudadana para la co-creación de políticas públicas. Con similar objetivo, en el año 2012 se firmó la carta de adhesión de la República Argentina a la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), una organización internacional lanzada en el año 2011 que reúne a 64 países. En este marco, a través de Planes de Acción bianuales consensuados con las Organizaciones de la Sociedad Civil, los Gobiernos se comprometieron a la implementación de acciones y políticas de apertura y mejora de la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

A su vez, en el año 2013 presentamos nuestro primer plan de acción a partir del cual impulsamos acciones tales como la creación del Sistema Nacional de Datos Públicos (SINDAP) y del Portal Nacional de Datos Públicos, a través de la Resolución n° 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (el plan de acción puede consultarse aquí: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/legacy_files/count_ry_action_plans/Plan%20de%20Accio%CC%81n%20ARGENTINA.pdf). El objetivo, en todos los casos, fue fomentar una cultura favorable a la apertura y reutilización de los datos públicos, transparentar la gestión y promover la rendición de cuentas y la colaboración de la ciudadana para la creación de políticas públicas.

Asimismo, a través de la Reglamentación N° 893/12 del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (Decreto N° 1023/2001), se estableció que las contrataciones comprendidas en ese régimen deben realizarse en formato digital, obligando a los organismos a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación. De esta forma se garantiza la disponibilidad de toda la información del proceso de contrataciones públicas en Internet, generando una absoluta transparencia y control ciudadano sobre las compras que realiza el gobierno.

Como se observa, es transcendental sancionar una ley de acceso a la información pública, garantizar su efectiva observancia y continuar transitando el sendero hacia formas más democráticas de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Para lograr tal objetivo será imprescindible generar los consensos suficientes para que los representantes del pueblo y de las provincias trabajemos sólo para que la apertura de la información no se limite exclusivamente a las fronteras del Poder Ejecutivo, sino que contemple a todos los poderes del Estado, sin excepciones.

Por todo lo expuesto les solicito a mis colegas que me acompañen sancionando el presente proyecto de ley.

Juan M. Abal Medina.-

(IV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TITULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto y alcance

Art. 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.

Art. 2º. Alcance. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma comprensible, completa, veraz, oportuna y adecuada. El derecho que regula esta ley es un derecho humano fundamental y por tal motivo no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten.

Art. 3º. Definición. A los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato o conocimiento que conste en un documento, cualquiera sea su soporte, que hubiere sido o debiera ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control, cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que sirviere de base para una decisión de naturaleza administrativa.

CAPÍTULO II

Propósitos y principios básicos

Art. 4º. Propósitos. Son propósitos de la presente ley:

- a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
- b) Proveer procedimientos eficaces y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por la presente ley;
- c) Promover la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función pública;
- d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
- e) Sentar las bases para la práctica de rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados;

- f) Fomentar una correcta gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.

Art.5°. Principios Básicos. El cumplimiento de lo que establece la presente ley se rige por los siguientes Principios Básicos:

- a) Máxima apertura de la información: toda información pública es accesible y está sujeta a un sistema restringido de excepciones, que se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes y deberán ser fundadas por el funcionario que la invoque;
- b) Transparencia activa: toda información pública debe estar actualizada y a disposición permanente de la ciudadanía, para hacer efectivo el derecho de las personas a conocer y vigilar la gestión de los intereses públicos;
- c) Promoción de gobierno abierto: el derecho de acceso a la información pública debe estar garantizado por los organismos públicos a través de la promoción activa de la apertura gubernamental y de la conciencia pública respecto a los alcances de la presente ley;
- d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública son excepcionales, establecidos únicamente por ley de la Nación y formulados por el sujeto responsable en términos claros y precisos;
- e) Informalidad y eficiencia en el acceso: la solicitud de acceso a la información pública debe tramitarse de manera oportuna y justa, en términos de igualdad, con la mínima formalidad que la haga procedente e identificando la información que se requiere sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna, así como tampoco requiere exigir patrocinio alguno. Los sujetos obligados garantizarán celeridad y economía procesal, sencillez y eficacia en las respuestas y en las restantes instancias de tramitación del pedido de acceso a la información pública. Cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta contará con la disponibilidad de una expedita actuación judicial;
- f) Información parcialmente pública. Sistema de tachas: Si algún dato o contenido de un documento que haya sido solicitado por un tercero reviste el carácter de secreto, reservado o confidencial en los términos previstos por esta ley, deberá ser tachado u ocultado para facilitar el acceso al resto de la información requerida;
- g) Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera copias físicas de la respuesta, en cuyo caso los costos no excederán los reales de reproducción y entrega de la información y serán a cargo del solicitante, de igual modo que, en su caso, los costos de envío. Los parámetros serán fijados por la reglamentación, que además establecerá un parámetro reducido de costos cuando el pedido de acceso a la información pública haya sido interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, siendo plenamente gratuitos para quienes acrediten certificado de pobreza;
- h) No discriminación: El acceso a la información pública está garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir expresión de causa o motivo de la solicitud;

- i) Responsabilidad: Los funcionarios públicos que incumplieran las obligaciones previstas por la presente ley estarán sujetos a las sanciones disciplinarias o penales que les correspondan;
- j) Conservación: La información es un bien público y por ello debe ser conservada y resguardada de manera adecuada durante el transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser prioritaria en los organismos públicos;
- k) Interés público superior: Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información;
- l) Precedencia de la transparencia (In dubio pro petitor): la interpretación de las disposiciones de esta ley y/o sus normas complementarias deberá ser efectuada en caso de duda siempre a favor del mayor alcance del derecho de acceso a la información pública.

CAPÍTULO III

Ámbito de aplicación

Art. 6º. Sujetos Obligados. Los sujetos obligados de la presente ley son:

- a) Los Organismos de la Administración Pública Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendidas las Instituciones de Seguridad Social;
- b) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, con las limitaciones establecidas en la presente ley;
- c) El Poder Legislativo de la Nación;
- d) La Auditoría General de la Nación;
- e) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
- f) El Ministerio Público de la Nación;
- g) Los Entes reguladores de servicios públicos;
- h) Las Universidades nacionales, institutos y colegios universitarios;
- i) Las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, sólo en lo que respecta a los fondos públicos comprometidos en la participación del Estado;
- j) Los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, comprendida cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
- k) Los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional en lo que respecta a los fondos públicos comprometidos;

- l) El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades bancarias que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público Nacional;
- m) Las instituciones privadas a las que se les haya entregado subsidios o aportes proveniente del Estado Nacional de manera directa o indirecta, o a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público;
- n) Las asociaciones empresariales, sindicales, partidos políticos y entidades u organizaciones privadas a las que se les haya otorgado o otorgaren subsidios o aportes creados por el Estado Nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos subsidios o aportes.

La enumeración precedente en ningún caso puede interpretarse como exclusión de sector alguno de la actividad estatal.

En lo que respecta a los sujetos comprendidos en los incisos b), c), d), e) y f) la obligación de proveer información pública queda restringida a la correspondiente a su actividad administrativa y a los fondos públicos comprometidos.

En el caso de los sujetos referidos en el inciso m) la obligación de proveer información queda restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con fondos públicos, a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado Nacional y a la atinente a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo.

En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.

CAPÍTULO IV

Obligación de transparencia activa

Art. 7º. Sistematización de la información. Los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información, como también su integración en línea a través de medios electrónicos, en los términos que dispone la presente ley y su reglamentación, a fin de asegurar un fácil y amplio acceso.

Los sujetos obligados deben, en los plazos que establezca la Autoridad de Aplicación, digitalizar la información que produzcan, obtengan, transformen o conserven.

Artículo 8º. Transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona en

forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y acceso expedito, a través de sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un vínculo de colaboración con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con capacidades especiales.

Art. 9º. Información a publicar. Los sujetos públicos obligados difundirán en sus respectivos sitios electrónicos toda la información correspondiente a sus funciones, actividades y ejecuciones presupuestarias de cada uno de los actos que realicen sus dependencias. La publicación de la información deberá estar actualizada en los sitios electrónicos de los organismos en períodos no mayores a los tres meses, de forma oportuna, adecuada y comprensible y asegurando su fácil identificación y acceso expedito, y contendrá al menos la siguiente información:

- a) Marco normativo del organismo;
- b) Estructura orgánica, misiones, funciones y atribuciones;
- c) Nómina de autoridades y personal que cumplan funciones de manera permanente, transitoria o bajo cualquier otra modalidad contractual, con detalle de sus respectivas responsabilidades y escalafón.
- d) Planificación de proyectos, planes, programas, metas y acciones que correspondan, con detalle de fechas de inicio y finalización y su correspondiente estadio;
- e) El presupuesto asignado y su ejecución en los términos previstos en la Ley de Administración Financiera o el régimen que la sustituya y la Ley de Presupuesto General de cada año, desagregada como mínimo en las siguientes categorías programáticas: obra, programa, subprograma, proyecto y actividad;
- f) Detalle de toda transferencia de fondos públicos con especificación de sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
- g) Detalle de contrataciones públicas con especificación de objeto y actos administrativos realizados para cada una de ellas;
- h) Nómina de permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas con especificación de beneficiarios, objetos y actos administrativos realizados en cada caso;
- i) Estadísticas de acuerdo a la competencia de cada organismo;
- j) Índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, como así también los requisitos y criterios de asignación para acceder a sus prestaciones;
- k) Publicidad de los mecanismos que faciliten la participación ciudadana en la toma de decisiones;
- l) Informes de auditorías o evaluaciones internas o externas referidas a los planes, programas, proyectos o actividades del propio organismo;
- m) Datos de contacto del o los funcionarios responsables de gestionar y responder las solicitudes de acceso a la información pública.

Toda la información publicada debe estar a disposición irrestricta de quienes soliciten el acceso a la información pública en cualquier tipo de soporte.

Se establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, desde el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

Art. 10°. Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados, así como la Autoridad de Aplicación, deben exhibir en sus oficinas de acceso y atención al público, en lugar visible, el texto de la presente ley junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de los Centros de Acceso a la Información Pública, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información solicitada y, de corresponder, de los costos de envío, conforme lo establezca la reglamentación.

CAPÍTULO V

Excepciones al deber de informar

Art. 11. Excepciones. Los sujetos obligados a brindar información pública sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando se tratare de información clasificada como secreta, reservada o confidencial por disposición expresa de una ley, o en los términos de la Ley 25.520;
- b) Cuando se tratare de información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
- c) Cuando se tratare de información producida por asesores jurídicos de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, o cuando la información pudiera afectar el derecho de defensa de las partes o privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
- d) Cuando se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la Ley 25.326, cuya publicidad constituyera una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que se contara con expreso consentimiento de la persona a la que se refiriera la información solicitada;
- e) Cuando se tratare de información que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
- f) Cuando se tratare de información protegida por el secreto profesional;
- g) Cuando se tratare de información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones internacionales.
- h)

Los supuestos previstos no podrán ser invocados como fundamentos de la denegatoria a una solicitud de acceso a la información pública cuando exista un interés público superior al tutelado por el presente artículo.

Toda la información que en algún momento fue secreta, reservada o confidencial, antes de ser destruida, debe ser digitalizada y puesta a disposición de la ciudadanía.

Art. 12. Determinación de excepciones. La decisión que, conforme al artículo precedente, establezca excepciones al acceso a la información pública, sólo podrá adoptarse en acuerdo de ministros y refrendada por el o los ministros del área al que pertenece la información clasificada junto con el Jefe de Gabinete de Ministros. Si no se cumple dicho requisito cualquier reserva es nula de nulidad absoluta.

En el caso de los demás sujetos obligados, la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad de los mismos.

Art. 13. Requisitos de la clasificación. La decisión que establezca excepciones al acceso a la información pública en los términos de la presente ley debe comunicarse al requirente con los siguientes datos:

- a) El organismo que dispuso la excepción;
- b) Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
- c) La fecha o el evento establecido para el acceso público a la información solicitada;
- d) Las partes de la información que se encuentran sometidas a la reserva y las que están disponibles para el acceso público.

Art. 14. Período de reserva. La información clasificada como secreta, reservada o confidencial tendrá tal carácter mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente declarada o reclasificada como secreta o reservada.

Art. 15. Límites de la excepción. No podrá invocarse el carácter de información secreta, reservada o confidencial ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

TITULO II

Autoridad de Aplicación

CAPÍTULO I

Autoridad de Aplicación. Creación.

Art. 16. Creación. Se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Defensoría del Acceso a la Información Pública, con el objeto de tutelar el derecho de acceso a la información pública y ejercer las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El objetivo fundamental de esta institución es la de asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.

Art. 17. Titular y Adjunto. Elección. Los funcionarios Titular y Adjunto del organismo se denominan Defensor del Acceso a la Información Pública y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública respectivamente, y son elegidos por Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación.

Art. 18. Comisión Bicameral. En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe proponer a las Cámaras los candidatos para ocupar los cargos de Defensor del Acceso a la Información Pública y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública.

Art.19. Procedimiento de Elección. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública serán elegidos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe proponer una nómina de candidatos para ocupar los cargos de Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública.
- b) El Poder Legislativo Nacional deberá publicar por el lapso de diez (10) días los nombres y los antecedentes curriculares de las personas propuestas por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo para ocupar los cargos de Defensores Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública, de manera de garantizar los mecanismos adecuados y suficientes para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del o los candidatos. Las presentaciones de interés deberán realizarse dentro de un período de tiempo no mayor a los cinco (5) días de finalizada la publicación.
- c) Vencido el plazo que establece el inciso precedente, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo deberá reunirse nuevamente con el objeto de evaluar las consideraciones presentadas respecto de los candidatos y seleccionar a tres (3) de ellos para presentar ante ambas Cámaras.

- d) Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, ambas Cámaras elegirán por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a dos de los candidatos propuestos. Resultará elegido Defensor del Acceso a la Información Pública quien mayor cantidad de votos haya obtenido y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública quien haya resultado segundo en la votación.
- e) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el inciso anterior debe repetirse la votación hasta alcanzar la misma.

Artículo 20. Duración. La duración del mandato de los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública es de cinco años, pudiendo ser reelegidos indistintamente por una sola vez según el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Art. 21. Calidades para ser elegido Defensor Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública. Puede ser elegido Defensor Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública toda persona que reúna las siguientes calidades:

- a) Ser argentino nativo o por opción;
- b) Tener 30 años de edad como mínimo;
- c) Acreditar trayectoria, compromiso y reconocimiento en la defensa de los valores republicanos y, en particular, del derecho de acceso a la información pública.

Art.22. Nombramiento. El nombramiento de los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública se instrumenta en resolución conjunta suscripta por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina, la que debe publicarse en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Poder Legislativo.

Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública toman posesión de su cargo ante las autoridades de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Art. 23. Del Defensor Adjunto. El Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública auxiliará al Defensor Titular en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal.

Art. 24. Remuneración. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública perciben la remuneración que establezca el Honorable Congreso de la Nación Argentina.

Art. 25. Incompatibilidades. Los cargos de Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública son incompatibles con el desempeño de cualquier otra actividad pública o comercial, docente o profesional y se encuentran vedados de ejercer actividad política partidaria.

La incompatibilidad para acceder a cargos electivos subsiste durante los dos años posteriores al cese de las funciones.

Dentro de los diez (10) días siguientes a los nombramientos y antes de tomar posesión de los cargos, los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública deben cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlos, presumiéndose en caso contrario que no aceptan el nombramiento.

Son de aplicación a los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 26. Actividad. La actividad de la Defensoría del Acceso a la Información Pública no se interrumpe en el período de receso del Congreso de la Nación Argentina.

Art. 27. Causales de cese. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Renuncia;
- b) Vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 28. Cese. Formas. En los supuestos previstos por los incisos a) y d) del artículo 27, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina.

En los supuestos previstos por los incisos c) y e) del mismo artículo el cese se decide por el voto de los dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina, previo debate y audiencia del interesado. En el caso del inciso c) la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente.

En caso de muerte de alguno de los Defensores Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública se debe proceder a su reemplazo provisorio según las normas establecidas en el artículo 23, promoviéndose en el más breve plazo una nueva designación conforme a lo previsto en el artículo 19 para completar el mandato inicial.

Art. 29. Inmunidades. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública no pueden ser arrestados desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito doloso, de lo que se debe dar cuenta a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina con la información sumaria del hecho.

Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia competente contra un Defensor del Acceso a la Información Pública por delito

doloso, el mismo puede ser suspendido en sus funciones por ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina hasta que se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.

CAPÍTULO II

De la Defensoría. Recursos humanos y materiales. Delegaciones.

Art. 30. Estructura. Funcionarios y empleados. Designación. Dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe establecer la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría del Acceso a la Información Pública.

Para cubrir todos los cargos de funcionarios y empleados de la Defensoría, el Defensor del Acceso a la Información Pública debe proponer a los presidentes de ambas Cámaras la nómina del personal que desea se le asigne funciones en dicho organismo. Ese personal debe revistar con anterioridad en la planta permanente de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional.

Art. 31. Reglamento interno. El reglamento interno de la Defensoría del Acceso a la Información Pública debe ser dictado por su titular y aprobado por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo.

Art. 32. Domicilio y delegaciones en el país. La Defensoría del Acceso a la Información Pública tendrá domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecerá al menos una (1) delegación en cada provincia de la República, debiendo ser la primera con domicilio legal en la ciudad capital de cada provincia.

Art. 33. Presupuesto. Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provienen de las partidas que las leyes de presupuesto asignan al Poder Legislativo de la Nación.

CAPÍTULO III

Competencias. Funciones. Informes.

Art. 34. Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Defensoría del Acceso a la Información Pública:

- a) Coordinar, impulsar y garantizar la implementación de las disposiciones de la presente ley;
- b) Supervisar el correcto funcionamiento de los Centros de Acceso a la Información Pública;
- c) Recibir, analizar y remitir a los sujetos obligados las solicitudes de acceso a la información pública recibidas en sus dependencias;
- d) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de acceso a la información pública y del refinamiento de los criterios de búsqueda;

- e) Promover e instrumentar un sistema informatizado de solicitudes de acceso a la información pública en el plazo de ciento ochenta (180) días desde la sanción de la presente ley;
- f) Dictar las normas interpretativas de la presente ley y las instrucciones para su aplicación, requiriendo a los sujetos obligados, si fuese necesario, que se ajusten a sus procedimientos para su adecuado cumplimiento;
- g) Formular advertencias, recomendaciones y recordatorios respecto a los deberes legales y funcionales a los sujetos obligados por la presente ley, y propuestas para la adopción de nuevas medidas;
- h) Difundir los principios básicos establecidos en la presente ley, así como los resultados de los estudios que encare o promueva y las propuestas que formule;
- i) Publicar los resultados de las solicitudes de requerimiento de información, en especial de las más frecuentes;
- j) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
- k) Recepcionar y centralizar las denuncias sobre infracciones a la presente ley, que deberá asentar en un registro público creado a tal efecto;
- l) Producir un informe actualizado de forma permanente acerca de los infractores y sancionados por incumplir lo dispuesto por la presente ley;
- m) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
- n) Impulsar las sanciones administrativas que correspondan a los sujetos públicos obligados en el caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente ley;
- o) Imponer las multas que correspondan a los sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos en el caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente ley;
- p) Promover y ejecutar capacitaciones en materia de acceso a la información pública y protección de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial;
- q) Colaborar con los sujetos obligados para contribuir en los procesos de adaptación de sus mecanismos a lo dispuesto por la presente ley;
- r) Dictar, ejecutar actos y celebrar contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
- s) Participar en conjunto con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de criterios de mantenimiento y catalogación de la documentación;
- t) Informar a la ciudadanía acerca de los procedimientos de desclasificación de información;
- u) Intervenir en casos de conflictos interpretativos sobre los alcances de las disposiciones de la presente ley;
- v) Intervenir y resolver sobre los recursos presentados por los requirentes.

Art 35. Informes. La Defensoría del Acceso a la Información Pública presentará anualmente antes del 31 de mayo de cada año un informe ante las Cámaras acerca de su labor realizada, que acompañará con

los informes anuales producidos por los Centros de Acceso a la Información Pública.

El informe debe contener un anexo, cuyos destinatarios serán ambas Cámaras, en el que se debe hacer constar la rendición de cuentas del presupuesto de la institución en el período que corresponda.

Los informes mencionados deben ser enviados, para su conocimiento, al Poder Ejecutivo.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejan puede presentar un informe especial.

La Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo es la encargada de relacionarse con la Defensoría del Acceso a la Información Pública e informar a las Cámaras en cuantas ocasiones sea necesario acerca de su desempeño.

CAPÍTULO IV

Centros de Acceso a la Información Pública

Art. 36. Creación. Los sujetos obligados por la presente ley deberán crear en un plazo no mayor a los treinta (30) días de elegida la autoridad de la Defensoría del Acceso a la Información Pública sus respectivos Centros de Acceso a la Información Pública, que tendrán como objeto la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos de la presente ley, de modo tal de garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, así como también su difusión y publicidad.

Art. 37. Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los Centros de Acceso a la Información Pública:

- a) Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;
- b) Cumplir con el procedimiento que establece el Título III de la presente ley;
- c) Instrumentar un sistema informatizado de solicitudes de acceso a la información pública en el plazo de ciento ochenta (180) días desde la sanción de la presente ley en coordinación con la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
- d) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de acceso a la información pública y del refinamiento de los criterios de búsqueda;
- e) Remitir la solicitud de acceso a la información pública a la dependencia correspondiente y remitir al requirente la respuesta otorgada;
- f) Publicar los resultados de las solicitudes de requerimiento de información, en especial de las más frecuentes;
- g) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
- h) Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información pública como un derecho fundamental;

- i) Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los documentos, así como en la organización de dependencias y entidades;
- j) Elaborar anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información, el que debe ser remitido a la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
- k) Conocer y resolver respecto de los recursos de incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en la presente ley;
- l) Cumplir con las resoluciones adoptadas por la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
- m) Elaborar su reglamento interno y designar a su planta de agentes;
- n) Establecer su proyecto de presupuesto anual.
- o) Cuando correspondiere, informar al público acerca de la desclasificación de información.

TITULO III

Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información Pública

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 38. Solicitud de información. La solicitud de información pública se podrá instrumentar ante el sujeto obligado o ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o bien entregada en sus sedes, conforme a lo establecido por la reglamentación.

La solicitud debe contener como mínimo:

- a) Nombre y apellido del requirente;
- b) Fecha y hora de la solicitud;
- c) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la reglamentación;
- d) Información de contacto a fin de garantizar la entrega de la información pública solicitada;
- e) Descripción de la información solicitada, en forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo previsto en el índice elaborado por el sujeto obligado;
- f) Consentimiento del solicitante del pago del costo de reproducción, si correspondiere, fijado por el sujeto obligado.

La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para iniciar el proceso de acceso a la información pública.

Art. 39. Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el requirente, a

solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.

Los sujetos obligados, a través de sus Centros de Acceso a la Información Pública, deben instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.

Art. 40. Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente se realizará de acuerdo a lo que establece el principio g) del artículo 5° de la presente ley.

La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, que demuestren la carencia de recursos suficientes; siendo gratuitos para quienes acrediten certificado de pobreza.

Artículo 41. Consentimiento de pago. Conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso f), se considera que el requirente ha consentido, al momento de solicitar la información, abonar el importe establecido por el sujeto obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a los criterios estipulados en el presente artículo.

En el caso de que el importe fijado signifique para el solicitante el pago de una suma considerable de dinero, el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se seguirá tramitando a menos que el requirente consienta en abonar el importe establecido.

Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.

Art. 42. Plazos. El sujeto obligado debe responder al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días. En ese caso, el funcionario responsable del Centro de Acceso a la Información Pública correspondiente debe comunicar la necesidad de prórroga al solicitante con copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, fundada en alguna de las siguientes circunstancias y detallando los motivos concretos de la prórroga:

- a) Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;
- b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un solo pedido;
- c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés directo en la determinación del pedido;

- d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer párrafo.

Art. 43. Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido a la Defensoría del Acceso a la Información Pública en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para que, en otro plazo no superior a los cinco (5) días hábiles, identifique y reenvíe la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información requerida.

Asimismo, el funcionario responsable del Centro de Acceso a la Información Pública comunicará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior, contados desde la fecha de recepción de la solicitud que le remitieran.

Art. 44. Solicitud de plazo menor. En caso de que el solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 42 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública acreditando las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. La Defensoría del Acceso a la Información Pública resolverá en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente, el plazo dentro del cual deberá cumplir con lo peticionado.

Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.

Artículo 45. Entrega de información pública. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

Art 46. Información parcialmente secreta, reservada o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar información deben permitir el acceso a la parte del documento requerido que no se encuentre alcanzada por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.

Art. 47. Producción de información. El sujeto obligado debe proveer la información solicitada, siempre que no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al requirente mediante resolución fundada con copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

Art. 48. Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en soportes distintos a los solicitados se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.

Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud del volumen, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.

Art. 49. Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no exista la exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley.

El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa o judicial.

Art. 50. Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, deben formularse por escrito, estar fundadas y remitirse copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública.

Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar que si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado podrá reclamar por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.

TITULO IV

Recursos

CAPÍTULO I

Recurso de incumplimiento

Art.51. Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá interponer ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública un recurso por incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración

de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos previstos en esta ley.

Art. 52. Transparencia activa. Cuando el recurso por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa podrá ser interpuesto en cualquier momento.

Art. 53. Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información y los datos de identificación del recurrente, fijando un domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del sujeto obligado.

Art. 54. Plazos para resolver. Improcedencia. La Defensoría de Acceso a la Información Pública tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente sólo cuando:

- a) Se interponga en el transcurso del plazo establecido en el artículo 42;
- b) Ya hubiera resuelto anteriormente de manera definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información solicitada;
- c) El sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta ley;
- d) El recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso;
- e) El supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.

Art.55. Trámite de recurso procedente. Declarado procedente el recurso, la Defensoría del Acceso a la Información Pública iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles.

Art 56. Datos personales. Si en la información pública solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos personales se dará vista del mismo a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, que podrá solicitar la información complementaria que considere pertinente para resolver el recurso y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el recurrente.

Art.57. Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación del descargo del artículo 51 o sustanciada la audiencia del Artículo anterior, la Defensoría del Acceso a la Información Pública resolverá el recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo ampliar dicho plazo por cinco (5) días hábiles, por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.

Art. 58. Resolución. La Defensoría del Acceso a la Información Pública al resolver el recurso de incumplimiento podrá:

- a) Desestimarlos;

- b) Ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la información pública al recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles, el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la complejidad del caso;
- c) Declarar que la información es secreta, reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter.

A posteriori notificará al recurrente y al sujeto obligado la resolución del recurso dentro del plazo de los tres (3) días hábiles de concluido el trámite, obligando en su caso al sujeto obligado a dar cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de producida.

CAPÍTULO II

Recurso judicial

Art. 59. Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a la información se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado por incumplimientos de la presente ley podrá interponer la acción de acceso a la información pública.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

Art. 60. Trámite de la acción. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley.

Art. 61. Plazos de acción. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud, del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley;
- b) La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

Art. 62. Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales del fuero contencioso administrativo federal cuando el sujeto obligado sea un ente u órgano estatal, y los tribunales del fuero civil y comercial federal, cuando el sujeto obligado sea un ente público no estatal o un ente privado.

TÍTULO V

Responsabilidad

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 63. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que les correspondan.

Las conductas consideradas faltas y sus correspondientes sanciones son las siguientes:

- a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días;
- b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y veinticinco (25) días.

Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.

El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la comisión de la falta y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario.

Art. 64. Excluidos. Quedan excluidos del régimen disciplinario del artículo precedente el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores nacionales, los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los Consejeros de la Magistratura de la Nación, los Auditores de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

Art. 65. Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios mínimo, vital y móvil.

Art. 66. Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en los sitios

electrónicos de la Defensoría del Acceso a la Información Pública y del Centro de Acceso a la Información Pública del sujeto obligado correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días a partir de su imposición.

TITULO VI

Disposiciones transitorias y finales

CAPÍTULO I

Disposiciones transitorias

Art. 67. Caducidad. La información secreta, reservada o confidencial que, a la entrada en vigencia de la presente ley tenga más de diez (10) años, con las limitaciones establecidas en esta norma y a excepción de la expresamente reclasificada, será puesta de inmediato al acceso público.

CAPÍTULO II

Disposiciones finales

Art. 68. Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Art. 69. Vigencia del Decreto 1172/03. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley deróguese el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el Decreto 1172 del año 2003.

Art. 70. Derogación. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 71. Adhesión. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen previsto en la presente ley.

Art. 72. Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a noventa (90) días de su entrada en vigencia.

Art. 73. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Norma E. Morandini. –

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Constitución argentina, al establecer en su artículo 1º el sistema republicano, considera al ciudadano en el centro de la vida pública. En la medida en que el sistema consagra la igualdad ante la ley, consagra igualmente la competencia del ciudadano a participar de la política, ya

que la información y la participación son inseparables del derecho personal y subjetivo a buscar y recibir información pública, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy ampliamente superado por el derecho colectivo de la sociedad a ser informada.

Ciudadanos informados y, por tanto partícipes, contribuyen a la transparencia, que constituye el corazón jurídico filosófico de la democracia. En tanto la mentira y el ocultamiento revelan una concepción autoritaria y un ejercicio de poder antidemocrático, la riqueza de la democracia radica en esa igualdad ante la ley y la aptitud para opinar y participar de las cuestiones que nos son comunes: la política. De modo que el acceso a la información es inherente a la vida republicana y al Estado democrático. El espacio público de las opiniones, el del debate y la prensa independiente, refleja quiénes somos como sociedad, en lo mejor y lo peor. Ese debate revela la fortaleza y calidad de la democracia.

El derecho de acceso a la información pública ha transitado un extenso proceso de reconocimiento y aplicación progresivo desde su formulación, en el Siglo de las Luces. En 1766 se sancionó la ley sobre libertad de prensa en Suecia, lo que le permitió constituirse en el primer país en favorecer el acceso a documentos públicos. Años más tarde, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano definió en su artículo 15 el derecho de pedir a cualquier agente público dar cuenta de su administración, lo que favoreció en la misma Francia que una ley, en 1794, estableciera el derecho de acceso a la información pública como un derecho cívico.

Ya en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, las corrientes en favor de las libertades y los derechos humanos dieron origen al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

El primer país del siglo XX en reconocer en su legislación el derecho de acceso a la información pública fue Finlandia, en el año 1951. Luego le siguieron Estados Unidos que instrumentó el "Freedom of Information Act (FOIA)" en 1966; Dinamarca y Noruega en el año 1970; Francia y Países Bajos en el año 1978; Australia y Nueva Zelanda en el año 1982 y Canadá en el año 1983.

El derecho al acceso a la información pública está contemplado, entonces, entre los derechos devenidos del primer documento legal sobre protección de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que derivara posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y más tarde en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y forma parte de los instrumentos que han fortalecido la legislación internacional sobre derechos humanos.

De igual modo ha sido definido por el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refiere a la Libertad de Pensamiento y Expresión, en su 1 ítem: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."

El derecho de acceso a la información luego fue ratificado en nuestro continente mediante la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios 1, 2 y específicamente el 3:

"1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (...)

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla."

Con el mismo espíritu fueron suscriptas las declaraciones resultantes de las conmemoraciones anuales del Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de la UNESCO: la Declaración de Brisbane "Libertad de información - El derecho a saber" del año 2010; la Declaración de Maputo "Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas" del año 2008 y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza del año 2005.

Estas declaraciones, inspiradas en principios democráticos, instan a los Estados a participar no sólo de su elaboración o a adherir a sus definiciones sino que además se comprometan de forma decidida a trabajar para garantizarlos, cada uno en sus respectivas naciones. Así, en la Cumbre Extraordinaria de la ciudad de Monterrey, México, realizada entre el 12 y 13 de enero de 2004, los Jefes de Estado se reunieron para "avanzar en la implementación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr el crecimiento económico con equidad y fortalecer la gobernabilidad de las democracias". En esa oportunidad, se firmó la Declaración de Nuevo León, que concentró la atención en tres áreas: "crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática." Nuestro país, representado por el Presidente de la Nación, y los líderes allí reunidos reafirmaron el compromiso con la Carta Democrática Interamericana, que reitera la firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación

para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.

Del mismo modo, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas declararon que "la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente. (...) El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información."

En este sentido y hasta el presente han avanzado con sus leyes en materia de acceso a la información pública países como Antigua y Barbuda, República Dominicana y Ecuador en el año 2004; Honduras en el año 2006; Nicaragua en el año 2007; Chile, Guatemala y Uruguay en el año 2008; Brasil y El Salvador en el año 2011 y Guyana en el año 2013. Con anterioridad ya lo habían hecho otros países de nuestro continente: EEUU en 1966 y Canadá en 1983; a los que le siguieron Colombia en el año 1985; Belice en 1994; Trinidad y Tobago en 1999; Jamaica, México, Panamá y Perú en 2002 y San Vicente y las Granadinas en 2003.

La incorporación de instrumentos legislativos modernos, consecuencia de la demanda ciudadana de las democracias desarrolladas, impulsó en nuestro país la inclusión del acceso a la información en la agenda pública. Con ese propósito, legisladores de diferentes pertenencias partidarias han aportado documentos y proyectos para garantizar el derecho. En la Cámara Baja son numerosos las iniciativas presentadas y que cuentan con estado parlamentario para abordar el debate, entre ellos las de los diputados Cuccovillo 9554-D-2014; De Ferrari 2993-D-2014; Bianchi 5549-D-2014; Bullrich 4570-D-2014; Lousteau y Carrizo 2993-D-2014; Zabalza y Ciciliani 2971-D-2014; Petri y Cobos 2691-D-2014; Stolbizer 1780-D-2014; Conti 1768-D-2014; Pais 1579-D-2014; Pérez 1476-D-2014; Carrió 1249-D-2014; Garrido 1091-D-2014; Camaño 1046-D-2014; Maldonado 4673-D-2013; Donda Pérez 4434-D-2013; entre otros. En tanto en la Cámara Alta también han presentado sus proyectos el Senador Giustiniani de la Provincia de Santa Fe, el Senador Naidenoff de la Provincia de Formosa, el Senador Morales de la Provincia de Jujuy, la Senadora Negre de Alonso de la Provincia de San Luis y el senador Solanas de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

También es de destacar que numerosas organizaciones de la sociedad civil han impulsado a los poderes políticos a debatir, sancionar, reglamentar y aplicar una ley de acceso a la información pública, entre ellas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Ejercicio Ciudadano de Rosario, el Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones (FoPreMi), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.

Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, aún no ha sido posible consagrar el marco jurídico y normativo que les garantice a nuestros ciudadanos el derecho de acceso a la información. Si bien permanece vigente el Decreto 1172/2003, que aplica el derecho sólo respecto a la información del Poder Ejecutivo Nacional, su aplicación ha sido deficiente en la mayoría de los casos y todavía no ha encarnado como obligación de todos los funcionarios públicos.

Es necesario destacar que en septiembre de 2010 el H. Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información pública. El proyecto se giró a la Cámara de Diputados, donde no fue tratado y perdió su estado parlamentario. Desaprovechada la oportunidad para debatir una norma que regulara el derecho de acceso a la información pública, nuestro país volvió a ser observado en el marco de los exámenes periódicos universales que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Noruega, Bélgica, Suiza y Canadá, quienes reclamaron específicamente a la Argentina sancionar una ley de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Por confundir prensa con propaganda fue en esta década cuando este debate no sólo perdió intensidad sino que se fue cancelando el acceso a la información pública. Ya no tan sólo para la prensa, que media entre la información del Estado y el ciudadano, sino para la misma función de control que asigna la Constitución al Parlamento. Fueron estos años en los que la ley de acceso a la información fue "colgada", en la creativa expresión de una decena de organizaciones que exhibieron trescientas perchas en las vallas frente al Congreso, en el año 2012. El que la ciudadanía y los mismos representantes legislativos deban acudir a la Justicia para obtener la información que el Estado oculta bajo siete llaves demuestra que, a más de treinta años de la democratización, Argentina ha quedado rezagada en relación al resto de los países de la región que promovieron la participación y el control ciudadanos. Un contrasentido de la época, ya que el mismo desarrollo de la informática ha favorecido ampliamente la búsqueda de datos y el acceso a la información. La cerrazón informativa y la propaganda personal de los funcionarios, en lugar de la obligatoria publicidad de sus actos, tergiversaron, también, la prensa y la política. Sin acceso a la información, las periodistas quedaron supeditados a las "operaciones" de los mercenarios de la información y a los malos políticos, que utilizaron la información personal, privada, como extorsión.

Como señalamos, la labor internacional ha sido ardua en torno a promover la sanción de una ley que regule en esta materia. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a través de diversas y reiteradas resoluciones, han abordado en numerosas oportunidades el reconocimiento del derecho de acceso a la información como “requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia”; entre ellas, la Resolución 1932 (XXXIII-O/03) del 10 de junio de 2003, la Resolución 2057 (XXXIV-O/04) del 8 de junio de 2004, la Resolución 2121 (XXXV-O/05) del 7 de junio de 2005 y la Resolución 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006.

En el mismo sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos encomendó, mediante la Resolución 2514 (XXXIX-O/09) del 4 de junio de 2009, al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que elaborara y formulara un proyecto de “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública” y una guía de implementación para proporcionar la hoja de ruta necesaria a fin de garantizar su funcionamiento en la práctica, en conjunto y con la participación de los Estados Miembros, la Secretaría General y representantes de la sociedad civil. Con idénticos objetivos, “proporcionar el marco jurídico necesario para garantizar la participación ciudadana en un sistema democrático, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar los derechos humanos.”

Los resultados producidos por el grupo de expertos, dentro de los cuales participaron dos argentinos de reconocida trayectoria en la protección de estos derechos -la Dra. Karina Banfi y el Dr. Eduardo Bertoni-, fueron recogidos en dos instrumentos finales, presentados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, que a su vez elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la cuadragésima sesión ordinaria de la Asamblea General celebrada en junio de 2010. La Asamblea General finalmente aprobó la Ley Modelo Interamericana mediante la Resolución 2607 (XL-O/10) y encargó a la Secretaría General prestar apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas sobre el acceso a la información pública.

La “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública” establece claramente los estándares en los que se debe basar toda legislación moderna de acceso a la información pública. El proyecto que presentamos intenta contemplarlos en su integridad y, sobre todo, en el principio insoslayable que la sustenta: el acceso a la información es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas.

De igual modo, hemos considerado otros instrumentos internacionales que han fijado las pautas necesarias para la elaboración de legislaciones idóneas, entre ellos: la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) elaborada por el Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de agosto de 2008, sobre Principios del derecho de acceso a la información; la Declaración de Chapultepec de 1994; los Principios de Johannesburgo de octubre de 1995 sobre la

Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información; los Principios de Lima de noviembre de 2000; los Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2008; o las reiteradas recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

El presente proyecto tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a todos los ciudadanos el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia activa en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.

Definido el acceso a la información pública como un derecho fundamental, se establecen sus alcances, se precisa quiénes están obligados a suministrarla y se promueve una autoridad de aplicación novedosa en términos de la legislación local e internacional.

De este modo, se consagra el principio de legitimación activa, que garantiza la posibilidad de solicitar y acceder a la información pública a todo ciudadano sin discriminación; y el principio de transparencia activa, que exige a los sujetos obligados a mantener la información a disposición permanente de la ciudadanía, de manera de facilitar tanto la transparencia en los actos de gobierno como el ejercicio de derechos y el monitoreo de políticas públicas. Es importante destacar que la consagración de una ley de acceso a la información pública implica también una decidida acción del Estado Nacional para promover la transparencia en los actos de gobierno, tan necesaria en estos tiempos en los que los actos de corrupción parecieran haberse naturalizado.

A fin de garantizar el ejercicio pleno, amplio y dinámico del derecho de parte de la ciudadanía hemos replicado los principios básicos recomendados en la materia: máxima apertura de la información, transparencia activa, promoción de gobierno abierto, alcance limitado de las excepciones, informalidad y eficiencia en el acceso, gratuidad, acceso a la información parcialmente pública, no discriminación, responsabilidad de los funcionarios públicos, conservación de la información, interés público superior del derecho de acceso, precedencia de la transparencia.

Uno de los aspectos más relevantes en toda legislación sobre el derecho de acceso a la información pública es el concerniente a la autoridad de aplicación, que debe reflejar los estándares de entidad única, autonomía operativa y autarquía financiera, características que han sido, por otra parte, las que han predominado en los modelos de Latinoamérica. En tal sentido proponemos la creación de una autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, que denominamos Defensoría del Acceso a la Información Pública, cuyo objeto es el de tutelar el derecho y ejercer las funciones que establecería la futura ley, sin recibir instrucciones de ninguna

autoridad. Se prevé que la Defensoría del Acceso a la Información Pública sea conducida por dos funcionarios: un titular y un adjunto, elegidos por la actual Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación creada por la Ley 24.284 y su modificatoria 24.379. Dicha Comisión tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento de elección de los funcionarios que conducirían la Defensoría, así como la de hacer cumplir los mecanismos de elección y selección, el tiempo de duración de los mandatos y las calidades que se deben reunir para conducir el organismo.

La Comisión Bicameral deviene de lo instituido en el artículo 86 de nuestra Constitución Nacional, que institucionaliza la figura del Defensor del Pueblo, y que le asigna entre sus misiones "la defensa y protección de los derechos humanos".

La creación de una nueva Defensoría que proteja y promueva el derecho de acceso a la información pública complementaría aquella misión, en consonancia con el mandato constitucional. Se propone como órgano independiente, con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Respecto de los funcionarios a cargo deberán cumplir la función principal de hacer efectivo el derecho de acceso a la información y garantizar el debido cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la futura ley.

A modo de ejemplos cabe mencionar que el órgano responsable de la aplicación de las normas referidas al derecho de acceso a la información pública en otros países cuenta con cuerpos colegiados o unipersonales. Chile, por caso, tiene un organismo conducido por cuatro funcionarios, Honduras por tres, México por cinco y Canadá por un organismo unipersonal.

En tanto la tutela del derecho se encuentra a cargo de la Defensoría del Acceso a la Información Pública, el proyecto propone la creación de los Centros de Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados, los que tendrán la responsabilidad de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos que establezca la ley, de modo tal de garantizar el ejercicio pleno del derecho, así como también su difusión y publicidad.

En razón de que la información a suministrar es pública, el presente proyecto define como sujetos obligados a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y todos los organismos creados por nuestra Constitución Nacional, tales como la Auditoría General de la Nación (artículo 85 CN); la Defensoría del Pueblo de la Nación (artículo 86 CN); el Consejo de la Magistratura de la Nación (artículo 114 CN) y el Ministerio Público de la Nación (artículo 120 CN).

Además, se establece la condición de sujetos obligados a las entidades de naturaleza pública o privada respecto de la información que generan por la ejecución de fondos públicos, o a quienes se les

haya otorgado mediante permisos, licencias, concesiones o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público, o la explotación de bienes de dominio público.

En particular, hemos incorporado a las entidades de naturaleza privada como sujetos obligados cuando cuenten en su poder con información de carácter público, que es aquella que se genera o produce al ejercer una función, explotación o servicio que ha sido delegado, otorgado, concedido o autorizado por el Estado Nacional; o aquella información producida por la ejecución de un subsidio, fondo o aporte del Estado Nacional.

Cabe destacar que el criterio para definir a los sujetos obligados resultan en concordancia con lo definido en la primera parte del Artículo 1° de la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”:

“Artículo 1. Derecho de Información y de Acceso a los Expedientes y Actas de carácter administrativo. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa”.

Por otro lado, el proyecto especifica que en ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. De manera de garantizar no sólo la promoción del acceso a la información pública de la prensa sin ningún tipo de restricción, sino a la vez de que su acceso se ajuste a los principios reconocidos internacionalmente de libertad de expresión, derechos humanos y democracia.

El Título Tercero del proyecto está dedicado a formular las reglamentaciones y procedimientos administrativos del acceso a la información pública que se deben cumplir para garantizar el derecho. Se proponen las formas de solicitud de la información, los plazos, la gratuidad, los costos en caso contrario, los tiempos de respuestas, las denegatorias y todo el procedimiento que tanto los requirentes como los sujetos obligados deben cumplir. Del mismo modo, se prevé recursos administrativos y judiciales por incumplimientos de lo preceptuado en el procedimiento de acceso a la información pública. En igual sentido, el proyecto refiere a las responsabilidades y sanciones que pudieren comprenderles a los funcionarios públicos o sujetos obligados por incumplimientos, como así también la obligatoriedad de dar a publicidad las sanciones firmes y definitivas que eventualmente se impongan.

Por otra parte, en concordancia con la llamada “cláusula federal” establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendemos necesario convocar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen propuesto, de manera de garantizar a la ciudadanía toda, en igualdad de condiciones, el derecho de acceder a la información pública.

Nuestra historia trágica está marcada por el ocultamiento y la mentira. Para cancelar la crítica y las limitaciones al poder, los gobernantes han caído en la tentación de perpetuar esa forma oscura en el manejo de las cuestiones públicas. En democracia, la luz pública sobre los actos de gobiernos es el mejor antídoto contra las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía, como la corrupción que corroe el sistema democrático y favorece la desafección de los ciudadanos en las cuestiones públicas.

Escribió Albert Camus: “La libertad no es sino la oportunidad de ser mejor”. Una frase sencilla para describir la evolución humana y el desarrollo de las sociedades. Así surgieron los derechos humanos, para dar respuesta al hombre sobre sus necesidades de libertad y protección de la prepotencia de los que utilizaron el Estado como poder contra esa libertad. En esa idea del derecho como expresión de la necesidad humana se entiende la importancia de dotar a la democracia argentina de un instrumento legislativo que, al garantizar a la ciudadanía su derecho a acceder a la información pública, dignifique su condición. Toda consagración de un derecho humano involucra aspectos éticos y filosóficos, ya que al reconocer la libertad de actuar, pensar y opinar que tienen los individuos obliga a la contrapartida jurídica para expresar esa libertad y esa necesidad.

Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Norma E. Morandini. –

(V)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto y Alcance. Definiciones

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el derecho de acceso a la información pública y la obligación del sector público nacional de hacer pública la información que esté bajo su control, custodia o posesión o que se haya producido por o para cualquier autoridad pública, como medio de promover la efectiva

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Art.2º.- Alcance. El derecho regulado en esta ley será de la más amplia aplicación posible, sobre la base del principio de máxima publicidad y no podrá ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten, por tratarse de un derecho humano fundamental en sí mismo y para la realización de otros derechos.

Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, recibir, buscar, acceder y difundir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna, con sujeción a un claro y preciso régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Art.3º.- Definición de información pública. A los fines de la presente ley se entiende por información pública todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o representado, que hubiere sido o debiera ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control, o cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa incluyendo las actas de las reuniones oficiales o cualquier tipo de dato producido, obtenido o en poder del Estado y demás sujetos obligados.

Dicha información por regla general es pública y se presume que debe estar disponible a la ciudadanía. Los respectivos funcionarios a cargo de entregarla preverán su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información deberá proveerse sin otras condiciones que las expresamente establecidas en esta ley.

Capítulo II

Propósitos y principios básicos

Art. 4º.- Propósitos. Los propósitos de la presente ley son:

- a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
- b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por ésta;
- c) Lograr la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se toman en el ejercicio de la función pública;
- d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
- e) Sentar las bases para la práctica de la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados; y

f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.

Art. 5º.- Principios Básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios básicos:

a) Presunción de publicidad: La publicidad de la información es la regla y el secreto la excepción. Por ello, toda información en poder, control o custodia del Estado o de los demás sujetos obligados se presume pública y los respectivos funcionarios a cargo deberán prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.

b) Máxima apertura y divulgación: Toda información en poder, custodia o bajo control de los sujetos obligados será accesible para todas las personas y estará sujeta a un sistema restringido de excepciones establecidas taxativamente en esta ley.

c) Alcance limitado de las excepciones: La negativa a brindar información debe estar fundada en alguna de las excepciones taxativamente previstas en la presente ley, comunicada de manera precisa y clara y bajo la responsabilidad del sujeto al cual se le requiere la información.

d) Informalidad: El acceso a la información se rige por el principio de informalidad. Ningún procedimiento formal puede poner en riesgo el ejercicio del derecho a acceder a la información pública. Los sujetos obligados no podrán rechazar una solicitud de información por el incumplimiento de algún requisito formal. Si alguna persona, por determinada circunstancia, no pudiera completar o redactar su pedido de información pública, el sujeto obligado y el organismo implicado, deberán instrumentar los medios para facilitar la presentación de las solicitudes de información.

e) Máximo acceso: Para garantizar el ejercicio del derecho, la información deberá publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.

f) Apertura: La información deberá ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos y que permitan su reutilización o redistribución por parte de terceros.

g) Eficiencia de la respuesta: Los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía procesal, sencillez y eficacia en todas las instancias de tramitación de las solicitudes de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta debe contar con la disponibilidad de una expedita vía recursiva suficiente.

h) Información parcialmente pública. Sistema de tachas: Si algún dato, comentario o contenido de un documento que haya sido solicitado por un tercero revierta el carácter de secreto o reservado por alguna de las

excepciones de esta ley, deberá ser tachado u ocultado para facilitar el acceso al resto de la información requerida.

i) Control: Será objeto de fiscalización permanente el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. Frente a resoluciones que denegaren solicitudes de acceso a la información, como al silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta podrá recurrirse a otro órgano competente.

j) Gratuidad: El acceso a la información pública es gratuito. Si se requiriera reproducción de la misma, las copias estarán a cargo del solicitante. En ningún caso el valor de las mismas puede exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información. Podrá establecerse una reducción de dichos costos cuando la solicitud haya sido realizada por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro, o vinculadas con actividades de interés público. En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

k) No discriminación: El acceso a la información pública está garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir expresión de causa o motivo de la solicitud.

l) Responsabilidad: Los funcionarios públicos que incumplieran las obligaciones previstas por la presente ley estarán sujetos a las sanciones disciplinarias o penales que les correspondan.

m) Conservación: La información es un bien público y por ello debe ser conservada y resguardada de manera adecuada durante el transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser prioritaria en los organismos públicos.

n) In dubio pro petitor: La interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información pública deberá ser efectuada, en caso de duda, siempre a favor de la mayor vigencia y alcance del derecho.

o) Interés público superior: Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información.

Capítulo III

Ámbito de aplicación

Art. 6º.- Ámbito de aplicación. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al sector público nacional, del Poder Legislativo de la Nación, de la Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Nacional, en estos dos últimos casos en todo aquello relacionado con

las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias.

A los efectos de esta ley se considera que el sector público nacional está integrado por:

- a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
- b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
- c) Entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones;
- d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

Todas las actividades de los órganos y entes mencionados en el presente artículo estarán sometidas al principio de publicidad de sus actos, por lo que los funcionarios responsables y encargados de su administración, deberán prever una adecuada organización, sistematización, publicación y disponibilidad de la información pública producida u obtenida, que obre en su poder o esté bajo su control, asegurando un amplio y fácil acceso, con las únicas excepciones previstas en esta ley

Capítulo IV

Obligación de transparencia activa

Art. 7º.- Sistematización de la información. Toda autoridad pública y los demás sujetos obligados a brindar acceso a la información pública son responsables de prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información,

como también su integración en línea a través de medios electrónicos, en los términos que disponga la presente ley y su reglamentación, para asegurar un acceso fácil y amplio a la misma. Las autoridades y demás sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia total de la información disponible en formato digital.

Art.8º.- Obligación de transparencia activa. Las autoridades y demás sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, a través de sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con capacidades especiales.

Los sistemas de procesamiento de información administrativa y de gestión deben incluir funcionalidades que permitan el acceso inmediato, en línea, de todo dato digitalizado, que no haya sido expresamente definido como reservado y ofrecer un motor de búsqueda que permita aperturas estadísticas, agrupaciones de datos unitarios y desagregados, con estándares comunes para toda la administración gubernamental.

Art. 9º.- Información a publicar. Con excepción de la información secreta, reservada o confidencial prevista en esta ley, las autoridades y demás sujetos obligados, conforme lo establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos sitios electrónicos, al menos, la información siguiente:

- a) Un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que puede ser solicitada, como así también los costos de reproducción correspondientes;
- b) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
- c) Descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los procedimientos que se siguen para tomar decisiones;
- d) Los objetivos y acciones de conformidad con sus planes, programas y proyectos, informes de actividades realizadas;
- e) El presupuesto asignado a cada área, programa y función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
- f) Transferencias de fondos públicos provenientes de y dirigidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
- g) Las contrataciones públicas;

- h) Los informes de auditorías o evaluaciones internas o externas;
- i) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares;
- j) Detalles pertinentes sobre los servicios que brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
- k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen funciones en forma permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual, detallando sus funciones y escalafón;
- l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado;
- m) Mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
- n) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder, las categorías de información que publica y las vías recursivas disponibles;
- o) Registro de solicitudes y denuncias, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y resúmenes de las solicitudes o denuncias interpuestas y la respuesta brindada;
- p) El domicilio y los datos de contacto de la Unidad de Enlace; y
- q) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

ARTICULO 10.- Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Toda autoridad pública y demás sujetos obligados conforme la presente ley, así como la autoridad de aplicación correspondiente, deben exhibir en sus lugares de acceso público el texto de la presente ley junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de las Unidades de Enlace correspondientes, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información solicitada, conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 11.- Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir a las autoridades y sujetos obligados el cumplimiento de la obligación de informar estipulada en el artículo 9°. Dicho requerimiento deberá subsanarse en un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su presentación.

Capítulo V

Excepciones a la Divulgación

Art. 12.- Excepciones. Las autoridades públicas y demás sujetos obligados comprendidos en esta ley únicamente podrán exceptuarse de proveer la información requerida, en circunstancias que sean legítimamente reguladas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, y se produzca alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada a través de un decreto del presidente de la Nación por razones de seguridad, defensa o política exterior.

b) Cuando una ley del Congreso de la Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público, o bien establezca un procedimiento especial para acceder a ella.

c) Cuando se trate de información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;

d) Cuando se trate de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el beneficiario de la información;

e) Cuando se trate de información comercial o financiera de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial;

f) Cuando se trate de información interna de la administración o de comunicaciones entre órganos de la administración que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del gobierno.

g) Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;

h) Cuando se trate de información que obre en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;

i) Cuando se trate de información preparada por asesores jurídicos de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información privare a una persona del pleno derecho a un juicio justo o de cualquier tipo de

información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado;

j) Cuando se trate de información referida a datos personales de carácter sensible protegidos por la Ley 25326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y el honor, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional;

k) Cuando pudiere ocasionar un peligro a la vida o la seguridad de una persona.

Art. 13.- Establecimiento de excepciones por los poderes públicos. La decisión que, conforme al artículo anterior establezca excepciones al acceso a la información pública en el ámbito de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;

b) Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;

c) El organismo que produjo la información;

d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva; y

e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario están disponibles para el acceso público.

En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al Jefe de Gabinete de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo la excepción que se procura es nula de nulidad absoluta.

En el caso de los demás poderes públicos la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable de los mismos.

Art. 14.- Período de confidencialidad o reserva. La información confidencial o reservada tendrá tal carácter a partir de la fecha en que la información haya sido producida, que se encuentre bajo la posesión o control del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración como reservada o confidencial, mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

La declaración de confidencialidad o reserva de la información no podrá exceder el plazo máximo de DIEZ (10) años, a excepción de la que hubiere sido proporcionada por una fuente diplomática. Vencido dicho plazo, la información se considera pública y de libre acceso.

El sujeto obligado que tenga en su poder información pública reservada o confidencial debe periódicamente de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público.

En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para hacerla pública.

En el supuesto de que persistan las razones que fundamentaron la reserva o confidencialidad de la información dicho plazo podrá prorrogarse por un período más de DIEZ (10) años.

Cuando se trate de datos personales contemplados en la Ley N° 25.326, o en el régimen que la sustituya, los plazos previstos en este artículo no serán aplicables.

Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.

Art. 15.- Derechos Humanos. No podrá invocarse el carácter de reservado y/o confidencial de una información ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación judicial sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa humanidad.

Art. 16. - Información parcial. En caso que existiere un documento que contenga, en forma parcial, información que no sea de acceso público, los órganos comprendidos en la presente ley deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 18.

Asimismo, deberá indicarse que se ha omitido información por estar contemplada en una de las excepciones y la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que esto atente contra el interés protegido por la excepción.

Art. 17.- Control judicial. Los Jueces de la Nación pueden solicitar información oficial de carácter reservado siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

- a) Que el Juez sea competente;
- b) Que el petitorio de las partes esté referido a hechos vinculados a normas o actos de carácter reservado;
- c) Que las partes invoquen en su petición la vulneración de sus derechos individuales o colectivos;
- d) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a información reservada, en cuyo caso el Juez podrá recoger datos de la información reservada necesarios para la fundamentación de su sentencia.

TÍTULO II

De la autoridad de aplicación

Capítulo I

Del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública -ENAIIP

Art. 18.- Creación del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública -ENAIIP. Créase el Ente Nacional de Acceso a la Información Pública-ENAIIP, como organismo de asistencia del Poder Legislativo, dotado con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y autonomía operativa, que tendrá a su cargo promover la efectiva implementación de la presente ley.

Art. 19.- Autoridad de Aplicación. Funciones. El Ente Nacional de Acceso a la Información Pública se constituirá como la Autoridad de Aplicación de la presente Ley en ámbito del Poder Legislativo Ejecutivo Nacional y tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las disposiciones de esta Ley;

b) Elaborar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todas las entidades alcanzadas por esta ley, excepto la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales federales, y el Ministerio Público de la Nación, bajo las pautas enunciadas en esta ley;

c) Receptar y resolver en forma fundada los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con esta ley;

d) Dictar normas reglamentarias e interpretativas de esta ley, e instrucciones para su aplicación, requiriendo si fuere necesario que ajusten sus procedimientos para un adecuado cumplimiento de las normas;

e) Formular recomendaciones tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean.

f) Acreditar la implementación de mejores prácticas y el cumplimiento de estándares de calidad en el área y ámbito de su competencia;

g) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la adecuación de leyes, normas, u otros instrumentos legales necesarios para asegurar la transparencia y el acceso a la información;

h) Realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información;

i) Realizar actividades de difusión e información al público, incluyendo la producción de material educativo y de divulgación general orientado a promover el derecho de acceso a la información en las escuelas, colegios e instituciones de educación superior.

j) Recolectar estadísticas y elaborar reportes sobre transparencia y acceso a la información;

k) Celebrar convenios de cooperación con órganos públicos y personas privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia;

l) Dictar y ejecutar actos y celebrar contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

m) Solicitar la cooperación de todos los organismos y entidades públicas o privadas con competencia en tecnologías de la información y en la elaboración de estadísticas y censos, para la elaboración de guías, normativas y estándares para la recolección, agregación, validación y publicación de datos de interés público;

n) Denunciar penalmente los delitos en que pudieran incurrirse en relación a los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley, y aplicar las sanciones por incumplimiento a sus disposiciones y las de sus reglamentos.

Art.20.- Recursos. Los recursos del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública quedarán conformados por:

a) Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales;

b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros;

c) Las donaciones, aportes no reembolsables y legados que reciba y acepte;

d) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos;

Art. 21.- Autoridades. El gobierno y administración del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública -ENAIP estará a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros, los que durarán seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, renovándose cada tres años dos de sus miembros , y por sorteo la primera vez. El Directorio formará quórum con tres (3) de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. La presidencia del Directorio será ejercida rotativamente por sus miembros.

Art. 22.- Designación de los miembros del Directorio. Los miembros del Directorio del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública – ENAIP son designados por resolución conjunta de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, a propuesta de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Art. 23.- Antecedentes. Los miembros del Directorio del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública deberán poseer reconocida trayectoria y notoria experiencia en la materia, y el ejercicio del cargo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docente.

Art. 24.- Vacantes. Producida una vacante en el Directorio del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública, en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.

Art. 25.- Observaciones. La ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, las entidades académicas, los colegios y asociaciones profesionales, , podrán en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Congreso de la Nación, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

Art. 26.- Funciones y Facultades del Directorio. El Directorio del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública- ENAIP, tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Dictar el reglamento interno del cuerpo.
- b) Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública.
- c) Delegar en el Presidente las facultades que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública, a excepción de la resolución en forma fundada los reclamos por denegación de acceso a la información.
- d) Promover las relaciones institucionales del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.
- e) Aprobar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual y la Memoria Anual del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública.
- f) Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública.
- g) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
- h) Aceptar herencias, legados y donaciones, subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

i) Requerir a los distintos organismos de la Administración Pública Nacional, la información necesaria a fin de fortalecer el accionar del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública.

Art. 27.- Funciones y Facultades del Presidente del Directorio. El Presidente del Directorio tendrá las siguientes funciones y facultades:

a) Ejercer la representación y dirección general del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública;

b) Ejercer la administración del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública, suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes y nombrar, contratar expertos nacionales o extranjeros, remover, sancionar y dirigir el personal;

c) Elaborar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual y la Memoria Anual de la A la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública;

d) Dirigir y promover estudios e investigaciones especializadas y disponer la difusión de sus resultados;

e) Convocar y presidir las sesiones del Directorio con voz y voto;

f) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del Ente Nacional de Acceso a la Información Pública.

Capítulo II

De las Oficinas de Acceso a la Información Pública y Unidades de Enlace.

Art. 28.- Oficinas de Acceso a la Información Pública y Unidades de Enlace. Créanse en jurisdicción de cada poder del Estado y en el ámbito de los demás sujetos obligados por la presente ley, Oficinas de Acceso a la Información Pública y Unidades de Enlace como autoridad de aplicación responsable de las disposiciones de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, en un plazo no mayor a los 90 días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial, a fin de velar por el cumplimiento de esta Ley, debiendo garantizarse las reservas y excepciones así como la independencia de los magistrados y la privacidad de las actuaciones judiciales en que aquella deba protegerse.

Art. 29.- Atribuciones. Las autoridades públicas y demás sujetos obligados por esta ley designarán tantas Oficinas de Acceso a la Información Pública y Unidades de Enlace como sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo acceso a la información pública, de acuerdo a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a la reglamentación de la presente ley, con las siguientes atribuciones:

a) Recabar y difundir la información pública, además de encargarse que se actualice periódicamente;

b) Realizar los trámites y acciones necesarias para proporcionar la información requerida a los efectos de responder las solicitudes realizadas;

c) Informar al Ente Nacional de Acceso a la Información Pública, cuando a su criterio, la respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas establecidas en la presente ley;

d) Implementar los procedimientos y criterios establecidos, de conformidad con lo señalado por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información pública; y

e) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.

La reglamentación podrá establecer los casos donde se exceptúe la obligación de crear una Unidad de Enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la información pública.

Capítulo III

Del Consejo Federal de Acceso a la Información Pública

Art.30.- Créase el Consejo Federal de Acceso a la Información Pública como organismo ínter jurisdiccional de carácter permanente para la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Tendrá su sede en el Ente Nacional de Acceso a la Información Pública, de la cual recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico.

El Consejo estará integrado por un representante de cada una de las Provincias y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción. El Consejo será presidido por el titular del Ente Nacional de Información Pública- ENAIP, quien convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el estado de avance en materia de transparencia y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.

Art. 31.- Una vez por año, el Consejo Federal de Acceso a la Información Pública elevará por escrito al Presidente de la Nación, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a los Presidentes de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, respectivamente, un informe sobre el estado de avance en la implementación de esta Ley.

TÍTULO III

Procedimiento

Art. 32.- Solicitud de información. La solicitud de información pública se podrá instrumentar por escrito en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal

fin, o bien entregada en su sede, conforme a lo establecido por la reglamentación.

La solicitud debe contener como mínimo:

- a) Nombre y apellido;
- b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la reglamentación;
- c) Información de contacto, conforme a la forma de entrega de la información pública elegida por el solicitante;
- d) Descripción de la información solicitada, en forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo informado en el índice elaborado por el sujeto obligado;
- e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la reproducción de la información;
- f) Fecha y hora de la solicitud; y
- g) Consentimiento del solicitante del pago del costo de reproducción fijado por el sujeto obligado.

La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el proceso de acceso a la información pública.

Art.33.- Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el peticionario, a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.

La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deben instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.

Art. 34.- Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser razonable y no puede exceder el costo real abonado por el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte en caso de ser entregada en otros formatos.

La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, que demuestren la carencia de recursos suficientes.

Art. 35.- Consentimiento de pago. Se considera que el requirente ha consentido, al momento de solicitar la información, abonar el importe establecido por el sujeto obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a los criterios estipulados en el presente artículo. En el caso de que el importe fijado signifique para el solicitante el pago de una suma considerable de dinero, el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se seguirá tramitando a menos que el requirente consienta en abonar el importe establecido.

Art. 36.- Plazos. El sujeto obligado debe responder al requerimiento en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante resolución fundada en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:

- a) Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;
- b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un solo pedido;
- c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés directo en la determinación del pedido; y
- d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer párrafo.

Art. 37.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido a la Oficina de Acceso a la Información Pública o Unidad de Enlace competente, en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles. Éste, en un plazo no superior a los CINCO (5) días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información requerida.

Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la solicitud.

Art. 38.- Solicitud de plazo menor. En caso de que el solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 36 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante la Oficina de

Acceso a la Información Pública competente, acreditando las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. La Oficina de Acceso a la Información Pública, evaluará la solicitud y resolverá, en un plazo de TRES (3) días hábiles, sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente, el plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.

Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.

Art.39.- Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la intimidad de terceros.

Art. 40.- Información parcialmente reservada o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar información deben permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.

Art. 41.- Producción de información. El sujeto obligado debe proveer la información solicitada, siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al solicitante mediante resolución fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado a producirla.

Art. 42.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.

Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.

Art 43.- Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no exista la

exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley.

El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa o judicial.

Art 44.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, deben formularse por escrito y estar fundadas.

Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.

TÍTULO IV

Recursos

Capítulo I

Recurso de incumplimiento

Art. 45.- Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá interponer ante la Oficina de Acceso a la Información Pública competente un recurso por incumplimiento dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la configuración de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos previstos en esta ley.

Art. 46.- Transparencia activa. Cuando el recurso por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesto en cualquier momento.

Art 47.- Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información y los datos identificatorios del recurrente, fijando un domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del sujeto obligado.

Art 48.- Plazos para resolver. Improcedencia. La Oficina de Acceso a la Información Pública tendrá DIEZ (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente cuando se interponga transcurrido el plazo establecido en el artículo 45; cuando ya hubiera resuelto anteriormente de manera definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información solicitada; cuando el sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta ley; cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso; y cuando el supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.

Art 49.- Trámite. Declarado procedente el recurso, la Oficina de Acceso a la Información Pública iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en el plazo de TRES (3) días hábiles, para que formule su descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los DIEZ (10) días hábiles.

Art 50.- Datos personales. Si en la información solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos personales se dará vista del mismo a la autoridad de aplicación competente en la materia.

Art 51.- Información complementaria. Audiencia. La Oficina de Acceso a la Información Pública podrá solicitar la información complementaria que considere necesaria para resolver la cuestión y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el recurrente y, en su caso, la Unidad de Enlace del sujeto obligado.

Art 52.- Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, la Oficina de Acceso a la Información Pública resolverá el recurso en el plazo de DIEZ (10) días hábiles; pudiendo ampliar dicho plazo por CINCO (5) cinco días hábiles, por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.

Art 53.- Resolución. La Oficina de Acceso a la Información Pública al resolver el recurso de incumplimiento podrá desestimarlos; ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la información pública al recurrente en un plazo de DIEZ (10) días hábiles el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la complejidad del caso; o declarar que la información es reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter. La Oficina de Acceso a la Información Pública notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres días hábiles de concluido el trámite.

El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los TRES (3) días hábiles de producido.

Capítulo II

Recurso judicial

Art 54.- Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a la información se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado por incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de acceso a la información pública. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

Art 55.- Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley.

No será necesario agotar la instancia del recurso por incumplimiento establecida por la presente ley. En caso de que una acción de acceso a la información pública se interponga estando pendiente la resolución de un recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido dicho recurso.

Art 56.- Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los NOVENTA (90) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud; del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley; y
- b) La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

Art 57.- Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales contencioso administrativo federales, cuando el obligado sea un ente u órgano estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea un ente público no estatal o un ente privado.

TÍTULO V

Responsabilidad

Art 58.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que les correspondan.

Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:

- a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre DIEZ (10) y TREINTA (30) días;
- b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre CINCO (5) y VEINTICINCO (25) días;

c) El incumplimiento de las resoluciones por las que la Oficina de Acceso a la Información Pública resuelva el recurso por incumplimiento interpuesto será sancionado con cesantía; y

d) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por la Oficina de Acceso a la Información Pública o la obstaculización de cualquier modo del cumplimiento de esta ley será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre DIEZ (10) y TREINTA (30) días.

Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de CUARENTA (40) o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.

El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de DOS (2) años desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario. La resolución que impusiere la sanción será impugnabile únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.

Art 59.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario de este artículo el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional, los Jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

Art 60.- Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, los responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre UNO (1) y CIEN (100) salarios mínimos vitales y móviles.

La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con los estándares mencionados en el artículo 49 y con la capacidad económica del sujeto.

Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

Art 61.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados

por esta ley, dentro del plazo de los CINCO (5) días a partir de su imposición.

TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales

Capítulo I

Disposiciones transitorias

Art 62.- Caducidad. La información reservada o declarada confidencial que tenga más de DIEZ (10) años, con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a los TRES (3) años de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración de confidencialidad.

Art 63.- Vacatio Legis. Los sujetos obligados de esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias a los efectos de implementar lo establecido por esta ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada en vigencia:

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días:

- a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la información pública de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;
- b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y producción de la información a fin de conformarla a los parámetros estipulados por esta ley; y
- c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma exigida por esta ley, en los portales o sedes de los sujetos obligados.

Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días:

Crear, capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o sus equivalentes.

Dentro de los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días:

- a) Constituir e integrar las Oficinas de Acceso a la Información Pública; y
- b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esta ley.

Capítulo II

Disposiciones finales

Art.64.- Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Art 65.- Adhesión. Invitase a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios a adherir al régimen previsto en esta ley.

Art 66.- Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por éstos.

Art 67.- Vigencia del Decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto 1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto las Oficinas de Acceso a la Información Pública queden definitivamente conformadas, se encuentren en pleno funcionamiento y se dispongan las normas reglamentarias que lo reemplacen.

Art 68.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art 69.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Ángel Rozas.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto promover y regular el acceso a la información pública, que constituye uno de los derechos fundamentales de la persona humana y de la vida en democracia.

El derecho al acceso a la información está consagrado en los artículos 1 de la Constitución Nacional; IV de la Declaración de los Derechos del Hombre y 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A su vez ha sido reconocido por la Corte Interamericana (caso Claude Reyes) y evolucionó progresivamente en numerosos tratados y documentos internacionales, incluida la Declaración de Chapultepec, que consagra los principios más amplios de la libertad de prensa.

Mientras muchos países están cada vez más comprometidos con la transparencia y la legislación en materia va ampliando los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los funcionarios para garantizar este derecho humano fundamental, la Argentina se encuentra, aún hoy, entre los pocos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información.

En Diciembre de 2012, solo cuatro días después que la mayoría oficialista en el Congreso Nacional dejara caducar un proyecto de ley para regular el acceso a la información, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunció un fallo histórico en que sentó posición, dando claro respaldo a los cuestionamientos que distintos medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil, hacen a la falta de transparencia de la actual administración.

La Corte Suprema consideró que, para cumplir con los tratados internacionales, el Estado no sólo debe permitir el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo sino también en todos los órganos estatales, en todas sus ramas y niveles nacionales y locales, empresas del Estado, hospitales, instituciones privadas o de cualquier tipo que ejerzan funciones públicas.

También el Alto Tribunal sostuvo que el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información es un prerequisite de la participación de los ciudadanos para controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los órganos de gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos. Y añadió que no suministrar información implica una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trata de datos de indudable interés público y que hacen a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática.

En la visión de los jueces de la Corte Suprema, el Estado sólo puede negarse ante un motivo de seguridad nacional, cuando se comprometa la intimidad de alguien o se pongan en riesgo relaciones diplomáticas. En el fallo comentado, la Corte refutó la negativa del PAMI a entregar datos sobre su presupuesto publicitario, y consideró que la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática.

Aunque nadie ignora que en nuestro país subsisten problemas con el acceso a la información pública, en los últimos tiempos se hace cada vez más evidente la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo nacional, para abordar el grave déficit de transparencia dentro de ciertos organismos de la administración.

Ante ello el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia del principio de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho.

El desafío de controlar al poder en la Argentina y de asumir la transparencia como un valor democrático, resulta una tarea titánica en los tiempos que corren, donde resaltan a diario las dificultades que enfrentan periodistas, legisladores y asociaciones civiles para acceder a información pública relevante sobre casos de trascendencia institucional.

Por ello resulta una necesidad apremiante de nuestra vida institucional, la sanción de una ley de acceso a la información pública acorde con los más modernos estándares internacionales en la materia. No pueden caber dudas a esta altura de la evolución institucional del derecho a la información y su reconocimiento normativo en todo el mundo.

Del mismo modo, en estos momentos no podemos eludir el debate sobre el poder de la información y las amenazas que se ciernen sobre la vigencia de una democracia informativa en nuestro país, si

aceptamos que la democracia está hecha de libertad y de información, y que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.

Hoy están en asunto los alcances y las condiciones de posibilidad de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información en nuestro país, mientras asistimos a una sistemática negativa del gobierno nacional a responder los pedidos vinculados con la información pública del Estado.

Esta situación vulnera todo principio democrático y se consuma además de manera amañada, manipulando información para convertirla en propaganda y para cercenar de manera abusiva otros derechos fundamentales, (de consumidores y usuarios) a partir del empeño oficial de reemplazar la información por un relato falaz, costoso, agresivo y hasta persecutorio.

Vivimos en un mundo de enorme despliegue de las telecomunicaciones instantáneas, donde se multiplican señales digitales, de cable y sitios de Internet, que abrieron las compuertas a la democratización del conocimiento y la información a una velocidad y una escala impensada hace pocas décadas.

Aún así, frente a la posibilidad de una democracia informativa como no hemos conocido nunca y en medio de la gran apertura que nos propone la sociedad del conocimiento, asistimos hoy a una lucha cotidiana de poder entre gobiernos, medios de comunicación y corporaciones para controlar la información que les llega a ciudadanos y consumidores, que se ha vuelto hoy más sofisticada, compleja y encarnizada.

El manejo y conocimiento de la información ya no pueden reservarse a quienes tienen el poder o a determinadas elites, como ocurría un par de siglos atrás. La democracia ha evolucionado dando lugar a nuevas formas de expresión y de influencia de los ciudadanos sobre los procesos de toma de decisiones, públicos y privados.

Estamos en una época de democracia informativa, que nos sirve de garante de los demás derechos humanos fundamentales.

La elaboración participada de normas que receptan el aporte ciudadano a los procesos de redacción de leyes, las audiencias públicas y el acceso libre a la información pública, son herramientas que se han incorporado a los ordenamientos jurídicos, legales y constitucionales y tienen un valor insoslayable sobre la opinión y las decisiones políticas.

Como hombres de la democracia debemos sostener y reafirmar el valor de la opinión pública, sobre la base de un adecuado acceso a la información, como una herramienta elemental para la construcción de la ciudadanía.

Rescatamos el valor de la opinión pública que se forma en un debate, en una deliberación, en un intercambio de ideas. Y sobre todo,

valoramos la opinión pública como la resultante de un proceso, encauzado a través de reglas, de procedimientos establecidos, de instituciones, donde tienen protagonismo esencial la libertad de prensa, las fuentes alternativas de información, los líderes que guían el debate, los representantes que se hacen eco y los funcionarios que ejecutan.

Así nos marca nuestra vida la política, con la responsabilidad de impedir tanto los abusos del Estado como de los propietarios de los medios privados y así garantizar la plena vigencia de la democracia.

Conceptuamos que un mejor acceso a la información pública permite que los representantes del pueblo cumplamos mejor con nuestras obligaciones. Nos permite también mejorar las comunicaciones, el ejercicio y el contenido de la actividad periodística, combatir la corrupción estructural y promover una mejor gestión en todos los ámbitos de gobierno.

Es incuestionable que la publicidad de los actos de gobierno, como característica esencial del régimen republicano, exige tanto la difusión misma del hecho político, como su discusión libre y la conexión permanente entre representantes y representados.

Pero advertimos que la política se ha trastocado de una manera, - por momentos-, salvaje, cuando se fomentan signos marcados de ignorancia cívica, tanto por la negativa a un adecuado acceso a la información pública y su manipulación, como por la tendencia a uniformar el pensamiento de los ciudadanos, eliminar todas las expresiones contrarias al poder, y silenciar al periodismo independiente.

De tal modo, se hace preciso en la Argentina de hoy, abordar una agenda integral de los medios, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sin información libre, plural y comprobable, la democracia carece de un requisito básico, para que el ciudadano pueda elegir y decidir. En cambio, si carece de elementos para elegir y tomar decisiones fundadas, el ciudadano se torna en alguien fácilmente manipulable y no es verdaderamente libre.

Por ello, en una mirada moderna y actualizada de los derechos humanos, el Estado debe garantizar el acceso universal a la formación (por medio de la educación), y a una información veraz, diversa, plural y expresada en forma clara y objetiva, que les permita participar activamente en la sociedad.

Debemos reconocerle al sistema interamericano de derechos humanos, una contribución fundamental para interpretar el contenido de los dos derechos constitutivos de la democracia contemporánea, que son el tradicional derecho a la libertad de expresión y de prensa y el más moderno derecho a la información, dejando establecida una doble dimensión, individual y colectiva, de estos derechos, que son caras de una misma realidad.

Mientras la libertad de expresión, de imprenta y de prensa, sin censura previa, es propia del constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX, y está presente en nuestra Constitución de 1853, el derecho a la información es más reciente. Es considerado un "meta derecho" porque posibilita el acceso a otros derechos fundamentales.

Al incorporar con jerarquía constitucional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de la reforma de 1994, nuestra Constitución debe cumplir con su artículo 13.1, cuando establece que toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente.

Quienes están bajo la protección de esta Convención, conocida también como Pacto San José de Costa Rica, tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es un derecho individual el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas, con lo que se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión.

No puede soslayarse, como hemos dicho, que también nuestro país debe responder a compromisos internacionales en materia de acceso a la información, como signatario de las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Si bien rige aún el Decreto 1172/2003, dictado a principios del gobierno de Néstor Kirchner, ha quedado demostrado que hoy resulta un instrumento insuficiente para garantizar el acceso a la información, con sobrados ejemplos de incumplimiento ante requerimientos de información por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

A poco de cumplir treinta años desde la recuperación de la democracia, nuestro país no tiene aún una ley nacional que reglamente el derecho constitucional de acceso a la información pública y que obligue al Estado a rendir cuentas de manera sistemática frente a la requisitoria de cualquier ciudadano.

Ante ello es preciso crear conciencia de su necesidad, ya que toda información generada por el sector público o con financiamiento de fondos públicos, es del público. Los ciudadanos tienen derecho a requerir cualquier información sin necesidad de justificar los motivos y solamente información muy sensible, en materia de defensa, relaciones diplomáticas o datos personales, seguirán siendo confidenciales, pero el resto debe darse a publicidad.

Ciertamente las leyes de acceso a la información en el mundo son normas de sencilla instrumentación, y sirven de base a una política integral en esta materia.

Empero, en nuestro país resulta evidente la falta de voluntad política para sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública. Una ley

que obligue a brindar información a los tres poderes y a todas aquellas instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban financiamiento estatal.

En este proyecto de ley he tratado de resguardar algunos criterios que aseguren prioritariamente estas cuestiones centrales que, a mi juicio, debiéramos contemplar:

- La mayor amplitud y extensión de la información pública a suministrar, ante el pedido de cualquier ciudadano, sin necesidad de justificación alguna.
- Deben limitarse a muy estrictas excepciones las obligaciones de brindar información, siempre resultantes de procedencias legales y no reglamentarias. La información gubernamental debe estar disponible para el escrutinio público y las excepciones necesarias, deben ser limitadas y determinadas.
- Es necesario un procedimiento administrativo ágil y un recurso judicial específico frente a todo entorpecimiento del derecho, sin perjuicio de sanciones especiales por incumplimiento.
- Se trata de instituir una Autoridad de Aplicación que actúe con independencia del Poder Ejecutivo.
- Se propicia imponer el mecanismo de "transparencia activa" para publicar en Internet información pública obrante en poder de los sujetos obligados por la ley.
- Se promueve la creación de un Consejo Federal de Acceso a la Información Pública como organismo ínter jurisdiccional de carácter permanente para la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública

En definitiva, un régimen de libre acceso a la información pública debe reflejar con naturalidad el sentido común para garantizar con la mayor amplitud este derecho primordial del ser humano, en la medida en que permite y valoriza el ejercicio de los demás derechos.

Si el Estado cuenta con información que administra en función de la sociedad, no hay razón para que cada miembro de la sociedad no tenga acceso a ella. Solo hace falta instrumentar un sistema administrativo que permita de modo manual o informatizado y digitalizado, brindar acceso a quien lo solicita.

Sin duda, una regulación eficiente del derecho a la información, importará beneficios, tanto para los ciudadanos, por el aumento de la transparencia y una mayor confianza en la gestión pública, como para el Estado y las autoridades públicas.

La ampliación de la base informativa estatal permitirá también una mejor calidad de las decisiones públicas, al contar con una ciudadanía más y mejor informada. Además abrirá la oportunidad de demostrar

una gestión transparente y de recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.

Regular el acceso a la información mediante una ley que reglamente su ejercicio, sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia argentina. Con la sanción de esta ley contaremos con una herramienta valiosa para luchar contra la corrupción y para implementar principios de transparencia en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas, como un valor esencial de la democracia,

Por ello, una ley de acceso a la información pública, es además una exigencia ética que se abre paso de manera irrefrenable para fomentar la construcción de ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y el intercambio de culturas, que cobran cada vez más entidad en el mundo actual.

Como un estallido global de la libre expresión que no puede ser controlado - bajo la revolución de las comunicaciones en que vivimos-, el acceso a la información ha de significar también una indiscutible entrada al futuro.

La democracia no se limita al derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas. Para que una democracia se consolide y perfeccione, es necesario que exista una ciudadanía informada y capaz de participar en el debate público.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.

Ángel Rozas.-

(VI)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones Generales.

Artículo 1º - Objeto y sujetos obligados. La presente ley tiene como finalidad regular el derecho que tiene toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, entes autárquicos, entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Nacional, en estos dos últimos casos en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias. También se

aplica a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional y a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional o en las que participe en la formación de las decisiones societarias, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, también a las sociedades del Estado o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

Artículo 2º - Orden Público. La presente ley es de orden público.

Artículo 3º - Legitimación activa. Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de cada uno de los órganos enumerados en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 4º - Alcances. Los órganos obligados deberán proveer a todos aquellos que lo requieran la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato que hayan creado u obtenido que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se considera como información a los efectos de esta ley, todo tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como a las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el requerimiento, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla.

Artículo 5º- Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales contencioso administrativo federales cuando el obligado sea un ente u órgano estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales cuando el obligado sea un ente público no estatal o una empresa privada.

Artículo 6º.- Principio de publicidad obligatoria y libre acceso a la información. A los fines de hacer posible el ejercicio del derecho a buscar y recibir información, los entes y órganos mencionados en el artículo 1º, estarán sometidos al principio de publicidad obligatoria, con las únicas excepciones previstas en el artículo 13.

Los funcionarios responsables deberán prever una adecuada organización, sistematización, publicación y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.

La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en esta norma, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al momento de requerirla.

Capítulo II

Procedimiento

Artículo 7°- Principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuito. El requirente de información goza del principio de gratuidad. Los costos de reproducción serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en inaccesibles a la información pública.

Artículo 8°. - Solicitud de información. Principio de informalidad. La petición de consultar los archivos se formulará por escrito, con la identificación del/a requirente. La solicitud de información debe regirse por el principio de informalidad. El organismo receptor no podrá denegar la información por no cumplir con este requisito, sin antes haber dado posibilidad a la persona solicitante de reformular el pedido y haberle brindado el asesoramiento pertinente a tal efecto.

Artículo 9°- Plazos. Una vez recibido el pedido el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta deberá informar en el plazo máximo de diez (10) días al peticionante si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros veinte (20) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada.

Si la información solicitada resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.

Cuando por las circunstancias objetivas del caso debidamente acreditadas resulte necesario acceder a la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo buscado por el solicitante.

Artículo 10°-Entrega de la información pública. Todo órgano comprendido en la presente ley tiene la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le hayan presentado. La información deberá ser provista sin otras condiciones que las expresamente establecidas en esta ley, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al momento de requerirla.

Cuando la información requerida contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deberán ser disociados. En todo caso, el organismo requerido tendrá la obligación de entregar al solicitante de la información una constante de su solicitud.

Artículo 11.- Silencio. Denegatoria. El silencio una vez vencido el plazo, o la respuesta ambigua, o inexacta, o parcial de la demandada de información, se considera negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo ante los tribunales que correspondan,

conforme permitirá interponer los recursos administrativos o judiciales competentes, conforme el artículo 5° de la presente ley.

Artículo 12. –Denegatoria fundada. El órgano requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 13 de esta ley. En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante un informe fundado del que surja de manera expresa la excepción del artículo 13 que consideró aplicable. Dicha resolución deberá notificarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud de información.

Capítulo III

Excepciones. Información reservada.

Artículo 13. –Limitaciones al acceso a la información por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a revelar información existente en sus archivos cuando una ley o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los siguientes supuestos:

- a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás;
- b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La decisión que clasifique determinada información como reservada deberá indicar:

- a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
- b) El organismo o fuente que produjo la información;
- c) La fecha o evento establecido para el acceso público o la fecha correspondiente a los 10 años de la clasificación original;
- d) Las razones que fundamentan la clasificación;
- e) Las partes de información que son sometidas a la clasificación y las que están disponibles para el acceso público.

Artículo 14. Disposiciones legales secretas. No podrá mantenerse el secreto de la información mencionada en el artículo 13 por un plazo superior a los diez (10) años contados a partir del momento de su emisión o de la realización de los hechos que se reflejan en los documentos.

Artículo 15. Caducidad. La información clasificada como reservada será de acceso público cuando se cumpla la duración establecida en el artículo anterior. En el caso de la información reservada por los órganos previstos en el artículo 1° que tengan más de diez (10) años, caduca a los 3 años de entrada en vigencia de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración de confidencialidad. Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la información que facilite el acceso al público de la información clasificada como reservada cuando hubiere vencido el plazo o producido el evento establecido para su apertura al acceso público.

Capítulo IV

Responsabilidad

Artículo 16.- Responsabilidad del funcionario. El funcionario del órgano o ente administrativo contemplado en el artículo 1° de esta ley que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderle conforme lo previsto en el Código Civil y en el Código Penal de la Nación.

Artículo 17.- Responsabilidad de los entes privados. Los privados comprendidos por esta ley que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán sancionados con multa de pesos quinientos a pesos veinte mil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponderles y de la penal prevista en esta ley en la que puedan incurrir las personas físicas requeridas.

Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María M. Odarda. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

El derecho a acceder a la información pública es un derecho fundamental y un derecho humano amparado por la Constitución Nacional (arts. 14, 33, 38, 41, 42, 43 y 75 inciso 22), razón por la cual “2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” una ley que regule el acceso a la información a las personas, que determine el mecanismo para conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado, significa un instrumento imprescindible para lograr la participación de cada uno de nosotros en los asuntos públicos. No se trata del acceso a la noticia, sino de un acceso directo a la fuente de información. Se trata de la verdadera publicidad de los actos de gobierno. Por lo tanto, una ley de acceso a la información pública permitirá instrumentar el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información en poder del Estado y garantizar que este derecho esencial no sea vulnerado.

Todos sabemos que, en innumerables oportunidades, la Administración aparece frente al ciudadano, por un lado como un ente omnipresente, celoso guardián de su información, y por el otro, -y no en menor medida-, como confidente con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo. Frente a ello, el único remedio es la extensión del principio de publicidad de los actos de gobierno. Este

principio, lejos de interferir la legitimación democrática de la Administración, la refuerza al posibilitar el control democrático de sus actos, configurando así una Administración abierta a la sociedad a la que está, esencialmente, llamada a servir en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho¹.

Sin lugar a dudas, el acceso a la información, junto a la participación ciudadana, es uno de los dos vectores de la transparencia en la gestión pública². Al adoptar nuestro país la forma republicana y representativa de gobierno, basada en la soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe a la curiosidad de sus súbditos sino un deber de los funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos del pueblo al que representan. Como enseñaba Carlos Sánchez Viamonte, en América a diferencia de Europa, la república es un punto de partida y no de llegada. Es decir, que la transparencia no es algo nuevo, sino el resultado del principio de soberanía popular fundante de nuestro sistema republicano de gobierno.

De allí, se desprende que la posibilidad de acceder a la información en poder del Estado, o de cualquier ente que utilice fondos públicos constituye un derecho humano en si mismo, insito en la forma republicana de gobierno. Así, el acceso a la información se constituye en un derecho de libertad³ –la libertad de informarse– que tiene su fundamento en el principio democrático, que reclama la publicidad de la información que obre en poder del Estado.

Además, estamos ante un derecho que es a la vez un instrumento para la concreción de otros derechos. En este sentido, la Declaración de la UNESCO de 1978 afirma que la información es un derecho del hombre de carácter primordial, en la medida que valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual, vulnera su libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar bien informados, lo que afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática, pues –como sentenció la CIDH– una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre⁴.

Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan las decisiones quienes han sido elegidos para gobernar, el ciudadano vuelve a ser protagonista, pudiendo ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha actividad, o al menos, al momento de tener que elegir nuevamente sus representantes, hacerlos con una ponderación previa de la gestión de los que ya han realizado la tarea⁵.

Debemos señalar asimismo que la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos

¹ Fernández Ramos, Severiano. El derecho de acceso a los documentos administrativos. Marcial Pons, Ediciones, Madrid 1997.-

² Caplan Ariel R. Los dos vectores de la transparencia en la gestión pública, en Ejercicio de la Función Pública, Ética y Transparencia. Librería Editora Platense, La Plata, 2007.

³ Fernández Ramos, Severiano. El derecho de Acceso a los documentos Administrativos. Marcial Pons, Ediciones, Madrid 1997.-

⁴ Scheibler Guillermo. Participación: Una Ciudadanía activa para una administración transparente.; en Ejercicio de la Función Pública, Ética y Transparencia. Librería Editora Platense, La Plata, 2007.

⁵ Isaac, Simón F. La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información., en Ejercicio de la Función Pública, Ética y Transparencia. Librería Editora Platense, La Plata, 2007.

Humanos, en su informe del año 2002, expresó: "En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión pública), no solo por medio de una constatación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión".

Podemos concluir entonces que negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia, ya que una ley de libre acceso a la información, no es otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar que el accionar del Estado se desenvuelva a espaldas de las personas, se desarrolle en secreto.

Por otra parte, el derecho a acceder a la información está garantizado por la Constitución Nacional en sus artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43; y por el 75 inciso 22, que incorporó distintos tratados internacionales a nuestro texto fundamental. En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe en su artículo 13.1 que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección." El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también contempla este derecho en su art. 19; y la Declaración Universal de Derechos Humanos, asegura a todo individuo la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (art. 19).

A su vez, la Convención Interamericana contra la Corrupción prevé la adopción de sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas (art. III, inciso 5). Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevé que cada Estado podrá adoptar las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, entre las que podrá incluir el establecimiento de procedimientos que permitan al público obtener información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su Administración Pública.

A nivel normativo específico el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1172/03, por el que se aprueban los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la publicidad de gestión e intereses en dicho ámbito, al mismo tiempo

que se fijan pautas para la elaboración participativa de normas, el acceso a la información pública y las remuneraciones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos.

Por último, el Congreso Nacional en el año 2004 sancionó la ley 25.831, que estableció el Régimen de libre acceso a la información pública ambiental.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso "Claude Reyes y otros vs. República de Chile"

El presente proyecto se ajusta a los presupuestos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el "caso Claude Reyes y otros"⁶, donde dicho tribunal señaló que "... la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción...".

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que "la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a ese derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores ... "⁷.

Por todo ello, la CIDH en el precedente "Reyes", y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Pami"⁸, entienden al derecho al acceso a la información como un Derecho Humano que

⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros v. Chile, sentencia 19 de Septiembre de 2006

⁷ CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr. 282; Principios de Lima. Principio 4 "Obligación de las autoridades"; Declaración de SOCIUS Perú 2003, Estudio Especial citado, párr. 96).

⁸ Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04 ~ Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMIS/amparo ley 16.986

emerge de los instrumentos que conforman el sistema interamericano de DDHH⁹.

Los precedentes citados tuvieron en cuenta que la CADH y el PIDCP prevén idénticos supuestos excepcionales que habilitarían la restricción del acceso a la información en sus Arts. 13 inc 2 y 19 inc. 3, respectivamente. Ambas normas requieren que la restricción sea fijada por ley anterior al pedido puesto que, de lo contrario, afectaría derechos adquiridos y sólo puede limitarse el acceso a la información pública cuando fuera necesario para asegurar: "a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas." Cabe precisar que existe un tercer requisito que se desprende del Art. 29 de la CADH y éste es que la restricción sea necesaria en una sociedad democrática. Este criterio que es la consecuencia de una interpretación armónica, razonable y teleológica de la Convención, constituye una de sus condiciones de vigencia porque así lo interpretó la Corte IDH¹⁰.

En la sentencia del "caso Reyes" la Corte Interamericana limitó las restricciones posibles al acceso a la información pública a las previstas al art. 13 inc. 2 de la CADH¹¹ y que corresponde a quien deniega la información demostrar la existencia de las circunstancias excepcionales que la justificarían¹².

Como se advierte, las restricciones están taxativamente enumeradas en el Art. 13 inc. 2 pero no alcanza que se produzcan dichas causales para que sean aplicables sino que además deben estar previstas por ley, ser necesarias en una sociedad democrática, ser proporcionales y no existir otra medida posible para preservar el daño que se pretendería evitar con la limitación.

La limitación al acceso a la información debe ser un medio adecuado para preservar el derecho que se pretende proteger. En consonancia con lo aquí expresado y ratificando el carácter excepcional de las limitaciones posibles al acceso a la información pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión sostiene que "El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas"¹³.

En similar sentido en una sentencia la Corte IDH, citando una Opinión Consultiva que había realizado previamente sostuvo sobre el tema que nos ocupa que "Respecto de estos requisitos la Corte señaló que: "la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad

⁹ Ver Scheibler, Guillermo, "El derecho humano de acceso a la información pública"; Scheibler, Guillermo; Publicado en: Sup. Adm. 2013 (febrero) , 24 • LA LEY 2013-B Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12- 04 ~ Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo ley 16.986

¹⁰ Corte IDH, OC 5/85 Párrafos 45 a 48

¹¹ Párrafo 88 de dicha sentencia.

¹² Párrafo 93 de dicha sentencia.

¹³ Principio cuarto.

de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo (Cfr. OC 5/85 La colegiación obligatoria de periodistas; ver también Eur. Court H. R., Case of The Sunday Times v. United Kingdom; y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. Germany”¹⁴).

Cabe recordar también que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica aprobado por ley 23.054) en su opinión consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, consideró que el bien común debe interpretarse como integrante del orden público de los estados democráticos, y que es posible entenderlo como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permite a los integrantes de la comunidad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de valores democráticos. En tal sentido se ponderó como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas, preservando y promoviendo la plena realización de los derechos de la persona humana. Destacó también, que de ninguna manera puede invocarse el bien común como medio para suprimir derechos garantizados por la Convención (v. puntos 30y 31)”¹⁵.

También la Corte IDH tiene resuelto que de “... ninguna manera podrán invocarse el “orden público” o el “bien común” (fundamento de limitaciones a los derechos humanos) como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (Ver el Art. 29 a de la convención). Esos conceptos deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención”¹⁶.

Como se advierte se trata de un régimen excepcional, de aplicación por un tiempo determinado (las restricciones nunca pueden ser indefinidas), de interpretación restrictiva y que sólo perdura en la medida que subsista la circunstancia también excepcional que le dio lugar.

¹⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, Sentencia de 2 de julio de 2004, Parr. 121.

¹⁵ Dictamen del Procurador General de la Nación A. 2036 XL luego tomado por la CSJN en Asociación Lucha por la Identidad Travesti- Transexual c/ Inspección General de Justicia.

¹⁶ Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párrs. 67 y 69. También ver Caso Palamara Iribarne, párrs. 72 y 73; Caso Ricardo Canese, párrs. 82 y 86; Caso Herrera Ulloa, párr. 109; Caso IvcherBronstein, párr. 147; y Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 65.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso donde el PAMI se negó a brindar información por aplicación del Decreto 1172/2003, con citas del Caso "Reyes" y de otras consideraciones de Corte IDH estableció en su considerando 7 "Que, sentadas las bases de la discusión, el tratamiento de este tema constitucional exige algunas aclaraciones sobre el significado y amplitud del referido derecho de "acceso a la información", a efectos de demostrar que, aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados -como se verá- a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática"¹⁷.

A partir del caso Reyes y de la sentencia dictada por la CSJN en el caso "PAMI"¹⁸ "En nuestro ordenamiento podría colegirse entonces que —como mínimo- constituye información "de interés público": a) toda aquella en poder de personas jurídicas que ejerzan funciones públicas, independientemente de su carácter estatal; b) toda la vinculada a la "calidad ambiental", independientemente de la naturaleza jurídica de su poseedor y c) toda la relacionada con el destino de bienes públicos, independientemente de la naturaleza jurídica de su poseedor"¹⁹.

El acceso a la información en Argentina

Después de muchos años de discusión y proyectos varios, en 2003 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la información, habiendo participado en su elaboración el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y distintas organizaciones de la sociedad civil. El Senado aprobó en 2004 modificaciones que alteraban el espíritu de ese consenso alcanzado, lo que provocó que el proyecto volviera a la cámara de origen, donde perdió estado parlamentario en marzo de 2006.

Mientras continuaba el trámite del citado proyecto de ley, en diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que regula las solicitudes de información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.

Ha quedado demostrado que este decreto es una herramienta ineficiente e insuficiente a la hora de regular y garantizar el acceso a la información. Entre otras falencias, la norma no prevé plazos concretos,

¹⁷ Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04 ~ Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo ley 16.986

¹⁸ Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04 ~ Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo ley 16.986

¹⁹ Scheibler, Guillermo, El derecho humano de acceso a la información pública; Publicado en: Sup. Adm. 2013 (febrero) , 24 • LA LEY 2013-B Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04 ~ Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo ley 16.986

no especifica la información exceptuada, ni establece la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Además, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial cuentan con normas específicas equivalentes a la del Poder Ejecutivo, que garanticen el derecho a la información. Debe señalarse asimismo que el derecho al acceso a la información se encuentra reconocido a nivel jurisprudencial, gracias al esfuerzo de la sociedad civil. Sin embargo, este reconocimiento se ve limitado a menudo por la falta de una ley nacional.

La discusión de una ley de acceso a la información pública se reactivó en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones de 2010. En esa ocasión el Senado dio media sanción, que fue girado a Diputados, donde no fue aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias, perdiendo estado parlamentario una vez más.

Entendemos que es imprescindible una ley nacional, que establezca en forma clara y específica procedimientos expeditivos para acceder a la información, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derecho de acceso a la información.

El proyecto que hoy presentamos se basa en su parte dispositiva en la media sanción de la Cámara de Diputados de 2003 y en la del Senado de 2010, y en particular en el proyecto que oportunamente presentara, hace ya más de una década, Alfredo Bravo y los parámetros fijados en el caso “Claude Reyes”, recién comentado. En igual inteligencia que los referidos proyectos y que el precedente jurisprudencial, reconocemos aquí al acceso a la información como un derecho humano, buscando la plena participación del ciudadano en los asuntos públicos, con el fin de terminar con el “misterio” de la administración y sus posibles corruptelas y prácticas autocráticas, fortaleciendo de esta forma el sistema democrático.

Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.

María M. Odarda. -

(VII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,...

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

Sujetos, definiciones, principios y alcance

Artículo 1º - Sujetos legitimados. Toda persona tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en custodia o bajo control de cualquier autoridad pública o de alguna de las personas privadas - físicas o de existencia ideal- alcanzadas por esta ley, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés alguno ni contar con patrocinio letrado.

Los sujetos obligados deben, a su vez, proporcionar la información en los términos previstos por la presente ley.

Artículo 2º - Definiciones. A los efectos de esta ley, se entiende por información pública todo dato que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que sea o deba ser generado u obtenido por los sujetos individualizados en el artículo 4º de la presente ley. Esta definición incluye toda constancia que obre o deba obrar en poder o bajo el control de tales sujetos o cuya producción sea financiada total o parcialmente con fondos públicos o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, tales como las actas de reuniones oficiales.

Artículo 3º - Principios. Esta ley sostiene los siguientes principios:

Principio de publicidad: toda la información producida u obtenida por los sujetos obligados se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley.

Principio de transparencia: todo ciudadano tiene derecho a conocer cuál ha sido el proceso que han seguido los organismos obligados por la presente ley para llegar a una determinada decisión, así como conocer quienes han intervenido en el trámite administrativo y el porqué se ha decidido de un determinado sentido.

Principio máxima divulgación: toda la información bajo el poder o el control del sujeto obligado es accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones taxativamente previstas en esta ley.

Principio de informalismo: las reglas del procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia nunca puede constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.

Principio del máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con la mayor cantidad de medios disponibles.

Principio de apertura: la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.

Principio de disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exenta debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.

Principio de no discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

Principio de máxima premura: la información debe ser publicada con máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.

Principio de gratuidad: el acceso a la información es gratuito, en tanto no se requiera su reproducción. Sólo el costo de reproducción, sus soportes y los gastos de envío, en su caso, son a costa del solicitante.

Principio de control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la información podrán ser recurridas ante otro órgano.

Principio de responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones disciplinarias o penales que correspondan.

In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Artículo 4º - Sujetos obligados. Son sujetos obligados por las disposiciones de esta ley:

- a) Los organismos o entes de la administración central y descentralizada y entes estatales en general;
- b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionen en su órbita;
- c) El Poder Judicial;
- d) El Ministerio Público;
- e) Los demás órganos creados expresamente por la Constitución Nacional;
- f) Las empresas y sociedades del Estado, entendiéndose por tales a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
- g) Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones públicas;
- h) Las asociaciones civiles, simples asociaciones, demás personas jurídicas privadas, o personas físicas a las que se les otorgaren

subsidios o aportes del Estado nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios;

i) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;

j) Las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público o explotación del bien de dominio público;

k) Los entes cooperadores creados por ley, así como también las empresas, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales o cooperativas que colaboren con las funciones esenciales del Estado y que se encuentren vinculadas con el Estado a través de convenios o cualquier otra forma asociativa, en lo que sea materia de ejecución de los referenciados convenios;

l) Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional.

La enunciación realizada en el presente artículo, en ningún caso puede ser interpretada en forma restrictiva como exclusión de sector alguno de la actividad pública.

TÍTULO II

Del acceso a la información

CAPÍTULO I

Solicitudes de información

Artículo 5º - Solicitud. La solicitud de información puede ser presentada ante el sujeto obligado de quien se requiere la información o bien ante la autoridad de aplicación competente por escrito, por vía electrónica, verbalmente o por cualquier otro medio análogo, sin sujeción a formalidad alguna. No es necesaria la manifestación del propósito o motivo del requerimiento.

En caso que la información no pueda ser entregada de manera inmediata, debe suministrarse al solicitante de la información el número de expediente o constancia correspondiente al trámite de su pedido.

Artículo 6º - Plazos. El sujeto obligado requerido debe responder a la solicitud de información en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se puede prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles, si existen circunstancias especiales que justifiquen la imposibilidad de entregar en término la información solicitada, de conformidad con el artículo siguiente. En ese caso, el sujeto obligado requerido debe notificar la decisión fundada de utilizar la prórroga y explicar cuáles son las circunstancias que, a su criterio, motivan su utilización.

Si el sujeto obligado requerido argumenta, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de dar satisfacción a la solicitud, debe reenviar el pedido a la Autoridad de Aplicación de la presente ley en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. Tanto en el supuesto previsto en el párrafo anterior como en el caso en el que la solicitud fuere presentada ante la autoridad de aplicación, dicha autoridad deberá, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, identificar y reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información solicitada. La autoridad de aplicación notificará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha de reenvío y, en la medida de lo posible, la fecha de recepción de la solicitud por el sujeto obligado.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información, debe responderla en el plazo previsto en el primer párrafo del presente artículo, contado desde la recepción de la solicitud remitida por la autoridad de aplicación.

Artículo 7º - Prórroga. Serán consideradas circunstancias justificantes de la prórroga del plazo de respuesta:

- a) La necesidad de buscar y reunir la información solicitada, en otros establecimientos que estuviesen físicamente separados de la oficina encargada de procesar el pedido;
- b) La necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes, diferentes e independientes entre sí, que se soliciten en un solo pedido;
- c) La necesidad de realizar consultas a otro organismo que pueda tener un interés importante en la decisión respecto del pedido. En caso de que el transcurso del plazo de diez (10) días ocasione un riesgo para la utilidad y la eficacia de la información solicitada, el sujeto obligado debe responder en un plazo menor al establecido por esta ley. El solicitante debe informar al sujeto obligado y, en su caso, acreditar cuáles son las circunstancias que hacen necesaria una respuesta en un plazo menor.

Artículo 8º - Respuesta. La información solicitada, preferentemente, se entregará en la forma y por el medio que el solicitante señale, o en su defecto por el medio más idóneo para cumplimentar el requerimiento.

El solicitante sólo debe solventar el costo de reproducción de la información que requiera, el que no puede exceder el valor de la reproducción del material y soporte de la misma, y, eventualmente, el costo de envío, si así fuese necesario y lo requiriera.

Toda información pública deberá estar disponible con el mayor nivel de apertura y desagregación compatible disponible. La solicitud no implica la obligación del sujeto obligado de crear o producir información con la que no cuente o deba contar al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado estuviere legalmente obligado a producirla en virtud de normas internas o de tratados internacionales.

En caso de que la información solicitada por el requirente, esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.

Artículo 9º - Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información, por acto fundado, si se verifica que tal información está incluida en alguna de las excepciones taxativamente previstas por esta ley o que no cuenta con la misma. En este último caso debe reenviar la solicitud a la autoridad de aplicación competente.

El silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta constituyen negativas injustificadas a brindar la información solicitada, resultando los responsables pasibles de las sanciones previstas en esta ley.

Tanto las resoluciones que conceden la información como aquellas que la deniegan deben indicar que, si el solicitante no está satisfecho con la respuesta que se le brinda, puede reclamar por las vías previstas en los artículos 18º y 19º de esta ley. Tal notificación debe incluir la reproducción textual de esos artículos.

Artículo 10. - Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que incumplan los deberes impuestos por esta ley serán pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en este artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por otras leyes les correspondan. Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:

- a) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en la esta ley y en sus reglamentaciones será sancionada con apercibimiento o suspensión sin goce de haberes de hasta diez (10) días;
- b) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las causas de justificación previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días;
- c) La entrega o puesta a disposición de información que se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días, salvo que la ley especial que establezca la reserva o secreto de la información prevea una sanción disciplinaria más grave, en cuyo caso se aplicará esta última;
- d) El incumplimiento de la resolución por la que la autoridad de aplicación respectiva resuelva el recurso administrativo previsto en el artículo 18, será sancionado con cesantía.
- e) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por la autoridad de aplicación correspondiente será sancionado con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días. Cuando corresponda la aplicación de una nueva suspensión y de ello resulte la acumulación de más de treinta (30) días de suspensión en un año,

contados a partir de la primera suspensión, se aplicará la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán impuestas de acuerdo con las circunstancias acreditadas, el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado y los antecedentes que registrare el funcionario en relación con el cumplimiento de esta ley.

Las sanciones se aplicarán por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos administrativos y judiciales propios del régimen al que se encuentre sujeto el funcionario sumariado.

El plazo de prescripción para aplicar las sanciones disciplinarias previstas en este artículo es de un (1) año contado desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido el plazo por la comisión de una nueva falta, la iniciación del sumario y la resolución que lo concluya.

El solicitante de la información, los terceros interesados y la autoridad de aplicación competente pueden instar los procedimientos sumariales y la aplicación de las sanciones previstas en este artículo e intervenir en calidad de parte en las actuaciones judiciales respectivas. A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, la autoridad de aplicación competente en cada caso deberá ser informada de modo inmediato y fehaciente de toda actuación sumarial que se inicie de acuerdo con lo establecido en este artículo.

Están excluidos del régimen disciplinario de este artículo el Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación y magistrados del Ministerio Público y los legisladores nacionales, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

Artículo 11. - Responsabilidad de los sujetos obligados que no sean funcionarios públicos. En el caso de los sujetos obligados incluidos en el inciso f) del artículo 4º, cuyos patrimonios no sean íntegramente estatales, y de los enumerados en los incisos f), g), h), j), k) y l) del artículo 4º, la comisión de alguna de las conductas tipificadas en el primer párrafo del artículo anterior será sancionada con multa, de acuerdo con la siguiente escala:

- a) Hasta diez (10) salarios mínimos vitales y móviles, en el caso previsto en el inciso a) del artículo anterior;
- b) Hasta treinta (30) salarios vitales y móviles, en los casos previstos en los incisos b), c) y e) del artículo anterior;
- c) Hasta cuarenta (40) salarios mínimos vitales y móviles, en el caso previsto en el inciso d) del artículo anterior.

Las sanciones establecidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las demás responsabilidades que por otras leyes les correspondan a las personas físicas y jurídicas involucradas.

Las sanciones aplicadas en virtud de este artículo a las personas jurídicas incluidas en el inciso f) del artículo 4º, cuyos patrimonios no sean íntegramente estatales, no obstan a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior a las personas físicas que las integren en representación del Estado Nacional o sus entes descentralizados, en caso de corresponder.

La multa será impuesta a petición del solicitante de la información, de tercero interesado o de oficio por la Oficina de Información Pública correspondiente, y su monto se determinará de acuerdo con las circunstancias acreditadas, el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado y los antecedentes que registrare el sujeto obligado en relación con el cumplimiento de esta ley.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento, el cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa del sujeto sumariado. El solicitante de la información y el tercero interesado tendrán calidad de denunciantes.

La resolución que imponga la sanción será impugnabile únicamente mediante un recurso directo de apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las cámaras federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de comisión de la falta, dentro del plazo establecido en el artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso tendrá efecto suspensivo.

El recurso directo deberá presentarse fundado ante el tribunal competente, el que solicitará de inmediato a la Oficina de Información Pública correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas correspondientes, las que deberán ser elevadas en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales.

Todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados alcanzados por este artículo se publicarán de modo permanente en el sitio web de la Oficina de Información Pública correspondiente, una vez que adquieran firmeza.

El plazo de prescripción para aplicar las sanciones administrativas previstas en este artículo es de un (1) año a contar desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta, la iniciación del sumario y la resolución que lo concluya.

Los recursos obtenidos por la percepción de las multas impuestas de acuerdo con lo establecido en este artículo serán destinados al programa "Asignación Universal por Hijo" o aquel que lo reemplace en un futuro.

CAPÍTULO II

De la transparencia activa

Artículo 12. - Transparencia activa. Los sujetos obligados contemplados en el artículo 4º incisos a), b), c), d), e) y f) deben

publicar, en el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados desde que se constituya la autoridad de aplicación, en forma obligatoria en sus respectivos sitios de Internet, de manera accesible, gratuita, actualizada y procesable por medios automáticos, en los casos que corresponda, la siguiente información:

- a) Su estructura orgánica, funciones y atribuciones;
- b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos;
- c) El marco normativo que les sea aplicable;
- d) La nómina de autoridades y personal que ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por una relación contractual, incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos financiados por organismos multilaterales, entes cooperadores u otras organizaciones vinculadas con convenios, detallando sus respectivas funciones, posición en el escalafón y categoría salarial;
- e) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
- f) Todo acto o resolución de carácter general, especialmente las normas que establecieren beneficios para el público en general o para un sector, y las actas en las que conste la deliberación de un cuerpo colegiado, cuando así ocurra, así como la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que le hayan servido de sustento o antecedente;
- g) Los informes de los votos de cada miembro en todos los procesos de decisión de los organismos colegiados;
- h) La información sobre el presupuesto asignado, sus modificaciones durante el ejercicio y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
- i) El listado completo de las licitaciones, concursos, contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, con especificación de sus objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas proveedoras, en su caso;
- j) Toda transferencia de fondos públicos con individualización de sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
- k) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o ex post, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;
- l) Los permisos o autorizaciones otorgados, especificando sus beneficiarios;
- m) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del organismo obligado;
- n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
- ñ) Un índice de la información en poder o bajo el control del sujeto obligado, incluyendo la nómina de aquellos documentos calificados como secretos o reservados y, en este último caso, la denominación

del documento y la individualización del acto o resolución en el que conste tal calificación;

o) Un registro electrónico de solicitudes de información y respuestas, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y la información divulgada;

p) Las sentencias definitivas o resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así como los dictámenes del Ministerio Público y del Procurador General del Tesoro que establecieren criterios para la interpretación y aplicación de la ley, con omisión de los nombres, en los casos en que no puedan ser revelados por disposición de otras leyes o convenciones internacionales;

La autoridad de aplicación será responsable de definir los esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser implementados de forma obligatoria por los sujetos obligados especificados en este artículo.

Artículo 13. - Portal de Internet. En cumplimiento del artículo anterior, la autoridad de aplicación es responsable de la construcción de un portal de Internet que sirva de guía para la búsqueda y acceso a los respectivos sitios web de cada uno de los sujetos obligados, así como de ayuda para la reutilización de la información.

Artículo 14. - Publicación en el Boletín Oficial. Es libre y gratuito el acceso vía Internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

Los anexos de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo nacional no publicados en la edición gráfica del Boletín Oficial de la República Argentina, podrán visualizarse en forma libre y gratuita a través del sitio que al efecto establezca la autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 15. - Presentación de informes anuales. Antes del 1° de marzo de cada año, los sujetos obligados contemplados en el artículo 4°, incisos a), b), c), d), e) y f) deben presentar a la autoridad de aplicación un informe correspondiente al año calendario anterior. Dicho informe debe incluir:

a) La cantidad de solicitudes de información que le fueron presentadas y el objeto de cada una de ellas;

b) La cantidad de solicitudes respondidas, así como las pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de agentes involucrados en la tarea;

c) La cantidad de resoluciones que hubieren denegado solicitudes de información y los fundamentos de cada una de ellas;

d) La cantidad de acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la presente ley y, en su caso, su resultado;

e) La información relativa a las sanciones disciplinarias;

f) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de esta ley.

TÍTULO III

Excepciones, recursos y autoridad de aplicación

CAPÍTULO I

Excepciones

Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho. Los sujetos obligados comprendidos en esta ley sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de la Nación, por razones de defensa, seguridad o política exterior. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- b) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante resolución de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Nación o por decreto de cualquiera de sus presidentes y que se correspondan con actuaciones de naturaleza reservada o secreta de conformidad con la legislación vigente. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- c) Cuando una ley del Congreso de la Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público o bien estableciere un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- d) Cuando se trate de información que pueda poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario y así lo hubiera evaluado fundadamente la autoridad competente;
- e) Cuando se trate de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos pertenecientes al sujeto obligado y que tuvieren un valor sustancial o fuere razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación pudiere perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
- f) Cuando se trate de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos, técnicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados, cuando fuesen individualizados su carácter de protegidos. También se entiende que procede esta excepción cuando la revelación de la información, sin fundamento en la defensa del interés público, pueda provocar importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interés vinculado con la salud y seguridad públicas y con la protección del ambiente fuere claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros, deberá revelarse la información;
- g) Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos

organismos y que se refieren a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;

h) Cuando se trate de información que obre en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos, o del organismo o entidad que eventualmente la reemplazare o absorbiere sus funciones;

i) Cuando se trate de información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración, cuya publicidad pueda revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgue las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información prive a una persona del pleno derecho a un juicio justo;

j) Cuando se trate de información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley 25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que exista interés legítimo del solicitante y se cuente con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiere la información solicitada. En caso de duda se estará a lo que dictamine la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales;

k) Cuando se trate de información amparada por el secreto fiscal y estadístico;

l) Cuando la divulgación de determinación pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

m) Cualquier información protegida por el secreto profesional;

n) Cuando se trate de información de carácter judicial cuya divulgación estuviese vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones internacionales.

Artículo 17. - Información parcialmente reservada. En el caso de que exista un documento con información reservada, los sujetos obligados deben permitir el acceso a la parte del documento no alcanzado por las excepciones detalladas en el artículo anterior.

Asimismo, se debe indicar expresamente la omisión de la información, por estar contemplada en una de las excepciones, así como la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atente contra el interés protegido por la excepción.

CAPÍTULO II

Recursos

Artículo 18. - Recurso administrativo. El solicitante de la información puede, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la resolución que hubiere denegado la solicitud o que la hubiere evacuado de modo deficiente, presentar un recurso administrativo ante la autoridad de aplicación competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21º de la presente ley.

El recurso interpuesto fuera del plazo indicado en el párrafo anterior se considerará como denuncia de ilegitimidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º, inciso e), apartado 6), de la ley 19.549.

Vencido el plazo fijado en el artículo 6º de esta ley y, en su caso, la prórroga dispuesta, sin que el sujeto obligado resuelva la solicitud de información, el solicitante podrá interponer el recurso previsto en este artículo en cualquier momento, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

Cuando la información solicitada se refiera a personas físicas o jurídicas privadas y la reserva o secreto haya sido establecido en exclusivo interés de aquéllas, la autoridad de aplicación interviniente podrá mediar entre el requirente, la persona a quien la información se refiere y el sujeto obligado, a fin de lograr la publicidad de la información, sin necesidad de agotar el procedimiento recursivo. El solicitante y la persona a quien la información se refiere pueden negarse a participar de la mediación o poner fin a ella en cualquier momento. La mediación no suspenderá el plazo para resolver previsto en el párrafo siguiente.

La autoridad de aplicación, previa sustanciación del recurso que garantice el debido proceso de todos los sujetos involucrados y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la recepción, puede decidir:

- a) Rechazar el recurso;
- b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.

La autoridad de aplicación debe notificar su decisión al solicitante, al sujeto obligado y a cualquier interesado, en forma fehaciente.

La decisión dictada puede ser impugnada judicialmente por la vía prevista en el artículo siguiente por el solicitante, por la persona a quien la información se refiera y por el sujeto obligado cuando se trate de alguno de los incluidos en los incisos g), h) y j) del artículo 4º. En la notificación de la resolución dirigida a las personas enumeradas precedentemente deberá indicarse la posibilidad de accionar judicialmente, con transcripción del artículo siguiente.

Artículo 19. - Recurso judicial. Toda persona cuyo derecho de acceso a la información pública se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, puede interponer la apelación judicial de acceso a la información ante los Tribunales competentes según lo establecido por esta Ley.

La apelación judicial de acceso a la información tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto para el juicio sumarísimo, en todo lo que no sea modificado por esta ley.

No será ni necesario ni obligatorio agotar la instancia de apelación administrativa establecida por la presente Ley.

La acción de acceso a la información debe ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud o del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta Ley;
- b) La notificación de la resolución que rechace la apelación administrativa prevista en el Artículo Anterior o del vencimiento del plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación administrativa, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley.

La resolución es recurrible ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en el plazo de diez (10) días hábiles.

Artículo 20. - Carga de la prueba. La carga de la prueba de la existencia de una excepción aplicable al caso deberá recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá establecer:

- a) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática;
- b) Que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por esta Ley; y
- c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la divulgación de la información.

CAPÍTULO III

Autoridades de aplicación (Oficinas de Información Pública)

Artículo 21. - Oficinas de información. Se crean como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, las siguientes Oficinas de Información Pública, a saber:

- 1) Una oficina de información del Poder Ejecutivo, como órgano desconcentrado dependiente del titular del Poder Ejecutivo nacional;
- 2) Una oficina de información del Congreso de la Nación, dependiente de los presidentes de ambas Cámaras, en lo relativo a los miembros designados respectivamente por cada una de éstas;
- 3) Una oficina de información del Poder Judicial, como órgano desconcentrado dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- 4) Una oficina de información del Ministerio Público Fiscal, como órgano desconcentrado dependiente de la Procuración General de la Nación;
- 5) Una oficina de información del Ministerio Público de la Defensa, como órgano desconcentrado dependiente de la Defensoría General de la Nación; y
- 6) Una oficina de información de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como órgano desconcentrado dependiente del Defensor del Pueblo de la Nación.

Las cinco primeras actuarán en el marco de la órbita de competencia de cada poder del Estado respectivamente, y la sexta lo hará cuando el sujeto obligado sea alguna de las personas u organizaciones

privadas alcanzadas por esta Ley y la propia de la Defensoría del Pueblo.

En ningún caso será admisible la avocación de las competencias atribuidas a las respectivas Oficinas de Información Públicas por las autoridades de las cuales dependen.

Artículo 22. - Integración. Las Oficinas de Información Pública se integrarán de la siguiente manera:

- 1) La del Poder Ejecutivo por 3 (tres) representantes; designados por el Poder Ejecutivo nacional;
- 2) La del Poder Legislativo, por 6 (seis) representantes del Congreso de la Nación; (Tres) designados por cada Cámara en proporción a la representación política;
- 3) La del Poder Judicial por 3 (tres) representantes; designados por el Consejo de la Magistratura;
- 4) Las del Ministerio Público Fiscal, por tres (3) miembros designados por la Procuración General de la Nación;
- 5) La del Ministerio Público de la Defensa, por tres (3) miembros designados por la Defensoría General de la Nación;
- 6) La del Defensor del Pueblo de la Nación, por tres (3) miembros designados por el Defensor del Pueblo de la Nación.

La integración de cada oficina deberá asegurar la representación por género y deberá recaer sobre personas con acreditada idoneidad y competencia en la materia.

Cada miembro durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados por una sola vez, resultando incompatible el ejercicio de la función con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo el desempeño de cargos docentes que no importen dedicación exclusiva.

Las oficinas de información pública deberán designar un Presidente cada año. La presidencia de la Oficina de Información Pública del Congreso de la Nación será alternativa y corresponderá un año a uno de los miembros designados por cada Cámara.

Cada oficina dictará su reglamento interno y sus normas de funcionamiento.

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán de las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales.

Artículo 23. - Votación. Las oficinas de información colegiadas requieren para sesionar la mayoría de sus integrantes, y tomarán sus decisiones por mayoría de votos. El presidente tiene voto doble en caso de empate.

Artículo 24. - Funciones. Son funciones de cada oficina de información, entre otras:

- 1) Aplicar, garantizar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;
- 2) Vigilar la disponibilidad en tiempo y forma de la información de acceso público;
- 3) Confeccionar informes anuales sobre la ejecución de esta Ley;
- 4) Recibir denuncias de particulares respecto de incumplimientos de esta Ley.
- 5) Resolver fundadamente los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados;
- 6) Administrar la puesta en marcha de cada portal de Internet de los organismos de los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 4° de la presente Ley;
- 7) Realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información;
- 8) Realizar actividades de difusión e información al público, para promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos estatales, y el derecho de acceso a la información, por cualquier medio de comunicación;
- 9) Efectuar estadísticas y reportes sobre el cumplimiento de esta Ley;
- 10) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la Ley tengan carácter secreto o reservado.

TÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 25. - Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Artículo 26. -Reglamentación. Cada autoridad de aplicación reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de constituida, para su ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional previstas por el artículo 99° inciso 2) de la Constitución Nacional.

Artículo 27. - Exhibición. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados en el artículo 4°, incisos a), b), c), d), e) y f) deberán exhibir en lugares visibles para el público las obligaciones derivadas de esta Ley, de acuerdo a lo que disponga oportunamente la autoridad de aplicación competente.

Artículo 28. - Adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas similares a la presente en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 29. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan M. Pais.- Rodolfo J. Urtubey.- Cristina Fiore Viñuales.- Juan M. Irrazábal.- Omar A. Perotti.- Beatriz G. Mirkin.- Dalmacio E. Mera.- Ruperto E. Godoy.- Miguel A. Pichetto.- Pedro G. Á. Guastavino.- Nancy S. González.-

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

El derecho al libre acceso a la información pública ha suscitado la presentación de numerosos proyectos en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, con el objeto de garantizarlo y regularlo adecuadamente. Incluso han existido proyectos que han avanzado con sanción en sendas Cámaras pero que ya han perdido estado parlamentario.

En ese orden de ideas, sigue siendo motivo de permanente reclamo de la sociedad civil, de diversas organizaciones no gubernamentales y de periodistas y operadores de los medios de comunicación social, el de avanzar con una legislación que reglamente adecuadamente este derecho, lo cual sin dudas constituye una legítima demanda de la sociedad a fin de profundizar y enraizar prácticas transparentes en la administración pública, mejorando con ello el control social.

En ese camino no es menor y poco trascendente el paso dado por el Poder Ejecutivo nacional a través del Decreto 1172/2003, por el que se aprobó un reglamento de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, así como también en tal norma se reglamentó las audiencias públicas, la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la elaboración participativa de normas, sin perjuicio de lo cual dicho avance debe consolidarse con un instrumento de jerarquía superior que tenga operatividad en todos los Poderes y organismos del estado nacional, para lo cual indubitadamente debe tener la jerarquía de una Ley.

La presente iniciativa tiene como antecedentes, proyectos de ley de mi autoría, que fueron presentados, oportunamente, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 1584-D-2010, 0835-D-2012 (basado en el dictamen la de minoría del orden del día 1064 del 2010) y 1579-D-2014, y a su vez reconoce como fuente necesaria la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la OEA, y el trabajo conjunto de muchos legisladores de todos los bloques parlamentarios que durante los años 2010 y 2011 fueron generando un marco de amplio consenso sobre el que abreva esta iniciativa parlamentaria.

La teleología de la presente iniciativa parlamentaria hace referencia a la doble dimensión del derecho a reglamentar. Pues por un lado está el acceso a la información pública como derecho de los ciudadanos y por otro, como necesaria contrapartida la exigencia de una administración transparente.

A su vez también hemos tenido en cuenta los diversos instrumentos legales vigentes en el derecho público provincial en donde existían normas que receptaban en plenitud el derecho a la información pública, inclusive con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, tales como las leyes vigentes en las provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut.

Es pertinente señalar que en un Estado social democrático, en la materia hay dos tendencias contradictorias que necesariamente deben armonizarse, por un lado la protección de la intimidad y privacidad del ciudadano, y por el otro el más amplio acceso a la información administrada por el Estado, que en muchos casos contiene información sensible de ciudadanos²⁰.

El suministro de información a los habitantes significa que la acción de gobierno se hace frente a ellos, reconociéndolos como sujetos activos de la vida pública y no como simple cumplidores de las disposiciones gubernamentales, pues "El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión".

La información pública que se encuentra administrada por el Estado resulta valiosa para el ciudadano, quien -en un sistema republicano y representativo de gobierno- tiene derecho político, consagrado constitucionalmente de acceder a aquella, ya que le permitirá participar en los asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, hacerlos responsables de los errores y aciertos de los mismos.

Corresponde destacar que el derecho de acceso a la información pública encuentra su fundamento en las propias bases del sistema representativo y republicano de gobierno, ya que no hay sociedad civil libre, ni civilizada, que no se asiente en el primero de los presupuestos que la viabilizan, el conocimiento de lo que el Estado hace y deja de hacer, para así poder controlarlo y cambiarlo conforme a procedimientos legítimos y legales que permitan una articulación razonable entre el Estado y esa sociedad que, a partir de sus actos u omisiones, alentará o desalentará la expansión o retracción tanto del poder de su Estado como de sí misma²¹. El uso secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.

"El acceso a la información pública es un derecho fundado en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la Administración. La publicidad constituye un presupuesto fáctico indispensable para controlar el ejercicio del poder, habida cuenta de que no se puede controlar aquello que se desconoce. Los funcionarios públicos se encuentran obligados a preservar la información personal cuya divulgación pudiera afectar la intimidad y derechos de las personas, como a satisfacer las demandas de información pública, siendo pasibles de responsabilidad disciplinaria frente al incumplimiento de esa obligación." ²²

²⁰ Palazzi, Pablo, "El derecho de acceso a la información pública en la ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en El Derecho Legislación Argentina, Boletín 4, 26/2/1999.

²¹ Informe del relator especial para la Libertad de Expresión 2002, cap. IV, "Libertad de expresión y pobreza", "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres", ptos. 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

²² Informe del relator especial para la Libertad de Expresión 2002, cap. IV, "Libertad de expresión y pobreza", "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres", ptos. 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"El acceso a la información se ha establecido claramente como un derecho humano en los diversos instrumentos internacionales pertinentes y en la jurisprudencia del sistema interamericano. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV recoge el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, como un derecho inherente a todo ser humano. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 protege, asimismo, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Finalmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001 hace eco de esta facultad de acceder a información pública y resalta nuevamente que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos."²³

"El derecho de acceso a la información [...], ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema como derecho de naturaleza social, que garantiza a toda persona -física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos y se evidencia en tanto enderezado a la obtención de información sobre los actos públicos como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno".²⁴

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude Reyes y otros v. Chile" interpretó que el artículo 13º de la Convención consagra el derecho humano de acceso a la información. En este sentido, la Corte estableció las siguientes directrices: 1) Que el artículo 13º de la Convención, al estipular expresamente los derechos de "buscar y a recibir informaciones," protege el derecho de toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención; 2) Que el actuar del Estado se debe regir por los principios de publicidad y transparencia y el principio de máxima divulgación - este último que establece una presunción de que toda información es accesible, excepto cuando esté sujeta a un sistema restringido de excepciones; 3) Que el silencio no puede ser una respuesta ante una solicitud de información; 4) Que dicho derecho tiene como contrapartida obligaciones positivas por parte del Estado; 5) Que el Estado debe suprimir tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías; 6) Que el Estado debe garantizar la

²³ RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a.)

²⁴ C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, "Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c. Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación", La Ley, 2005-D, 848. En este mismo sentido, C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, "Asociación del Personal Legislativo -APL- c. Estado nacional - Honorable Senado ley 23.551 s/ diligencia preliminar", 3/6/2004

efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados; 7) Que el Estado debe garantizar el derecho a ser oído y otorgar un recurso rápido y sencillo para hacer efectivo este derecho y 8) Que el Estado debe capacitar a los órganos, autoridades y agentes públicos en materia de acceso a información.

El debate acerca de los alcances sobre el acceso a la información pública está a la orden del día en toda Latinoamérica, ya que se entiende que en una sociedad democrática, la regla general consiste en permitir el acceso ciudadano a todos los documentos públicos. De allí que constituya un deber constitucional de las autoridades públicas entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado.²⁵

Conforme lo expuesto, y teniendo presente que para lograr una efectiva democracia participativa, sin dudas resulta un imperativo dotar al ciudadano de instrumentos adecuados para lograr la "transparencia administrativa" facilitando el acceso a la información administrada por el Estado, como una efectiva manifestación del ejercicio pleno de la libertad de expresión, que conforme lo establece el artículo 13° del Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por ley 23.054 y norma de rango constitucional) es "...la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole...".

En este marco, y conforme los antecedentes supra señalados, entiendo que una ley que garantice el libre acceso a la información administrada por el Estado, debe ampliar los horizontes, abarcando inclusive aquella información que en manos de los particulares tenga la calificación legal de pública en razón de la materia, pues de lo contrario, a través de una tercerización en los particulares, se podría vedar el acceso de información pública.

Legitimación Pasiva

La legitimación pasiva es la obligación del estado y de determinados sujetos privados de entregar la información requerida, la cual debe ser amplia abarcando todo tipo de órganos y autoridades públicas como así también a entes que colaboren en el quehacer público. Es por esto último que se debe tener en cuenta que para la verdadera existencia de un derecho de acceso a la información amplio también las empresas privadas, los organismos internacionales, las organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales que presten servicios públicos o colaboren con ellos, utilicen o no fondos públicos o manejen información de interés público deben responder a las solicitudes de información y hacer de los principios de publicidad y transparencia materia corriente en su actuar.²⁶

²⁵ En similar sentido La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-491/07. 27 de junio de 2007. Considerando 11.

²⁶ RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a. http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2599-08_esp.pdf

Como contrapartida natural al reconocimiento del acceso a la información como derecho, se encuentra la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento y ejercicio del mismo. A su vez, la OEA (en sus vastas recomendaciones), ha establecido que el Estado debe garantizar el derecho de las personas a ser oídas con las debidas garantías y a un recurso judicial sencillo y rápido para hacer efectivo este derecho. Si no existe un recurso judicial con estas características, el Estado debe crearlo para aquellos casos en que se haya rechazado la solicitud de acceso.

Es así que al solicitante al cual los organismos del Estado de alguna manera u otra le han demorado, denegado o infringido su solicitud de información, tiene el derecho de un proceso de apelación frente a una autoridad independiente que tenga el poder de adoptar decisiones obligatorias y coercibles.

Excepciones permitidas

La normativa proyectada sin dudas determina que el secreto sea una excepción expresamente legislada por ley. La necesidad de ser restrictivos para imponer excepciones fue descripta ya por el sociólogo alemán Max Weber, quien daba cuenta a principios del Siglo XX cómo el fenómeno burocrático tiende a aumentar el espacio de los "secretos oficiales". Afirmando que: "aumentar la superioridad de los profesionalmente informados manteniendo en secreto sus conocimientos e intenciones. La administración burocrática siempre tiende a ser una administración de "sesiones secretas": en la medida de lo posible, oculta a toda crítica sus conocimientos y sus acciones".²⁷

Asimismo a partir del caso Claude Reyes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede afirmar categóricamente que las causales que justifiquen la negación de una solicitud de información, deben ser, mínimas e indispensables y deben cumplir con los siguientes requisitos: a) estar establecidas por la ley; b) estar claramente definidas, ser taxativas, y reducirse al mínimo posible; c) tener un fin legítimo, entendiendo por tal la protección de los derechos o reputación de terceros, la seguridad nacional y el orden o moral pública; y d) ser necesarias y proporcionales para una sociedad democrática.

"Además de ser un derecho humano, el acceso a la información es un derecho democrático necesario para la gobernabilidad efectiva del Estado. Esta visión del acceso a la información como un derecho político dentro del sistema democrático proviene de la Carta Democrática Interamericana (aprobada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú), la cual tiene presente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos."²⁸

²⁷ Weber, Max: Burocracia en "Ensayos de sociología contemporánea". Ediciones Martínez Roca. Barcelona, 1972. Páginas 285-286

²⁸ RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a.

El derecho de acceso a la información aparece como un requisito esencial en la formación de la opinión pública, pues permite que las personas formen y expresen sus opiniones libremente; de tal manera que, en la confrontación de esas opiniones con las de los demás, se configure un espacio pluralista para el ejercicio responsable de la participación democrática.

A su vez la OEA reconoce que el acceso a la información es un requisito sine quo non para mantener un sistema de eficiencia en el manejo de los recursos públicos como así también para la lucha contra la corrupción.

En definitiva el derecho al acceso a la información configura un derecho instrumental, en tanto es una precondition al ejercicio de otros derechos, entre ellos el de libertad de expresión, el de la participación en la vida pública, etc.

Información administrada por el estado nacional

Los conceptos de "democracia" y "república" se han transformado a lo largo del tiempo, es recién a partir de la segunda mitad del siglo XX, con motivo de la necesidad de "desburocratizar" el accionar del Estado para hacerlo más transparente y cercano a la sociedad civil, en donde surgen las primeras leyes de acceso a la información pública. Así en 1966 EEUU dictó su primera ley de libertad de información, Finlandia, Dinamarca y Noruega dictaron leyes similares al poco tiempo. Desde ese entonces diversos países fueron incorporando el derecho al acceso a la información, ya sea por vía constitucional (Ej. Grecia, España y Portugal), o por vía legal (Ej: Canadá, Francia, Italia, Perú, México, Australia, Nueva Zelanda, etc.).²⁹

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1980/81, ha definido a la libertad de información es "la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente", resultando evidente que dicha potestad sólo se puede concretar garantizando el acceso a las fuentes de información con más la consecuente libertad de recibir y difundir dicha información [Corte Interamericana- Opinión Consultiva 5/85 13/11/1985, el artículo 13° del Pacto de San José de Costa Rica señala que quienes están bajo la protección de la Convención "tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole"].

En función de lo expuesto, la presente iniciativa legislativa prevé plasmar el derecho humano - de clara incidencia colectiva - a la información en términos generales y amplios, garantizando el libre acceso a la información pública y estableciendo el procedimiento al que deben ajustarse los obligados a brindarla, incorporando en la norma qué debe entenderse por información pública estatal, ello en la inteligencia que tal concepto es más abarcativo que aquella que surge

²⁹ Lavalle, Cobo, Dolores: "Derecho de acceso a la información Pública", Editorial Astrea. 2009.

específicamente de los actos de gobierno propiamente dichos, sino que debe reputarse por tal a la totalidad de la información administrada por el Estado y sus organismos.

El principio general proyectado es el del acceso libre a la información administrada por el Estado, con las mínimas excepciones universalmente reconocidas en función de la protección de intereses legítimos del Estado y los particulares, tales como el acceso a los datos personales que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas físicas (Conf. Artículo 2º ley 25.326), y aquella que tenga el carácter de reservada o secreta dispuesta por ley, decreto o resolución ministerial, o parlamentaria o acordada de la Corte, con fundamento en razones de defensa, seguridad nacional, política exterior, política económico-financiera sensible, política tributaria o científico-técnica, deba considerarse reservada o secreta a los fines de preservar los intereses del Estado y la sociedad toda.

En el año 1998 en el fallo "Urteaga, Facundo Raúl c. Estado nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. - s/ amparo ley 16.986" (15/10/1998), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ahondó sobre el derecho al libre acceso a la información. En aquella oportunidad el Juez Petracchi manifestó en el considerando 11, que: "El "derecho al libre acceso a la información", recibido expresamente en nuestro ordenamiento constitucional en el Artículo 13, inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también aparece claramente vinculado al hábeas data en el derecho comparado latinoamericano. Así, sigue esta línea la constitución Política de Colombia (1991), en cuanto establece, con mayor amplitud aún que el pacto citado, que "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley" (Artículo 74; acerca de la aplicación jurisprudencial de esta norma, confr. la sentencia publicada en ED, 166-40, referida a la autorización judicial a un periodista para acceder a los registros migratorios de entrada y salida del país del ex presidente peruano Alan García, asilado en Colombia). Del mismo modo, la Constitución de 1993 del Perú reconoce en su Artículo 2 inc. 5º, el derecho de toda persona a "solicitar sin expresión de causa la información que requiera, con la excepción de aquellas que afecten la intimidad o las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional", derecho que, con su notable amplitud, está garantizado con el recurso de hábeas data (Artículo 200 inc. 3º). También la Constitución Brasileira de 1988 asegura el derecho de información general (Artículo 5º, XIV), por un lado, y el instrumento del hábeas data, por el otro, para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona impetrante y para rectificar los datos (Artículo 5º, LXXII).

En la legislación federal norteamericana, la interrelación de la "Freedom of information Act" (FOIA, 5 USC Sec. 552) y la "Privacy Act" (5 USC Sec. 552a) constituye un claro exponente de la complementación entre el deber del Estado de poner a disposición del ciudadano la información que obre en su poder, y las restricciones a que se lo somete en cuanto a sus posibilidades en el manejo de los

datos con que cuenta acerca de los individuos. De este modo, la FOIA establece la libertad de las fuentes estatales de información. De acuerdo con ella, por regla general, el Estado está obligado a suministrar la información que se le requiera, sin que el solicitante deba invocar interés particular alguno, y la negativa de la agencia estatal a proporcionarla deberá estar fundada en alguna de las excepciones previstas. La "Privacy Act", por su parte, tiene por función otorgar a los individuos mayor control sobre la obtención, diseminación y exactitud de la información sobre ellos registrada en los archivos del gobierno (confr. "Miller v. United States" (ED NY) 630 F Supp 347; "Vymetalic v. FBI" 251 US App DC 402, 785 F2d 1090). Como se señala en la declaración de fines de la ley, el objeto de su sanción fue "conceder al individuo ciertas salvaguardas contra la invasión de su privacidad personal por parte de las agencias requirentes".

Es así que en este marco se individualiza suficientemente los sujetos públicos obligados y se establecen los principios generales en la materia, estableciendo el procedimiento de acceso, la autoridad de aplicación y las sanciones para aquellos operadores estatales que obstruyan o vulneren este derecho humano.

Consideraciones finales

Un párrafo aparte merece el rol que se le asigna en el presente proyecto al Defensor del Pueblo de la Nación, a fin que el mismo se constituya en autoridad de aplicación en cuanto al acceso a la información pública en poder de sujetos no estatales, como los que se encuentran expresamente individualizados en el presente proyecto, como son aquellas personas físicas o jurídicas que sean personas públicas no estatales, las asociaciones empresariales, sindicales y entidades u otras organizaciones o personas privadas a las que se les otorgaren subsidios o aportes del Estado nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios, las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público o explotación del bien de dominio público y también los entes cooperadores creados por ley, así como también las empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones o cooperativas que colaboren con las funciones esenciales del Estado y que se encuentren vinculadas con el Estado a través de convenios o cualquier otra forma asociativa, entre otros sujetos de derecho no estatal, y en la necesidad de establecer una autoridad de aplicación con competencia para regular, controlar y hasta sancionar los eventuales incumplimientos de la norma proyectada, hemos entendido que el Defensor del Pueblo de la nación como órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación con competencia constitucional y legal en la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución Nacional y las leyes está investido de suficiente facultades para constituirse en autoridad de aplicación.

Señora Presidente, en el entendimiento que la sociedad y nuestra Constitución reclaman no sólo el libre acceso a la información de naturaleza pública administrada por el Estado, sino también ampliar los horizontes de la participación y el control social en materias que hacen a la calidad del ambiente y al consumo de bienes y servicios, es que solicito a mis pares senadores el acompañamiento a la presente iniciativa.

Juan M. Pais.- Rodolfo J. Urtubey.- Cristina Fiore Viñuales.- Juan M. Irrazábal.- Omar A. Perotti.- Beatriz G. Mirkin.- Dalmacio E. Mera.- Ruperto E. Godoy.- Miguel A. Pichetto.- Pedro G. Á. Guastavino.- Nancy S. González.-

(VIII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TITULO I

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto y alcance

Artículo 1.- Objeto. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia o bajo control de cualquier autoridad pública o de alguna de las organizaciones privadas alcanzadas por esta ley, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés alguno, ni contar con patrocinio letrado. Los sujetos obligados deben, a su vez, proporcionar la información en los términos previstos por esta ley.

Artículo 2.- Definición de información pública. A los efectos de esta ley, se entiende por información pública todo dato que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que hubiere sido o debiera ser generado u obtenido por los sujetos obligados que se mencionan en el artículo 4º de la presente ley. Esta definición incluye toda constancia que obrare o debiere obrar en poder o bajo el control de dichos sujetos o cuya producción hubiere sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que sirviere de base para una decisión de naturaleza administrativa, tales como las actas de reuniones oficiales.

Capítulo II

Propósitos y principios básicos

Artículo 3.- Principios. Esta ley se funda en los siguientes principios:

a) Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública.

b) Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado será accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurriere alguna de las excepciones taxativamente previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.

c) Informalismo: las reglas del procedimiento para acceder a la información deberán facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia nunca podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no podrán fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.

d) Máximo acceso: la información se publicará de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por vía de la mayor cantidad de medios disponibles.

e) Apertura: la información será accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.

f) Disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada deberá ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.

g) No discriminación: se deberá entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

h) Máxima premura: la información deberá ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.

i) Gratuidad: el acceso a la información será gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.

j) Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Tanto las resoluciones que denegaren solicitudes de acceso a la información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante otro órgano.

k) Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone dará lugar a las sanciones disciplinarias o penales que correspondan.

l) In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información

deberá ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Capítulo III

Ámbito de aplicación

Artículo 4.- Los sujetos obligados de la presente ley son:

- a) Los organismos o entes de la Administración central, descentralizada y entes estatales en general;
- b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionan en su ámbito;
- c) El Poder Judicial;
- d) El Ministerio Público;
- e) Los demás órganos creados expresamente por la Constitución Nacional;
- f) Las empresas y sociedades del Estado, incluidas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales en las que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
- g) Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones públicas;
- h) Las asociaciones empresariales, sindicales, partidos políticos y entidades u organizaciones privadas a las que se les otorgaren subsidios o aportes creados por el Estado Nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios;
- i) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional;
- j) Las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público;
- k) Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado Nacional.

La descripción de esta ley en ningún caso puede interpretarse como exclusión de sector alguno de la actividad estatal.

Artículo 5.- En el caso de los sujetos referidos en los incisos f, g, h, j y k del artículo anterior, la obligación de proveer información queda restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado Nacional; y a la atinente a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo.

Artículo 6.- En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

Capítulo IV

Artículo 7.- Autoridad responsable. Cuando una solicitud de información sea dirigida a alguno de los sujetos obligados mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 4°, el

funcionario que tendrá bajo su responsabilidad directa la atención y evacuación de los pedidos de información será aquel que pueda tener un conocimiento efectivo de la información bajo su control, junto a la potestad suficiente para hacer cumplir las disposiciones de esta ley, estando sujeto al régimen de sanciones ordinario previsto para el escalafón en el que reviste el funcionario.

Capítulo V.

Obligación de transparencia activa.

Artículo 8.- Instrumentación. Los sujetos obligados contemplados en el artículo 4 deben publicar en forma obligatoria en sus respectivos sitios de Internet, de manera accesible, gratuita, actualizada y procesable por medios automáticos, en los casos que correspondiere, la siguiente información, según su competencia:

- a) Su estructura orgánica, funciones y atribuciones;
- b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos;
- c) El marco normativo que les sea aplicable;
- d) La nómina de autoridades y personal que ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por una relación contractual, incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones, posición en el escalafón;
- f) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
- g) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que establecieren beneficios para el público en general o para un sector, y las actas en las que constare la deliberación de un cuerpo colegiado, cuando ello ocurriese, así como la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que le hayan servido de sustento o antecedente;
- h) Los informes de los votos de cada miembro en todos los procesos de decisión de los organismos colegiados;
- i) La información sobre el presupuesto asignado, sus modificaciones durante el ejercicio y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;

Las Autoridades de Aplicación serán responsables de definir los esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser implementados de forma obligatoria por los sujetos obligados especificados en este artículo.

Sin perjuicio de lo anterior, establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la

República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

Artículo 9.- Informe Anual. Los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben presentar a la Autoridad de Aplicación pertinente un informe correspondiente al año calendario anterior antes del primero de marzo de cada año.

Dicho informe deberá incluir:

- a) La cantidad de solicitudes de información que le fueron presentadas y el objeto de cada una de ellas;
- b) La cantidad de solicitudes respondidas, las pendientes y el tiempo de procesamiento de las mismas.
- c) La cantidad de resoluciones que hubieren denegado solicitudes de información y los fundamentos de cada una de ellas;
- d) La cantidad de acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la presente ley y, en su caso, su resultado;
- e) La información relativa a las sanciones disciplinarias;
- f) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de esta ley.

Artículo 10.- Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 8. El sujeto obligado debe, en un plazo de (15) quince días hábiles a partir de la fecha de la presentación del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que pudieran corresponderle.

Capítulo VI.

Excepciones

Artículo 11.- Excepciones al deber de informar. Los sujetos obligados comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando se tratare de información clasificada como reservada o secreta por disposición expresa de una Ley del Congreso de la Nación;
- b) Cuando se tratare de información expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de la Nación, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- c) Cuando una ley del Congreso de la Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público o bien estableciere un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- d) Cuando se tratare de información que pudiese poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;

e) Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos pertenecientes al sujeto obligado y que tuvieren un valor sustancial, o fuere razonable esperar que lo tuviere, y cuya revelación pudiere perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;

f) Cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos, técnicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados. También se entenderá que procede esta excepción cuando la revelación de la información, sin fundamento en la defensa del interés público, que razonablemente pudiere provocar importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interés vinculado con la salud, seguridad pública y con la protección del medio ambiente fuere claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros, deberá revelarse la información;

g) Cuando se tratare de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos organismos y que se refirieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;

h) Cuando se tratare de información que obrare en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos, o del organismo o entidad que eventualmente la reemplazare o absorbiere sus funciones;

i) Cuando se tratare de información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración, cuya publicidad pudiere revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información privare a una persona del pleno derecho a un juicio justo;

j) Cuando se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley 25.326, cuya publicidad constituyere una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que se contare con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiriere la información solicitada;

k) Cuando la divulgación pudiere ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

l) Cualquier información protegida por el secreto profesional;

ll) Cuando se tratare de información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en Convenciones Internacionales.

Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información únicamente bajo las circunstancias precedentes, cuando la restricción fuere legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática.

Artículo 12.- Establecimiento de excepciones por los poderes públicos. La decisión que, conforme al artículo anterior, establezca excepciones al acceso a la información pública en el ámbito de los poderes del Estado, deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
- b) Las razones que fundamentan tal clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
- c) El organismo que produjo la información;
- d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva;
- e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario están disponibles para el acceso público.

En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y refrendada por el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al Jefe de Gabinete de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo la excepción que se procura es nula de nulidad absoluta. En el caso de los demás poderes públicos la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable de los mismos.

Artículo 13.- Período de confidencialidad o reserva. La información confidencial o reservada tendrá tal carácter a partir de la fecha en que la información haya sido producida; o que se encuentre bajo la posesión o control del sujeto obligado; o desde la fecha de declaración como reservada o confidencial, mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

La declaración de confidencialidad o reserva de la información no podrá exceder el plazo máximo de (10) diez años, a excepción de la que hubiere sido proporcionada por una fuente diplomática. Vencido dicho plazo, la información se considera pública y de libre acceso.

El sujeto obligado que tenga en su poder información pública reservada o confidencial debe periódicamente de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público.

En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para hacerla pública.

En el supuesto de que persistan las razones que fundamentaron la reserva o confidencialidad de la información dicho plazo podrá prorrogarse por un período más de (10) diez años.

Cuando se trate de datos personales contemplados en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los plazos previstos en este artículo no serán aplicables.

Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.

Artículo 14.- Excepción. No podrá invocarse el carácter de reservado y/o confidencial de una información ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación judicial sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa humanidad.

Artículo 15.- Información parcialmente reservada. En el caso de que existiere un documento que contenga información reservada incluida en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 11, los sujetos obligados deberán permitir el acceso a la parte del documento no alcanzado por las excepciones.

Asimismo, deberá indicarse que se ha omitido información, por estar contemplada en una de las excepciones, así como la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atentare contra el interés protegido por la excepción.

Artículo 16.- Apertura al público de la información clasificada. Dentro de los doce (12) meses de entrada en vigor de la presente ley, toda información clasificada como reservada será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10) años, a excepción de aquella que sea expresamente reclasificada.

La información clasificada como reservada será accesible al público aún cuando no se hubiera cumplido el plazo fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su clasificación como secreta en los términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la presente ley o cuando concurriera un interés público superior que justificare su apertura al público.

TITULO II

De la autoridad de aplicación y las Unidades de Enlace

Capítulo I

De los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)

Artículo 17.- Creación. Créanse en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Ministerio Público de la Nación un Centro de Acceso a la Información Pública para que actúen en la competencia de cada poder del estado respectivamente, y otro Centro de Acceso a la Información Pública en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que actúe en el ámbito propio de dicha Defensoría y de los demás sujetos obligados por esta ley. Los Centros serán reconocidos por las siglas CAIP y tendrán las funciones que establece la presente ley.

Artículo 18.- Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los poderes del Estado, debiendo garantizar en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento de lo estipulado por la presente ley.

Artículo 19.- Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:

- a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
- b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de requerimiento de acceso a la información pública y el refinamiento de los criterios de búsqueda;
- c) Colaborar re direccionando la consulta al sujeto obligado con el acceso a la información pública correspondiente e informar al requirente acerca de la respuesta otorgada;
- d) Publicar los resultados de las búsquedas, en especial, de las más frecuentes;
- e) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
- f) Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información pública como un derecho fundamental;
- g) Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los documentos, así como en la organización de dependencias y entidades;
- h) Elaborar anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información debiendo ser remitido a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación;
- i) Conocer y resolver respecto de los recursos de incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta Ley;
- j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) tienen legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
- k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de esta ley;
- l) Elaborar su Reglamento Interno y designar a su planta de agentes;
- m) Preparar su proyecto de presupuesto anual;
- n) Cuando correspondiese, informar al público acerca de la desclasificación reciente de información.

Artículo 20.- Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un Director y un Director adjunto designados por concurso público de antecedentes para todos los cargos y durarán 5 (cinco) años en su mandato no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será el encargado de sustanciar de forma simultánea los concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta Ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse audiencias públicas.

Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con acuerdo del Senado, que decidirá por simple mayoría de sus miembros presente.

Tanto el Director como el Director adjunto deberán ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Artículo 21.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado Director y/o Director adjunto de los CAIP se requiere ser ciudadano argentino mayor de (25) veinticinco años, poseer título universitario, y no haber ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores a

Secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años anteriores a la convocatoria.

El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.

Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.

Artículo 22.- Cese y remoción de los Directores de los CAIP. Los Directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Renuncia;
- b) Vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

La remoción se hará efectiva a través del voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes de una de las Cámaras previa instrucción del sumario que garantice el derecho de defensa.

Capítulo II

Unidades de Enlace

Artículo 23.- Unidades de Enlace. Los sujetos obligados por esta Ley designarán tantas Unidades de Enlace como sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo acceso a la información pública, de acuerdo a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a la reglamentación de la presente ley, con las siguientes atribuciones:

- a) Recabar y difundir la información pública, además de encargarse que se actualice periódicamente;
- b) Realizar los trámites y acciones necesarias para proporcionar la información solicitada y comunicársela a los CAIP a los efectos de responder las solicitudes realizadas;
- c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas establecidas en la presente ley;
- d) Implementar los procedimientos y criterios establecidos, de conformidad con lo señalado por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información pública;
- e) Las necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.

La reglamentación podrá establecer los casos donde se exceptué la obligación de crear una Unidad de Enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la información pública.

Título III

Procedimiento

Artículo 24.- Solicitud de información. La solicitud de información pública se podrá instrumentar por escrito ante el sujeto requerido, o mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, conforme a lo establecido por la reglamentación.

La solicitud debe contener como mínimo:

- a) Nombre y apellido;
- b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la reglamentación;
- c) Información de contacto, conforme a la forma de entrega de la información pública elegida por el solicitante;
- d) Descripción de la información solicitada, en forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo informado en el índice elaborado por el sujeto obligado;
- e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la reproducción de la información;
- f) Fecha y hora de la solicitud;
- g) Consentimiento del solicitante del pago del costo de reproducción fijado por el sujeto obligado;

La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el proceso de acceso a la información pública.

Artículo 25.- Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el peticionario, a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.

La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deben instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.

Artículo 26.- Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser razonable y no puede exceder el costo real abonado por el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte en caso de ser entregada en otros formatos.

La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, que demuestren la carencia de recursos suficientes.

Artículo 27.- Plazos. El sujeto obligado debe responder al requerimiento en un plazo máximo de (10) diez días hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante resolución del CAIP o la Unidad de Enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:

- a) Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;

- b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un solo pedido;
- c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés directo en la determinación del pedido;
- d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer párrafo.

Artículo 28.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) competente, en un plazo no mayor a (5) cinco días hábiles. Éste, en un plazo no superior a los (5) cinco días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información requerida.

Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquel.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la solicitud remitida por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Artículo 29.- Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la intimidad de terceros.

Artículo 30.- Información parcialmente reservada o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar información deben permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.

Artículo 31.- Producción de información. El sujeto obligado debe proveer la información solicitada, siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al solicitante mediante resolución fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado a producirla.

Artículo 32.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos, formatos electrónicos, en cualquier

otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.

Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.

Artículo 33.- Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no exista la exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta Ley.

El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa y/o judicial.

Artículo 34.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, deben formularse por escrito y estar fundadas.

Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.

TITULO IV

Recursos

Capítulo I

Recurso de incumplimiento.

Artículo 35.- Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) competente un recurso por incumplimiento dentro de los (10) diez días hábiles de la configuración de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos previstos en esta Ley.

La falta de respuesta al pedido de información por parte del sujeto obligado o la respuesta ambigua, inexacta o incompleta se interpretará como negativa injustificada de la información solicitada.

Artículo 36.- Transparencia activa. Cuando el recurso por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesto en cualquier momento.

Artículo 37.- Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información y los datos identificatorios del recurrente, fijando un

domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del sujeto obligado.

Artículo 38.- Plazos para resolver. Improcedencia. El Centro de Acceso a la Información Pública competente tendrá (10) diez días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente cuando se interponga transcurrido el plazo establecido en el artículo 35; cuando ya hubiera resuelto anteriormente de manera definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente; cuando el sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta ley; cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso; y cuando el supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.

Artículo 39.-Trámite. Declarado procedente el recurso, el Centro de Acceso a la Información Pública competente iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en el plazo de (3) tres días hábiles, para que formule su descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los (10) diez días hábiles.

Artículo 40.- Datos personales. Si en la información solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos personales se dará vista del mismo a la autoridad de aplicación competente en la materia.

Artículo 41.- Información complementaria. Audiencia. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) competente podrá solicitar la información complementaria que considere necesaria para resolver la cuestión y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el recurrente y, en su caso, la Unidad de Enlace del sujeto obligado.

Artículo 42. Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación del descargo del artículo 39 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de Acceso a la Información Pública competente resolverá el recurso en el plazo de (10) diez días hábiles; pudiendo ampliar dicho plazo por (5) cinco días hábiles, por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.

Artículo 43.- Resolución. El Centro del Acceso a la Información Pública (CAIP) competente al resolver el recurso de incumplimiento podrá desestimarlos; u ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la información pública al recurrente en un plazo de (10) diez días hábiles el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la complejidad del caso; o declarar que la información es reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres días hábiles de concluido el trámite. El sujeto obligado informará al Centro del Acceso a la Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los (3) tres días hábiles de producido.

Si la resolución no fuere favorable a la petición del solicitante, la notificación del rechazo a la apelación administrativa deberá informar sobre el derecho de accionar judicialmente y los plazos previstos para ello

Capítulo II

Recurso judicial

Artículo 44.- Acción judicial de Acceso a la Información Pública.

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, cuyo derecho de acceso a la información pública se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente Ley, podrá interponer la acción de acceso a la información ante los Tribunales de Primera Instancia con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal.

La acción de acceso a la información tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley. No será necesario agotar la instancia de apelación administrativa establecida por la presente Ley.

En caso de que una acción de acceso a la información se interponga estando pendiente la resolución de la apelación administrativa, se tendrá por desistida dicha apelación.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita.

La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

Artículo 45.- Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los (60) sesenta días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud; del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley;
- b) La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley.

Artículo 46.- Cumplimiento normas de transparencia activa. Cuando la acción judicial de acceso a la información tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesta en cualquier momento, sin plazo alguno.

Artículo 47.- Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal.

Artículo 48.- Otras vías judiciales. La acción judicial de acceso a la información no veda ni impide la interposición de cualquier otra acción

judicial, ni puede excluirse la vía del amparo por la existencia de la citada acción. El presentante deberá informar si ha iniciado otra acción con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.

Artículo 49.- Carga de la Prueba. La carga de la prueba de la existencia de una de las excepciones previstas en esta ley, deberá recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá establecer:

- a) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática;
- b) Que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por esta ley;
- c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño sea superior al interés público en la divulgación de la información.

TITULO V

Responsabilidad

Artículo 50.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le correspondan.

Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:

- a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre (10) diez y (30) treinta días;
- b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre (5) cinco y (25) veinticinco días;
- c) El incumplimiento de las resoluciones por las que el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por incumplimiento interpuesto será sancionado con cesantía;
- d) el incumplimiento de otros requerimientos expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de cualquier modo del cumplimiento de esta ley será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre diez y treinta días.

Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de (40) cuarenta o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.

Artículo 51.- Prescripción de las sanciones. El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de (2) dos años

desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario. La resolución que impusiere la sanción será impugnabile únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo federal del lugar de comisión de la falta.

Artículo 52.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario del artículo anterior el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los Jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y los Códigos de fondo.

Artículo 53.- Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, los responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre (1) uno y (100) cien salarios mínimos vitales y móviles.

La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con la capacidad económica del sujeto. Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

El solicitante de la información, los terceros interesados y la Autoridad de Aplicación podrán actuar instando los procedimientos sumariales.

Artículo 54.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta Ley, dentro del plazo de los (5) cinco días a partir de su imposición.

TITULO VI

Disposiciones transitorias y finales

Capítulo I

Disposiciones transitorias

Artículo 55.- Caducidad. La información reservada o declarada confidencial que tenga más de (10) diez años, con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a los (4) cuatro años de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración de confidencialidad.

Artículo 56.- VacatioLegis. Los sujetos obligados de esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias a los efectos de implementar lo establecido por esta ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada en vigencia:

Dentro de los 120 días:

- a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la información pública de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos en esta Ley;
- b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y producción de la información a fin de conformarla a los parámetros estipulados por esta Ley;
- c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma exigida por esta Ley, en los portales o sedes de los sujetos obligados.

Dentro de los 180 días: crear, capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o sus equivalentes.

Dentro de los 240 días:

- a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP);
- b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esta Ley.

Capítulo II

Disposiciones finales

Artículo 57.- Adhesión. Invítase a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, y municipios a adherir al régimen previsto en esta Ley.

Artículo 58.- Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por éstos.

Artículo 59.- Vigencia del Decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el decreto 1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) queden definitivamente conformados y se dispongan las normas que lo reemplacen.

Artículo 60.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los (90) noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 61.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro del término de (120) ciento veinte días de su entrada en vigencia.

Artículo 62.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Daniel R. Pérsico. –

FUNDAMENTOS

Señora presidente

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, a fin de saldar una exigencia que el poder político mantiene con la sociedad en general en un tema tan vital como este.

La construcción del estado constitucional moderno de derecho importa una obra progresiva, en la que los moldes iniciales van recibiendo, con las modificaciones del contexto de vida y el desarrollo de la conciencia jurídica, más contenidos.

De tal modo, por ejemplo, aun sin reforma constitucional expresa, con un mismo contexto normativo como nuestra constitución histórica, se descubren y constitucionalizan nuevos derechos. La idea de constitución viviente (living constitution) resulta así cada vez más atractiva para asumir tales despliegues y desarrollos.

Precisamente, el derecho de acceso a la información pública, encapullado históricamente en la noción de la forma republicana de gobierno que proclama el artículo primero de la Constitución Nacional (precepto que hace a la publicidad de los actos de gobierno una de sus banderas más flameantes) es una buena muestra de cómo de un concepto inicial pueden adoptarse nuevas variables.

En efecto, si la publicidad es algo intrínseco a la República, ¿cómo no concluir que los ciudadanos cuentan con el derecho a informarse de los actos (y de las omisiones) adoptados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones?

Resulta fundamental disponer de un catalizador que permita un control auténtico democrático sobre las tres ramas del poder estatal y de otros sujetos obligados detallados en este proyecto.

La ley de acceso a la información constituye una exigencia constitucional. En consecuencia, no contar con una ley que regule el derecho de acceso a la información pública -entendida ésta como norma general, abstracta, obligatoria emanada por el Congreso de la Nación en uso de sus competencias que establece el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional- afecta los derechos fundamentales de transparencia y publicidad de los actos de gobierno.

Justamente la necesidad de la reglamentación del derecho de acceso a la información pública mediante ley formal es un claro ejemplo de la conveniencia del ejercicio del poder de legislación dentro de los que se puede enunciar: su legitimidad democrática, en cuanto representa la voluntad general; su estabilidad y seguridad jurídica, a diferencia de lo que sucede con los decretos dictados por el Poder Ejecutivo que pueden ser dejados sin efecto simplemente por el dictado de otros decretos posteriores; la posibilidad de abarcar la información que esté en manos de cualquier poder del Estado y otros sujetos obligados, y por último, facilitar la lucha contra la corrupción, favoreciendo la transparencia de los actos públicos.

La Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, a pesar de que varias provincias y municipios regularon el ejercicio de este derecho en su ámbito.

Esta deuda con la sociedad intentó saldarse con un proyecto de ley, que obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados el día 8 de mayo de 2003 (Proyecto 0010-PE-02, presentado por Eduardo

Duhalde, Jorge Capitanich y Jorge Vanossi) pero no logró superar los cambios sugeridos en el Senado, perdiendo estado parlamentario en febrero de 2006.

Con posterioridad, las Comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la Diputada Camaño, de Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados analizaron dieciséis (16) proyectos de ley sobre acceso a la información (Exptes. CD. Nros. 1594-D-07, 1146-D-09; 3361-D-09; 0040-D-10; 0202-D-10; 0431-D-10; 0882-D-10; 1122-D-10; 1541-D-2010; 1584-D-10; 2269-D-10; 2308-D-10; 2384-D-10; 2756-D-10; 3521-D-10; 3608-D-10; 3696-D-10.), lográndose dictamen de mayoría abarcativo y por consenso –luego de arduas y prolongadas reuniones- el 1° de septiembre de 2010.

En ese tiempo, la Cámara de Senadores trató también, en forma simultánea, diversos proyectos de acceso a la información, y el día 7 de septiembre de 2010 dio media sanción al proyecto elaborado por el ex senador Cabanchik (Expte. 85-S-2010), antes que el citado dictamen sobre acceso a la información pudiera ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.

Sin perjuicio de ello, la citada media sanción incorporó gran parte del contenido del dictamen de mayoría aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados como resultado de reuniones conjuntas celebradas entre los asesores jurídicos de la citada Comisión y personal letrado del ex senador Cabanchik.

De esta manera, el día 13 de octubre de 2010 ingresó a la Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara Revisora, la media sanción dada por el Senado al proyecto de ley, emitiendo las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia dictamen de mayoría favorable (Expte. 116-D-10), pero ella no fue tratado por el pleno de la Cámara baja, perdiendo estado parlamentario.

Por ello, el presente proyecto de ley busca reivindicar -y que vuelva a tener estado parlamentario- la media sanción dada por el Senado al proyecto de ley sobre acceso a la información pública del año 2010, con varios agregados de mi autoría.

Máxime cuando dicha media sanción hizo suyas muchas exigencias efectuadas por diputados de diferentes partidos políticos (Pro, Radicalismo, Frente Renovador -antes peronismo disidente-, Socialismo, ARI; todos ellos integrantes del denominado ex "Grupo A" de la Cámara de Diputados de la Nación) entre otros, habiéndose generado un consenso generalizado con ella.

Luego de exponer los fundamentos y trámite parlamentario del presente proyecto, hay que recordar que el derecho a informar y ser informado implica uno de los derechos fundamentales y constitutivos del Estado constitucional de derecho. Se trata de un derecho inescindible de la forma democrática de gobierno (Blassi, Vincent, "TheCheckingvalue in Firstamendmenttheory", American Bar FoundationResearch, vol. 1977, springLumber 2, cit. en "Fundamentos del proyecto de ley 0010-PE-02", del 18/03/2002).

El fin del derecho de acceso a la información reside en la búsqueda de control, en la necesidad de transparencia y en la fundamentación de todo acto público.

El ejercicio efectivo del derecho sólo tiene sentido en la medida que exista información previa que haga posible una verdadera elección dentro del sistema (Pierini, Alicia- Lorences, Valentin, "Derecho de acceso a la información. Por una democracia con efectivo control ciudadanos. Acción de amparo", Universidad de Buenos Aires, 1999, p. 32/33).

El derecho de acceso a la información pública en cualquiera de las ramas de los tres poderes del Estado, hasta la reforma constitucional de 1994, sólo estaba amparado implícitamente en la norma de los artículos 1º, 14 y 33 de la Constitución Nacional.

En similar sentido, la doctrina ha dicho que: "El derecho humano de acceder a la información pública se deriva de la especificidad de nuestra forma de gobierno: el régimen republicano establece como principio rector la publicidad de los actos de gobierno y, el régimen democrático representativo, la obligación de nuestros funcionarios y representantes de dar cuenta de sus actos" (Araujo Fernanda- Braguinsky Eugenia- Garrido Manuel, "El derecho de acceso a la información. Recomendaciones para la elaboración de una ley nacional", CIPPEC. Documento de Políticas Públicas, Recomendación nro. 80. año 2010).

Con la reforma constitucional de 1994, si bien no se incorpora específicamente una única norma que contemple la obligación estatal de brindar información a los ciudadanos, sí se establece expresamente el deber estatal de facilitar y allanar el acceso a la información pública en casos concretos.

Esos casos son: en relación a los partidos políticos (art. 38 CN); al medio ambiente (art. 41 CN); a los consumidores de bienes y servicios (art. 42 CN); en lo que se refiere a los datos personales obrantes en los registros o archivos estatales (art. 43, 3 párrafo CN). También en los tratados con jerarquía constitucional incorporados en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13.1), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2), en los que se consagran el derecho de recibir información como contracara necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión.

De los fallos jurisprudenciales que han tratado el tema, y son recepcionados en este proyecto, merecen nuestra atención ciertos pronunciamientos que marcaron un antes y un después en lo relativo al derecho de acceso a la información pública. Entre los más destacados citaremos los siguientes:

Fallo "Tiscornia, Sofía y otro c. Estado Nacional- Ministerio del Interior y otros/ amparo ley 16.986" (C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala III, 17/12/1997. Causa 28833/96).

En la citada causa, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que el CELS tiene suficiente legitimación activa para accionar contra el Estado a fin de garantizar el derecho a la información pedida, a tenor de los propósitos del Centro de Estudio Legales y Sociales incluidos en su estatuto, y señaló que los tratados internacionales, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054, tiene jerarquía constitucional, con superioridad a las leyes desde la reforma de la Constitución del año 1994, según lo dispone expresamente el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Dicha convención, en su artículo 13 inc. 1, acuerda a toda persona el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y establece que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Fallo “Fundación Poder Ciudadano v. Estado Nacional –Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986” (“Fundación Poder Ciudadano v. Estado Nacional –Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ Amparo ley 16.986”, Juzgado Cont. Adm. Fed. N° 5, 22/11/2001. Publicado en El Dial, www.eldial.com, AAB93.)

El fallo se vincula con la publicidad de las declaraciones juradas, ordenando a la Secretaría Administrativa del Senado dar cumplimiento con su obligación legal de dar a conocer a la accionante las declaraciones juradas de los señores senadores, conforme lo exige la ley 25.188.

En punto a la legitimación, entendió que quien invoque un derecho subjetivo o interés legítimo será considerado parte interesada, agregando que existen instituciones y asociaciones, cómo la que allí se presentó, que pretende lograr la mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Respecto a la cuestión de fondo, consideró que la lesión de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional puede producirse tanto por actividad como por inactividad estatal, agregando que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y son superiores a las leyes desde la reforma constitucional del año 1994, y cita expresamente al artículo 13 inc. 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, se sostuvo que cabe interpretar que el régimen legal ha dispuesto la obligatoriedad de las declaraciones juradas de aquellos sujetos que finalmente establece el artículo 4° de la ley 25.188 en forma taxativa, con la finalidad de lograr una mayor transparencia en el desarrollo de las funciones administrativas, judiciales y legislativas.

Fallo “Centro de Implementación de políticas Públicas E. y C. y otro v. Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación s/ Amparo ley 16.986” (Causa 17426/2004, C.Nac.Apel.Cont.Adm. Fed., 27/05/2005, El Dial/AA2A79).

Este pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la publicación en el sitio de Internet de los decretos administrativos y parlamentarios, constituye una obligación de los respectivos secretarios, según lo establecido en las normas mencionadas. La omisión de la referida publicación, en contra de lo dispuesto por el reglamento del Senado de la Nación, vulnera el derecho a la información reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

De la parte sustancial del fallo surge que el principio de publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano y existen diversas normas que colocan, en cabeza de los órganos y entes del Estado, el deber de, en principio, dar a conocer información. En tal sentido, destaca y describe el ya mencionado art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –las restricciones al derecho deberán estar fijadas por ley, por motivos de seguridad nacional, orden público, salud o moral pública- agregando que en el presente caso el demandado no ha acreditado tales excepciones.

De esta manera, la jurisprudencia citada reitera el deber del Estado de adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar el reconocimiento y aplicación efectiva del derecho a la información pública, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias causas, entre las que se encuentra la caratulada "Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986" de fecha 4 de diciembre de 2012, -A. 917. XLVI-.

En la actualidad, en el orden nacional, la única norma reglamentaria del mandato constitucional genérica que se refiere al "acceso a la información pública" es el Decreto N° 1172/2003 de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

El fundamento más importante que surge de los propios considerandos gira en torno de la necesidad de fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima.

Así, para regular los pedidos de información dentro de la órbita de la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo dictó el decreto n° 1172/03, en uso de sus facultades conferidas por el artículo 99 inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional, que mediante su Anexo VII reglamentó, entre otras cuestiones, el acceso a la información dentro de su esfera de actuación.

De esta manera, su artículo 2° dispuso que: "El presente reglamento general es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Las disposiciones del presente son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las que hayan otorgados subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado

Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgados mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público".

Mediante el artículo 18 reguló lo relativo a su autoridad de aplicación, en los siguientes términos: "La autoridad de aplicación del presente Reglamento es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo".

Uno de los puntos más débiles del citado decreto consisten su ámbito de aplicación, dado que no incluye otros ámbitos gubernamentales. Esto se encuentra estrechamente ligado a la ubicación, competencias y facultades de la autoridad de aplicación fijada en la citada norma.

Que la autoridad de aplicación del decreto sea la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros se condice con el ámbito restrictivo de sus facultades dado que ésta carece de legitimación para tomar decisiones de carácter vinculantes y, eventualmente, de aplicar un régimen sancionatorio adecuado para lograr el efectivo cumplimiento de la norma.

Dicho carácter restrictivo no solo se refiere a su limitado ámbito de aplicación, sino también para lograr el cumplimiento del reglamento por parte de los sujetos obligados enumerados en su artículo 2°.

Ello se ve claramente cuando como resultado del silencio de la administración o en caso de denegación de la información, el decreto 1172/03 remite a la acción de amparo por mora administrativa establecido en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Además, resulta necesario tener presente que por tratarse de un decreto tiene rango inferior a una ley formal dictada por el Congreso Nacional, lo que implica cierto grado de inseguridad jurídica.

En este punto, hay que citar las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos en la materia.

La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información fue elaborada en cumplimiento del párrafo 9° de la resolución AG/RES 2514, que encomendó al Departamento de Derecho Internacional -en cooperación con el Comité Jurídico Interamericano, la Relataría Especial de Libertad para la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, y con la cooperación de los Estados Miembros y la sociedad civil- la confección de una Ley Modelo de Acceso a la Información Pública y una guía para su aplicación, de conformidad con las estándares internacional de la materia (Ver nota explicativa de la Ley Modelo de la OEA).

Dicha ley fue presentada el 23 de abril de 2010 ante el Consejo Permanente de la organización de los Estados Americanos por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información de conformidad con la citada resolución, y se basó en los siguientes lineamientos fundamentales:

- a) El acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una condición esencial para todas las sociedades democráticas;
- b) El derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda información controlada y archivada en cualquier formato o medio;
- c) Las excepciones al derecho de acceso a la información a la información deben ser claras y específicamente establecidas por la ley;
- d) Los órganos públicos deberán divulgar información sobre sus funciones en forma regular y proactiva, de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible;
- e) Toda persona debe tener el derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción de acceso a la información ante una instancia administrativa, y de apelar las decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia;
- f) Toda persona que intencionadamente niegue u obstruya el acceso a la información violando las reglas de la ley debe estar sujeta a sanción.
- g) En el título VI de la ley OEA se reguló lo relativo a su autoridad de aplicación, la cual se denominó "Comisión de Información", que tiene a su cargo la promoción de la efectiva implementación de la Ley. Se le asignó personalidad jurídica completa, incluyendo poderes para adquirir y disponer de propiedad, y el poder de demandar y ser demandada, por lo tanto se ve claramente que se le atribuye una legitimación procesal amplia para actuar, junto con autonomía operativa, de presupuesto y decisión (v. Artículo 54 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información).

Del estudio y seguimiento de todos estos antecedentes constitucionales e infra constitucionales, y de los precedentes jurisprudenciales citados, surge la necesidad de reglamentar el derecho al acceso a la información pública en el presente proyecto de ley.

De esta forma, el título primero del proyecto en cuestión trata las disposiciones generales que debe tener una ley de acceso a la información pública, como por ejemplo, quienes son los sujetos habilitados para hacer las solicitudes y qué se entiende por información (art. 1º y 2º); los principios fundamentales en los que se asienta la norma (art. 3º); los sujetos obligados a brindar la información (art. 4º); la no afectación de la libertad de prensa y de las fuentes periodísticas (art. 6º); la autoridad responsable de suministrar la información con relación a los sujetos obligados (art. 7º); la obligación de transparencia activa (artículo 8º y ss); las excepciones al deber de informar (art. 11 y ss); regulación del período de reserva (art. 13 y ss), entre otras.

Por su parte, el título II comienza por regular lo vinculado con la autoridad de aplicación de la ley (Centros de Acceso a la Información Pública – en adelante CAIP- y las Unidades de Enlace (art. 17 y ss), produciéndose una descentralización de la autoridad de la aplicación.

Cada poder es el encargado de su creación, respetando obviamente los preceptos contenidos en la norma. Además crea otro Centro de Acceso a la Información Pública en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que actúe en el ámbito propio de dicha Defensoría y en los casos en que los sujetos obligados sea alguno de los entes privados alcanzados por la norma; también regula las características que deben revestir las CAIP entre las que se encuentran: independencia (art. 18), competencia y funciones (art. 19), integración (art. 20), requisitos e incompatibilidades (art. 21); cese y remoción (art. 22); y en el artículo 23 pueden verse las principales características de las Unidades de Enlace.

El Título III plasma todo lo vinculado al procedimiento de solicitud de información (arts. 24 a 34); y en el Título IV se trata lo atinente a los recursos administrativos (arts. 35 a 43) y/o judiciales (arts. 44 a 49) para los distintos supuestos en que el sujeto obligado no suministre adecuadamente la información requerida.

Por último, el Título V regula la responsabilidad en que incurren los sujetos obligados en el supuesto de incumplimiento de la norma (arts. 50 a 54), junto a las disposiciones transitorias que emanan del título VI (arts. 55 a 62).

En síntesis el derecho de acceso a la información debe ser reglamentado mediante ley formal sancionada por el Congreso de la Nación dado su legitimidad democrática, su estabilidad, garantizándose así la seguridad jurídica; la posibilidad de abarcar la información que esté en manos de cualquier poder del Estado y otros sujetos obligados, de imponer sanciones, en caso de ser necesario; y por último, facilitar la lucha contra la corrupción, favoreciendo la transparencia de los actos públicos.

Todo ello acorde al programa presidencial de modernización del Estado propuesto por el oficialismo.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen la presente iniciativa.

Daniel R. Pérsico

(IX)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TITULO I Disposiciones generales

Capítulo I Objeto y alcance

ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos para garantizar a toda persona física o jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.

ARTÍCULO 2º.- Alcance. Toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna.

El derecho regulado en esta ley es un derecho humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva realización de otros derechos, y como tal no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten.

ARTÍCULO 3º.- Definición de información pública. A los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o representado, que hubiere sido o debiera ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control, o cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente por el erario público, conforme a los alcances de la misma.

Capítulo II Propósitos y principios básicos

ARTÍCULO 4º.- Propósitos. Los propósitos de la presente ley son:

- a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
- b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por ésta;
- c) Lograr la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se toman en el ejercicio de la función pública;
- d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
- e) Sentar las bases para la práctica de la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados; y
- f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.

ARTÍCULO 5º.- Principios Básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios básicos:

- a) Apertura informativa máxima: toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a un sistema restringido de excepciones;
- b) Transparencia activa: los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de forma actualizada;
- c) Promoción de un gobierno abierto: las entidades públicas deben garantizar, implementar y hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo cual implica promover activamente una cultura de apertura gubernamental y una amplia conciencia pública de la presente ley;
- d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información;
- e) Principio de libertad de formas: la solicitud de acceso a la información pública debe tramitarse de manera oportuna y justa, en términos de igualdad, con la mínima formalidad que la haga procedente, identificando la información que se requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio letrado.
- f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía procesal, sencillez y eficacia en todas las instancias de tramitación de las solicitudes de requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta debe contar con la disponibilidad de una expedita vía recursiva suficiente;
- g) Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información, conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá establecer una reducción en dichos costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público.
- h) In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley, o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información, deberá ser efectuada siempre, en caso de duda, en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Capítulo III

Ámbito de aplicación

ARTÍCULO 6º.- Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de la presente ley son:

- a) Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central, desconcentrada y descentralizada;
- b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tenga participación accionaria, en la formación del capital o de la voluntad societaria;

- c) Los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional;
- d) Los entes privados a los que se les haya entregado un subsidio o aporte proveniente del Estado nacional de manera directa o indirecta, o a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público;
- e) Los entes reguladores de servicios públicos;
- f) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
- g) La Auditoría General de la Nación;
- h) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
- i) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio de funciones públicas, tales como los partidos políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
- j) El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades financieras que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público nacional;
- k) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
- l) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
- m) El Ministerio Público de la Nación, con las limitaciones establecidas por esta ley;
- n) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades; y
- o) Las corporaciones regionales;

La enumeración precedente no es taxativa.

En el caso de los sujetos referidos en el inciso d) la obligación de proveer información queda restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado nacional; y a la atinente a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo.

En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.

Capítulo IV

Obligación de transparencia activa

ARTÍCULO 7º.- Sistematización de la información. Los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información, como también su integración en línea a través de medios electrónicos, en los términos que disponga la presente ley y su reglamentación, para asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.

Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia total de la información disponible en formato digital.

ARTÍCULO 8º.- Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, a través de sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con capacidades especiales.

ARTÍCULO 9º.- Información a publicar. Con excepción de la información secreta, reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos sitios electrónicos, al menos, la información siguiente:

- a) Un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que puede ser solicitada, como así también los costos de reproducción correspondientes;
- b) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
- c) Descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los procedimientos que se siguen para tomar decisiones;
- d) Los objetivos y acciones de conformidad con sus planes, programas y proyectos, informes de actividades realizadas;
- e) El presupuesto asignado a cada área, programa y función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
- f) Transferencias de fondos públicos provenientes de y dirigidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
- g) Las contrataciones públicas;
- h) Los informes de auditorías o evaluaciones internas o externas;
- i) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares;
- j) Detalles pertinentes sobre los servicios que brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
- k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen funciones en forma permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual, detallando sus funciones y escalafón;
- l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado;
- m) Mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
- n) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que

obran en su poder, las categorías de información que publica y las vías recursivas disponibles;

o) Registro de solicitudes y denuncias, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y resúmenes de las solicitudes o denuncias interpuestas y la respuesta brindada;

p) El domicilio y los datos de contacto de la Unidad de Enlace; y

q) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

ARTICULO 10.- Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados, así como la autoridad de aplicación correspondiente deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de las Unidades de Enlace correspondientes, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información solicitada, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 11.- Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que pudieran corresponderle.

Capítulo V Excepciones

ARTÍCULO 12.- Excepciones. Los sujetos obligados comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno de los siguientes supuestos:

- a) La establecida por disposición expresa de una ley;
- b) El secreto industrial, comercial, financiero, científico o técnico; y
- c) La información protegida por el secreto profesional.

Toda la información que en algún momento fue reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada y puesta a disposición del público.

ARTICULO 13.- Establecimiento de excepciones por los poderes públicos. La decisión que, conforme al artículo anterior establezca excepciones al acceso a la información pública en el ámbito de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
- b) Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
- c) El organismo que produjo la información;

- d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva; y
- e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario están disponibles para el acceso público.

En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al Jefe de Gabinete de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo la excepción que se procura es nula de nulidad absoluta.

En el caso de los demás poderes públicos la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable de los mismos.

ARTÍCULO 14.- Período de confidencialidad o reserva. La información confidencial o reservada tendrá tal carácter a partir de la fecha en que la información haya sido producida, que se encuentre bajo la posesión o control del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración como reservada o confidencial, mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

La declaración de confidencialidad o reserva de la información no podrá exceder el plazo máximo de DIEZ (10) años, a excepción de la que hubiere sido proporcionada por una fuente diplomática. Vencido dicho plazo, la información se considera pública y de libre acceso.

El sujeto obligado que tenga en su poder información pública reservada o confidencial debe periódicamente de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público.

En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para hacerla pública.

En el supuesto de que persistan las razones que fundamentaron la reserva o confidencialidad de la información dicho plazo podrá prorrogarse por un período más de DIEZ (10) años.

Cuando se trate de datos personales contemplados en la Ley N° 25.326, o en el régimen que la sustituya, los plazos previstos en este artículo no serán aplicables.

Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.

ARTÍCULO 15.- Excepción. No podrá invocarse el carácter de reservado y/o confidencial de una información ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación judicial sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa humanidad.

TITULO II

De la autoridad de aplicación y las Unidades de Enlace

Capítulo I

De los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)

ARTÍCULO 16.- Creación. Créase en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de Acceso a la Información Pública que será reconocido por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.

En el resto de los sujetos obligados mencionados en el artículo 6º deberán crearse las respectivas Unidades de Enlace.

Tanto los CAIP como las Unidades de Enlace tendrán como objeto velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos de la presente ley, de modo tal de lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, así como también su difusión y publicidad.

ARTÍCULO 17.- Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento de lo estipulado por la presente ley.

ARTÍCULO 18.- Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:

- a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
- b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de requerimiento de acceso a la información pública y el refinamiento de los criterios de búsqueda;
- c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto obligado con el acceso a la información pública correspondiente e informar al requirente acerca de la respuesta otorgada;
- d) Publicar los resultados de las búsquedas, en especial, de las más frecuentes;
- e) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
- f) Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información pública como un derecho fundamental;
- g) Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los documentos, así como en la organización de dependencias y entidades;
- h) Elaborar anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información debiendo ser remitido a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación;
- i) Conocer y resolver respecto de los recursos de incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta ley;
- j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los

Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;

k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de esta ley;

l) Elaborar su Reglamento Interno y designar a su planta de agentes;

m) Preparar su proyecto de presupuesto anual; y

n) Cuando correspondiese, informar al público acerca de la desclasificación reciente de información.

ARTÍCULO 19.- Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un Director y un Director adjunto designados por concurso público de antecedentes para todos los cargos y durarán CINCO (5) años en su mandato no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será el encargado de sustanciar de forma simultánea los concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse audiencias públicas.

Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el acuerdo del Senado.

Tanto el Director como el Director adjunto deberán ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental en una sociedad democrática.

ARTÍCULO 20.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado Director y/o Director adjunto de los CAIP se requiere ser ciudadano argentino mayor de VEINTICINCO (25) años, poseer título universitario, y no haber ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores a Secretario del Poder Ejecutivo en los DOS (2) años anteriores a la convocatoria.

El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.

Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la Ley N° 25.188.

ARTÍCULO 21.- Cese y remoción de los Directores de los CAIP. Los Directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia;

b) Vencimiento del plazo de su mandato;

c) Incapacidad sobreviniente;

d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;

e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

La remoción se hará efectiva a través del voto de la mayoría absoluta

de la totalidad de los miembros de una de las Cámaras previa instrucción del sumario que garantice el derecho de defensa.

Producida una vacante en el directorio de uno de los CAIP tendrá lugar el proceso de designación indicado en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de TREINTA (30) días.

Capítulo II

Unidades de Enlace

ARTÍCULO 22.- Unidades de Enlace. Los sujetos obligados por esta ley designarán tantas Unidades de Enlace como sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo acceso a la información pública, de acuerdo a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a la reglamentación de la presente ley, con las siguientes atribuciones:

- a) Recabar y difundir la información pública, además de encargarse que se actualice periódicamente;
- b) Realizar los trámites y acciones necesarias para proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las solicitudes realizadas;
- c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas establecidas en la presente ley;
- d) Implementar los procedimientos y criterios establecidos, de conformidad con lo señalado por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información pública; y
- e) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.

La reglamentación podrá establecer los casos donde se exceptúe la obligación de crear una Unidad de Enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la información pública.

Título III

Procedimiento

ARTÍCULO 23.- Solicitud de información. La solicitud de información pública se podrá instrumentar por escrito en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o bien entregada en su sede, conforme a lo establecido por la reglamentación.

La solicitud debe contener como mínimo:

- a) Nombre y apellido;
- b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la reglamentación;
- c) Información de contacto, conforme a la forma de entrega de la información pública elegida por el solicitante;
- d) Descripción de la información solicitada, en forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo informado en el índice elaborado por el sujeto obligado;

- e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la reproducción de la información;
- f) Fecha y hora de la solicitud; y
- g) Consentimiento del solicitante del pago del costo de reproducción fijado por el sujeto obligado.

La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el proceso de acceso a la información pública.

ARTÍCULO 24.- Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el peticionario, a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.

La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deben instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.

ARTÍCULO 25.- Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser razonable y no puede exceder el costo real abonado por el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte en caso de ser entregada en otros formatos.

La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, que demuestren la carencia de recursos suficientes.

ARTÍCULO 26.- Consentimiento de pago. Conforme a lo establecido en el artículo 23 inciso g, se considera que el requirente ha consentido, al momento de solicitar la información, abonar el importe establecido por el sujeto obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a los criterios estipulados en el presente artículo.

En el caso de que el importe fijado signifique para el solicitante el pago de una suma considerable de dinero, el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se seguirá tramitando a menos que el requirente consienta en abonar el importe establecido.

Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.

ARTÍCULO 27.- Plazos. El sujeto obligado debe responder al

requerimiento en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante resolución del CAIP o la Unidad de Enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:

- a) Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;
- b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un solo pedido;
- c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés directo en la determinación del pedido; y
- d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer párrafo.

ARTICULO 28.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) competente, en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles. Éste, en un plazo no superior a los CINCO (5) días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información requerida.

Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la solicitud remitida por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).

ARTÍCULO 29.- Solicitud de plazo menor. En caso de que el solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 27 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) competente, acreditando las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP), evaluará la solicitud y resolverá, en un plazo de TRES (3) días hábiles, sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente, el plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.

Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 30.- Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la intimidad de terceros.

ARTÍCULO 31.- Información parcialmente reservada o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar información deben permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.

ARTÍCULO 32.- Producción de información. El sujeto obligado debe proveer la información solicitada, siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al solicitante mediante resolución fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado a producirla.

ARTICULO 33.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.

Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.

ARTICULO 34.- Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no exista la exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley.

El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa o judicial.

ARTÍCULO 35.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de

lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, deben formularse por escrito y estar fundadas.

Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.

TITULO IV

Recursos

Capítulo I

Recurso de incumplimiento

ARTÍCULO 36.- Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la configuración de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos previstos en esta ley.

ARTÍCULO 37.- Transparencia activa. Cuando el recurso por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesto en cualquier momento.

ARTÍCULO 38.- Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información y los datos identificatorios del recurrente, fijando un domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del sujeto obligado.

ARTÍCULO 39.- Plazos para resolver. Improcedencia. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) tendrá DIEZ (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente cuando se interponga transcurrido el plazo establecido en el artículo 36; cuando ya hubiera resuelto anteriormente de manera definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información solicitada; cuando el sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta ley; cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso; y cuando el supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.

ARTÍCULO 40.- Trámite. Declarado procedente el recurso, el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en el plazo de TRES (3) días hábiles, para que formule su descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los DIEZ (10) días hábiles.

ARTÍCULO 41.- Datos personales. Si en la información solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos

personales se dará vista del mismo a la autoridad de aplicación competente en la materia.

ARTÍCULO 42.- Información complementaria. Audiencia. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) podrá solicitar la información complementaria que considere necesaria para resolver la cuestión y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el recurrente y, en su caso, la Unidad de Enlace del sujeto obligado.

ARTÍCULO 43.- Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el recurso en el plazo de DIEZ (10) días hábiles; pudiendo ampliar dicho plazo por CINCO (5) cinco días hábiles, por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.

ARTÍCULO 44.- Resolución. El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la información pública al recurrente en un plazo de DIEZ (10) días hábiles el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la complejidad del caso; o declarar que la información es reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter.

El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres días hábiles de concluido el trámite.

El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los TRES (3) días hábiles de producido.

Capítulo II

Recurso judicial

ARTICULO 45.- Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a la información se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado por incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de acceso a la información pública.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

ARTÍCULO 46.- Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley.

No será necesario agotar la instancia del recurso por incumplimiento establecida por la presente ley. En caso de que una acción de acceso

a la información pública se interponga estando pendiente la resolución de un recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido dicho recurso.

ARTÍCULO 47.- Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los NOVENTA (90) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud; del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley; y
- b) La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

ARTÍCULO 48.- Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales contencioso administrativo federales, cuando el obligado sea un ente u órgano estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea un ente público no estatal o un ente privado.

TITULO V

Responsabilidad

ARTÍCULO 49.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que les correspondan.

Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:

- a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre DIEZ (10) y TREINTA (30) días;
- b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre CINCO (5) y VEINTICINCO (25) días;
- c) El incumplimiento de las resoluciones por las que el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por incumplimiento interpuesto será sancionado con cesantía; y
- d) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de cualquier modo del cumplimiento de esta ley será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre DIEZ (10) y TREINTA (30) días.

Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de CUARENTA (40) o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.

El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de DOS (2) años desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario. La resolución que impusiere la sanción será impugnabile únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.

ARTICULO 50.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario de este artículo el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional, los Jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

ARTICULO 51.- Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, los responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre UNO (1) y CIEN (100) salarios mínimos vitales y móviles.

La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con los estándares mencionados en el artículo 49 y con la capacidad económica del sujeto.

Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

ARTÍCULO 52.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta ley, dentro del plazo de los CINCO (5) días a partir de su imposición.

TITULO VI

Disposiciones transitorias y finales

Capítulo I

Disposiciones transitorias

ARTÍCULO 53.- Caducidad. La información reservada o declarada confidencial que tenga más de DIEZ (10) años, con las limitaciones

establecidas en esta ley, caduca a los TRES (3) años de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración de confidencialidad.

ARTÍCULO 54.- VacatioLegis. Los sujetos obligados de esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias a los efectos de implementar lo establecido por esta ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada en vigencia:

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días:

- a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la información pública de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;
- b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y producción de la información a fin de conformarla a los parámetros estipulados por esta ley; y
- c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma exigida por esta ley, en los portales o sedes de los sujetos obligados.

Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días: crear, capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o sus equivalentes.

Dentro de los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días:

- a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP); y
- b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esta ley.

Capítulo II Disposiciones finales

ARTÍCULO 55.- Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

ARTÍCULO 56.- Adhesión. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir al régimen previsto en esta ley.

ARTÍCULO 57.- Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por éstos.

ARTÍCULO 58.- Vigencia del Decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto 1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) queden definitivamente conformados y se dispongan las normas que lo reemplacen.

ARTICULO 59.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 60.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de CIENTO VEINTE (120) días de su entrada en vigencia.

ARTICULO 61.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis C. Naidenoff. –

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

El 26 de marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un mensaje claro en el fallo "CIPPEC c/ EN - MO Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986", al remarcar que "resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a brindar información pública. Debe destacarse que esta necesidad, que constituye un verdadero reclamo social en nuestro país, ha sido también marcada insistentemente en el marco de la comunidad internacional."

En la citada sentencia, el máximo tribunal estableció que "resulta indiscutible que para asegurar la publicidad de los actos de gobierno que caracteriza a un sistema republicano y garantizar el correlativo derecho a la información que asiste a la actora, no resulta suficiente con dar a conocer las normas que establecieron estos programas sociales, las partidas de presupuesto ejecutadas en ese marco o información estadísticamente cuantitativa relativa al número total de los beneficiarios. Por el contrario, la publicidad debe atravesar todas las etapas del accionar público y decantar desde la norma general a todo lo que hace a su instrumentación particular ya que solo así es posible prevenir en forma efectiva la configuración de nichos de impunidad".

En esta misma línea, la jurisprudencia de la Corte remarcó la necesidad de "garantizar en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia del principio de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho".

Es en este marco que el proyecto que hoy presentamos pretende ser un aporte al avance por el establecimiento del derecho al acceso a la información pública, recogiendo el texto de la media sanción CD-116/10 que fue resultado de un arduo debate y búsqueda de consenso, aprobada por unanimidad el 29 de septiembre de 2010 en el Honorable Senado de la Nación.

Esta media sanción no solo fue profundamente analizada y trabajada entre los distintos bloques partidarios de la Cámara, sino que contó como antecedente con diversos proyectos de ley, tales como los expedientes 0345-S-2009, 0748-S-2009, 2399-S-2009, 0579-S-2010, 0937-S-2010, 1024-S-2010, 1286-S-2010, 1684-S-2010 y el 1694-S-2010.

Por estas razones y las que oportunamente expondré en el recinto, pido a los señores senadores acompañen el presente proyecto de ley.

Luis C. Naidenoff. –

(X)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley garantiza el derecho de acceso a la información pública y establece el marco general para su ejercicio, con la finalidad de proveer a la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.

ARTICULO 2º: Definiciones: A los efectos de esta ley se considera:

a) Documentos: información, cualquiera fuese el soporte en el que estuviera registrada, sean mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, proyectos de decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, notas, u otro modo de instrumentar el ejercicio de las facultades, deberes y decisiones de los sujetos obligados.

b) Información pública: todos aquellos documentos, que sean producidos, obtenidos, adquiridos, transformados, financiados o conservados por sujetos y/o organismos obligados con el acceso a la información pública.

ARTICULO 3º: Ámbito de aplicación: Esta ley será aplicable:

- a) los órganos de la Administración Pública central y descentralizada,
- b) a los entes públicos no estatales,
- c) a las Universidades Nacionales, institutos y colegios universitarios,
- d) a las corporaciones regionales,
- e) a las entidades autárquicas, las sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas

organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital, o en la formación de las decisiones societarias.

f) al Poder Legislativo de la Nación,

g) a la Auditoría General de la Nación,

h) a la Defensoría del Pueblo de la Nación,

i) al Poder Judicial de la Nación y

j) al Ministerio Público de la Nación.

k) el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.

l) a los fondos fiduciarios integrados con bienes del estado y

m) al Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades bancarias que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público Nacional.

n) a los entes privados, con o sin fines de lucro, que tengan fin público, posean información pública.

o) a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, en relación con las actividades desarrolladas con dichos subsidios o aportes.

p) a las empresas privadas a las que se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

q) Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales. En el caso de los sujetos referidos en el inciso o) y p), la obligación de proveer información se halla limitada a dichos subsidios o aportes, o a lo vinculado a la prestación del servicio público o la explotación de los bienes de dominio público.

ARTÍCULO 4º.- Titulares del derecho. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene el derecho de solicitar, acceder y recibir información de los sujetos obligados mencionados en el artículo 3º de la presente. No será necesario acreditar derecho subjetivo o interés legítimo alguno, ni contar con patrocinio letrado para poder efectuar tal solicitud. Tampoco podrá exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria de información.

ARTÍCULO 5º.- Principio de publicidad. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Principio de accesibilidad. Los sujetos en cuyo poder obre la información deben:

a) prever su adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización para asegurar un amplio y fácil acceso

b) garantizar a toda persona el acceso a la información pública de forma completa, adecuada, oportuna y veraz a través de procedimientos expeditos y sencillos.

ARTÍCULO 7º.- Principio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente del público y de

forma actualizada la información, de acuerdo con lo que esta ley determina.

ARTÍCULO 8º.- Principio de informalismo. Los titulares del derecho no están obligados a cumplir con otras exigencias formales que las establecidas en esta ley. "2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

ARTÍCULO 9º.- Principio de celeridad. Los sujetos obligados por la presente ley deben garantizar celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites de las solicitudes de información.

ARTÍCULO 10º.- Principio de gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 22 in fine.

ARTÍCULO 11.- Principio de máxima divulgación. Los sujetos obligados deben proporcionar información en los términos lo más amplios posible, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones previstas en la presente.

ARTICULO 12.- Instrumentación de la transparencia activa: A través de portales y sitios electrónicos o de cualquier otro procedimiento destinado a difundir información, los sujetos obligados deben mantener a disposición del público, en forma permanente, completa, organizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, como mínimo, la siguiente información:

- a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones.
- b) Los objetivos y acciones del organismo de conformidad con sus planes, programas y proyectos.
- c) Una guía de la información en posesión del organismo elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Autoridad de Aplicación y el Archivo General de la Nación.
- d) La información sobre el presupuesto asignado y su ejecución, en los términos previstos en la Ley de Administración Financiera o el régimen que eventualmente la sustituya y la Ley de Presupuesto General de cada año, desagregada como mínimo en las siguientes categorías programáticas: obra, programa, subprograma, proyecto, y actividad.
- e) La nómina de las personas que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, concurso o cualquier otro medio legal, en el organismo obligado.
- f) La remuneración mensual por cargo ocupado por los sujetos indicados en el ARTICULO anterior.
- g) El listado de las contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios. La publicación de las transacciones debe detallar los montos, proveedores y el objeto de la adquisición.
- h) Los permisos o autorizaciones otorgadas especificando sus titulares.
- i) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Esta información debe incluir las nóminas de beneficiarios de estas transferencias.

j) Los trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones.

k) Los canales institucionales de información, atención y participación ciudadana y los mecanismos para su efectivo ejercicio.

l) Los informes de auditorías, los informes de evaluación sobre el cumplimiento de metas y objetivos del respectivo órgano y cualquier otro informe generado por disposición legal o como resultado de la transferencia de fondos públicos.

La información debe actualizarse con la frecuencia que lo establezca la Autoridad de Aplicación, quien elaborará criterios y lineamientos acerca del tipo de información que se entiende comprendida en el presente artículo.

Los sujetos referidos en los incisos m y n del lo, Artículo 3°, deberán cumplir con lo previsto en este artículo, con el alcance y de conformidad con lo que la Autoridad de Aplicación determine.

ARTÍCULO 13.- Cumplimiento de la transparencia activa. Cualquier persona puede requerir ante el sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo anterior. El organismo cuenta con un plazo de QUINCE (15) días hábiles para subsanar el incumplimiento, contados a partir de la fecha de la presentación del requerimiento. En caso de que el organismo no corrija la omisión, el interesado puede presentar el recurso por incumplimiento previsto en el artículo 33 de la presente, ante la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO II

De la información

ARTÍCULO 14.- Información confidencial. Se considera información confidencial aquella entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados siempre que:

- a) se refiera al patrimonio de la persona;
- b) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica que pudiera ser de interés para un competidor;
- c) se encuentre amparada por una cláusula contractual de confidencialidad;
- d) Los datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales o el régimen que eventualmente la sustituya. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento y mantiene tal carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información.

ARTÍCULO 15.- Información reservada. Se considera información reservada:

- a) La establecida por disposición expresa de una Ley.
- b) El secreto industrial, comercial, financiero, científico o técnico.

- c) Los procedimientos de investigación por responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos.
- d) Información protegida por el secreto profesional.

ARTÍCULO 16.- Información potencialmente reservada. Puede clasificarse como información reservada aquella cuya difusión pueda:

- a) Comprometer la seguridad, la defensa o la política exterior.
- b) Poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
- c) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
- d) Revelar la estrategia procesal a adoptarse en la defensa de una causa judicial en la que el Estado sea parte, mientras las resoluciones no causen estado.
- e) Privar a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso y del principio de inocencia; También se puede clasificar como información reservada las notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión.

ARTÍCULO 17.- Período de reserva. La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 15 de la presente, puede permanecer con tal carácter por un período máximo de DIEZ (10) años. Transcurrido ese tiempo o extinguidas las causas que dieron origen a su clasificación, la información es pública. Los sujetos indicados en el Artículo 3° pueden solicitar a la Autoridad de Aplicación, con carácter excepcional, la ampliación del período de reserva siempre que justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

ARTÍCULO 18.- Cese de las restricciones: La información establecida como reservada, secreta o confidencial, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, será considerada pública si cesan las causas que dieron origen a la reserva o en su defecto a los DIEZ (10) años desde la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 19.- Datos Personales. Toda solicitud de información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación debe contar con la previa intervención de la Autoridad de Aplicación en materia de datos personales, la que, a pedido del sujeto obligado y en el plazo de CINCO (5) días, se expedirá determinando si se cumplen los requisitos exigidos por la Ley N° 25.326 o el régimen que eventualmente la sustituya, para ceder la información requerida y, en su caso, evaluará si resulta suficiente el interés legítimo acreditado por el peticionante.

ARTÍCULO 20.- Prueba del interés público. Los supuestos previstos en los artículos 14 Y 15 de la presente no pueden ser invocados como fundamento de la denegatoria de la información cuando exista un interés público superior al tutelado por dichos artículos.

ARTÍCULO 21.- Información parcialmente reservada o confidencial - coexistencia. En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada o confidencial, los sujetos

indicados en el Artículo 3° de la presente, deberán permitir el acceso a la parte de aquella que no pueda ser considerada como tal.

ARTÍCULO 22.- Prioridad de publicidad. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente ley y las cláusulas de confidencialidad y reserva contenidas en otras normas, prevalecen las primeras.

CAPITULO III

Procedimiento

ARTÍCULO 23.- Requisitos de la solicitud de información. La solicitud de información debe realizarse por escrito e indicar:

- a) Nombre/s y apellido/s del solicitante y domicilio donde sean válidas las comunicaciones;
- b) la información requerida y, si fuera posible facilitarlo, datos sobre su localización e individualización. La solicitud de información no puede estar sujeta a ninguna otra formalidad.

ARTÍCULO 24.- Recepción de la solicitud. Debe proveerse al solicitante una constancia de la recepción del requerimiento, detallando la fecha de recepción, los datos del organismo receptor y el objeto del pedido.

ARTÍCULO 25.- Plazos de respuesta. El sujeto requerido deberá responder la solicitud permitiendo o negando el acceso a la información en un plazo no mayor a QUINCE (15) días hábiles. En caso de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, el plazo puede ser prorrogado de forma excepcional por otros DIEZ (10) días hábiles. El sujeto requerido debe comunicar al requirente las razones por las que hace uso de la prórroga antes del vencimiento del primer plazo.

ARTÍCULO 26.- Requisitos de la respuesta. El sujeto requerido debe proveer la información solicitada en el estado en que se encuentre y poner a disposición del solicitante la información requerida para su consulta. El sujeto requerido no se encuentra obligado a producir información con la que no cuenta al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla. Las copias de reproducción y gastos de envío de la información requerida son a costa del solicitante.

ARTÍCULO 27.- Inexistencia. En aquellos casos en los que la información solicitada no existiera y el Estado no se encontrara legalmente obligado a producirla, el sujeto requerido debe informar dicha circunstancia al solicitante mediante comunicación fundada.

ARTÍCULO 28.- Denegatoria. El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información objeto de la solicitud si ésta se encuentra incluida dentro de alguno de los supuestos previstos en los artículos de información confidencial, información reservada e información potencialmente reservada. La denegatoria debe ser dispuesta por acto

fundado emitido por un funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de Director General.

ARTÍCULO 29.- Deber de clasificar: El sujeto requerido es responsable de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos por la Autoridad de Aplicación. La clasificación como reservada debe ser dispuesta por acto fundado de un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Subsecretario/a o la máxima autoridad del organismo de que se trate.

ARTÍCULO 30.- Incumplimiento. Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 25 de la presente, la solicitud de información no se hubiere respondido, o si la respuesta de la requisitoria hubiera sido parcial, incompleta o inexacta, el solicitante puede presentar el correspondiente recurso por incumplimiento. El incumplimiento también habilita la interposición de la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 31- Cláusula de confidencialidad. En caso de que en un contrato resulte necesario establecer una cláusula de confidencialidad conforme a lo dispuesto en el artículo 14 inciso c) de la presente, debe requerirse previamente un dictamen a la Autoridad de Aplicación a fin de que determine si dicha cláusula resulta acorde a sus criterios de clasificación.

ARTÍCULO 32.- Registro de Información reservada. Los sujetos obligados elaborarán anualmente, según los criterios de reserva establecidos por la Autoridad de Aplicación, un registro de acceso público que individualice los documentos clasificados como reservados. Dicho registro debe indicar, al menos, la dependencia que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan.

ARTÍCULO 33.- Recurso por incumplimiento. El solicitante puede presentar ante la Autoridad de Aplicación un recurso por incumplimiento dentro de los VEINTE (20) días contados a partir de la configuración de alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la presente.

ARTÍCULO 34.- Requisitos formales del Recurso por Incumplimiento. El recurso deberá formularse por escrito e indicar:

- a) la identificación del organismo ante el cual se presentó la solicitud de información;
- b) la identificación del recurrente con indicación de un domicilio dentro del territorio nacional en el cual serán válidas las notificaciones que se cursen. Con el escrito del recurso se deberá acompañar la constancia de la presentación del requerimiento efectuado. En su caso, también deberá agregarse la respuesta que el recurrente hubiera recibido del sujeto obligado. Además, puede acompañarse cualquier otro antecedente que el recurrente considere pertinente para fundamentar su recurso. Para el supuesto que la presentación no cumpla con los requisitos formales, la Autoridad de Aplicación debe solicitar al recurrente que los integre en un plazo máximo de CINCO (5) días

hábiles haciéndole saber que de lo contrario se procederá al archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 35.- Desestimación del Recurso.- La Autoridad de Aplicación desestimaré por improcedente el recurso cuando:

- a) se presente una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 33 de la presente;
- b) cuando la Autoridad de Aplicación haya conocido anteriormente y resuelto de manera definitiva en el recurso respectivo;
- c) cuando el organismo al que se le haya solicitado la información no sea sujeto obligado por la presente ley;
- d) cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso; y
- e) cuando la presentación que da origen al recurso no se encuentra incluida en las previsiones de la presente ley.

ARTÍCULO 36.- Trámite del Recurso. La Autoridad de Aplicación iniciará una actuación administrativa por cada recurso presentado, debiendo notificar dentro del plazo de TRES (3) días hábiles al sujeto obligado para que elabore el descargo correspondiente. Asimismo, debe notificar en igual plazo a la respectiva Unidad de Información y Transparencia. En ambos casos, la notificación se acompaña de una copia certificada de la documentación que corresponda.

ARTÍCULO 37.- Descargo. La Unidad de Información y Transparencia dispone de un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde la recepción de la notificación del recurso, para remitir a la Autoridad de Aplicación el descargo por escrito formulado por el sujeto obligado.

ARTÍCULO 38.- Información Complementaria. La Autoridad de Aplicación puede solicitar al sujeto obligado toda la información que resulte indispensable para resolver el recurso, aún en el caso de que se trate de información reservada o confidencial, debiendo resguardar ese carácter.

ARTÍCULO 39.- Audiencia. De considerarlo necesario para la mejor resolución del recurso, la Autoridad de Aplicación puede determinar la celebración de audiencias con el recurrente y el sujeto obligado involucrado.

ARTÍCULO 40.- Plazo de resolución. Vencido el plazo previsto en el artículo 37 o sustanciada la audiencia del artículo 39 de la presente, la Autoridad de Aplicación debe resolver el recurso en el plazo de TREINTA (30) días hábiles. Cuando haya causa justificada, la Autoridad de Aplicación puede ampliar por única vez dicho plazo, notificando de ello al sujeto obligado involucrado y al recurrente.

ARTÍCULO 41.- Resolución del recurso. Al resolver el recurso por incumplimiento la Autoridad de Aplicación puede desestimarlo o aceptarlo.

La Autoridad de Aplicación puede ordenar al sujeto obligado que entregue la información o que permita su acceso al recurrente,

indicando para ello un plazo de QUINCE (15) días hábiles que puede ampliarse fundadamente de acuerdo a la complejidad del caso; o declarar que la información es reservada o confidencial. En este supuesto, las actuaciones por la cuales tramitó el recurso tienen igual carácter.

En la misma resolución, y en caso de corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 40, la Autoridad de Aplicación dispondrá la comunicación de las infracciones cometidas por los sujetos obligados mencionados en los incisos a), c), e), l), m), n) o) y p) del artículo 3º de la presente. La resolución de los recursos por incumplimiento es tomada por el pleno del Directorio de la Autoridad de Aplicación por mayoría simple de sus miembros. Las resoluciones emitidas por la Autoridad de Aplicación son públicas.

ARTÍCULO 42.- Notificación. La Autoridad de Aplicación debe notificar la resolución del recurso al recurrente y al sujeto obligado involucrado, dentro de los TRES (3) días de concluido el trámite.

ARTÍCULO 43.- Deber de informar. El sujeto obligado debe informar a la Autoridad de Aplicación sobre el cumplimiento de su resolución, notificándolo dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de producido tal cumplimiento.

ARTÍCULO 44.- Impugnación. Los particulares pueden interponer un recurso contra las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que será resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

ARTÍCULO 45.- Aplicación Supletoria. Son de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente, las disposiciones de la Ley Nacional N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, o el régimen que eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.

ARTÍCULO 46.- Notificaciones. Las notificaciones que deban realizarse, se efectuarán por cualquier medio fehaciente.

CAPITULO IV

Infracciones y Responsabilidades

ARTÍCULO 47.- Infracciones. Son infracciones a esta ley:

- a) la obstrucción, falsedad y ocultamiento de información pública;
- b) la falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo 25 de la presente;
- c) la falta de comunicación del uso de la prórroga;
- d) la denegatoria infundada a brindar la información solicitada;
- e) el incumplimiento de lo prescripto en los artículos 12 y 13 de la presente sobre transparencia activa;
- f) la respuesta parcial, incompleta o inexacta;
- g) el incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Autoridad de Aplicación: y

h) todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley garantiza.

ARTÍCULO 48.- Responsabilidad. Cuando la Autoridad de Aplicación compruebe que algún funcionario público o agente de los sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente, bajo el régimen de la Ley 25.164 pudo haber incurrido en responsabilidad por la comisión de alguna de las infracciones previstas en el artículo precedente, debe poner en conocimiento de ello a su superior jerárquico para que inicie, en su caso, el procedimiento disciplinario que corresponda. La Autoridad de Aplicación pone en conocimiento del titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL las infracciones cometidas por los sujetos obligados que no cuenten con un régimen de sanciones específico, a fin de que tome las medidas que considere pertinentes. Las empresas de servicios públicos que cometan alguna de las infracciones previstas en el artículo 47 de la presente, son pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 49.- Inclusión de los responsables en el Informe Anual. La Autoridad de Aplicación incluye en el informe anual previsto en el artículo 54 de la presente, la mención de los sujetos obligados que incurrieron en responsabilidad por incumplimiento a la presente.

CAPITULO V

Autoridades de Aplicación

ARTÍCULO 50.- La Autoridad de Aplicación en el Poder Ejecutivo Nacional, Creación. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información (CONAI), que es la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION.

ARTÍCULO 51.- Estructura, responsabilidad primaria y objetivos. La CONAI es un ente autárquico y descentralizado de la Administración Pública Nacional y funciona en el ámbito de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION; cuenta con presupuesto y autoridades propias y facultades para auto administrarse. La CONAI es la encargada de implementar las políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de la presente, resolver toda controversia en relación a la provisión de información pública y exigir su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTÍCULO 52.- Directorio. La CONAI será dirigida y administrada por un Directorio compuesto por CINCO (5) miembros y durarán CINCO (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

ARTÍCULO 53- Designación de los miembros del Directorio. Los miembros del Directorio serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación alternadamente. La primer propuesta será efectuada por el Senado de la Nación y la siguiente lo será por la Cámara de

Diputados. En lo sucesivo se continuará alternando la intervención de cada una de ellas.

ARTÍCULO 54.- Informe Anual. La CONAI deberá presentar anualmente un informe al PODER EJECUTIVO NACIONAL en sesión pública, dando cuenta del cumplimiento de sus funciones. El Presidente de la Nación deberá remitir este informe al Honorable Congreso de la Nación en ocasión de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Período Legislativo siguiente al informado.

ARTÍCULO 55- Patrimonio. El patrimonio de la CONAI se constituye con: a) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiriera. b) Las donaciones, herencias y legados que acepte.

ARTÍCULO 56- Recursos. Los recursos anuales de la CONAI provendrán de:

- a) Las asignaciones presupuestarias del Tesoro de la Nación.
- b) Rentas producidas por los bienes que formen parte de su patrimonio y por inversiones que eventualmente realice.
- c) Aranceles, tasas y retribuciones.
- d) Otros ingresos en concepto de derechos de propiedad intelectual y licencias.
- e) Ingresos en concepto de subsidios, aportes y retribuciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.
- f) Otros ingresos.

ARTÍCULO 57.- Autoridad de Aplicación en el Poder Legislativo. La Cámara de Senadores de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación deben designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 58.- Autoridad de Aplicación en el Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 59.- Autoridad de Aplicación en la Auditoría General de la Nación. El Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación debe designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el boletín Oficial.

ARTÍCULO 60.- Autoridad de Aplicación en el Ministerio Público. El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación deben designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 61.- Autoridad de Aplicación del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de la Nación debe designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a

los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 62.- Autoridad de Aplicación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El Presidente del Consejo de la Magistratura debe designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 63.- Autoridad de Aplicación en las Universidades Nacionales. Los Órganos de Gobierno de las Universidades Nacionales deben designar la Autoridad de Aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial. CAPITULO VI Disposiciones Finales

ARTÍCULO 64.- Abstención: El estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

ARTICULO 65.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 66.- Adaptación, Reglamentos: Los sujetos obligados en el artículo 3º deberán adoptar las medidas pertinentes para aplicar las disposiciones de la presente ley con anterioridad al vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior. En particular, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias y mediante reglamentos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 67.- Instrumentación de Políticas de Incorporación: Las entidades mencionadas en los incisos f), g) h), i), j), k) y c) del artículo 3º de la presente, podrán adoptar a la CONAI como instancia responsable de implementar políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de la presente, resolver toda controversia en relación a la provisión de información pública y exigir su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

ARTÍCULO 68.- Vigencia del Decreto N° 1172 de 2003: El Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el artículo 4º del Decreto N° 1172/03, continuará vigente hasta tanto se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la presente.

ARTÍCULO 69.- Ajustes presupuestarios. Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren necesarios para la implementación de la presente ley. Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato subsiguiente la

incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de la CONAI.

ARTÍCULO 70.- Modificación Ley 24.284: Agrégase como último párrafo del artículo 16º de la Ley 24.284, el siguiente:

“En materia de derecho de acceso a la información pública, la competencia del Defensor del Pueblo abarca el Sector Público Nacional y los organismos obligados por la legislación específica”.

ARTÍCULO 71.- Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley.

ARTÍCULO 72.- Reglamentación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la presente ley dentro de los 180 días de su promulgación.

ARTÍCULO 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Marino. -

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en la vinculación que éste tiene con la publicidad de los actos de gobierno y el principio de transparencia de la Administración Pública, derecho que debe ser entendido como instrumento indispensable para apuntalar el régimen republicano de Gobierno. Este derecho se relaciona a su vez con la participación de los ciudadanos en la vida pública, participación que requiere de información constante y fidedigna para ser ejercido.

En nuestro país el derecho a la información ha sido expresamente consagrado en el Derecho Internacional; tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, artículo 13), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), todos ellos ratificados por el Estado argentino e incorporados a la Constitución Argentina en su artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.

El proyecto propuesto cumple con todos los estándares básicos y requisitos necesarios que debe contener una norma de este tipo, incorporando los principios de publicidad, de accesibilidad, de transparencia de informalismo, de celeridad, de gratuidad y de máxima divulgación.

Por su parte, propone una legitimación activa amplia que permita a toda persona acceder a la información que se encuentra en poder los sujetos obligados.

Los sujetos obligados a brindar información, abarcan los tres poderes del Estado, así como la información obrante en poder de sujetos

privados, cuya vinculación con el Estado así lo amerita. En este supuesto se hallan las instituciones beneficiarias de subsidios, las empresas prestadoras de servicios públicos o explotadoras de bienes del Estado y los partidos políticos.

La ley de Acceso a la Información Pública es de vital importancia para la sociedad civil ya que le permitirá monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de sus representantes, exigiendo una permanente rendición de cuentas por las decisiones que toman. La ciudadanía sólo puede controlar a sus representantes si cuenta con el conocimiento de la actividad que se realiza dentro del Estado. Así, el acceso a la información es una pieza clave para el buen funcionamiento de la democracia, y en ese sentido, negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia.

Por su parte, el derecho a la libertad de expresión pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de informarse pues para un verdadero control de los actos de gobierno, pues mucha de la información que poseen los entes privados también es de interés general o público y es por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos a acceder a ella.

“La experiencia en el ámbito nacional, demuestra varios intentos por aprobar una norma de esta naturaleza, todos los cuales han fallado. Por su parte, desde el año 2003, el Decreto N° 1172, en su ANEXO VII, implementa un mecanismo de acceso a la información pública que carece de amplitud en materia de legitimación pasiva y no recepta los principios que se proponen, ya antes mencionados.

En el ámbito provincial, el avance en este sentido no ha sido homogéneo, pues algunas normas provinciales reconocen este derecho, aunque con diferentes alcances.

De los países de nuestro continente Perú, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Jamaica, México y Estados Unidos, entre otros, cuentan con normas que permiten a cualquiera acceder a la información pública.

Como en 1983, el desafío sigue siendo fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas. El acceso a la información pública constituye una de las herramientas centrales para evitar males para la sociedad como ser la corrupción, la malversación de fondos, la concentración de poder, siendo además un mecanismo esencial para lograr la vigencia de otros derechos fundamentales.

Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Juan C. Marino. -

(XI)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

TITULO I Disposiciones generales

Capítulo I Objeto y alcance

ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos para garantizar a toda persona humana o jurídica el derecho de acceso a la información pública; promover la efectiva participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrarlas, asegurando la transparencia de la gestión pública.

El derecho regulado en esta ley es un derecho humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva realización de otros derechos, y como tal no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten.

ARTICULO 2º.- Alcance. Toda persona, humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder, recibir, analizar, copiar, reutilizar y redistribuir libremente información bajo custodia de los sujetos obligados por esta ley en forma completa, veraz, adecuada y oportuna, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado.

Se presume pública toda la información que generen, obtengan, transformen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley. Todos los actos y actividades del gobierno, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos al principio republicano de publicidad.

ARTICULO 3º.- Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por:

Información pública: todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o representado, que hubiere sido o debiera ser generado y obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control, o cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente por el erario público, conforme a los alcances de la misma.

Esa información por regla general es pública y se presume que debe estar disponible a la ciudadanía. Los respectivos funcionarios a cargo de entregarla preverán su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información se proveerá sin otras condiciones que las expresamente establecidas en esta norma;

Documento: cualquier información escrita, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial, de si fue o no fue creada por la autoridad pública que la mantiene, y de si fue clasificada como confidencial o no;

Publicar: acto de hacer la información accesible al público en general que incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;
Datos personales de carácter sensible: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, religión, creencias ideológicas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud física o mental o preferencias sexuales y cualquier otra información íntima de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No revisten este carácter los datos vinculados con la recepción de un subsidio o de cualquier otro fondo entregado por el Estado;

Información reservada: aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas;

Información confidencial: aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido;

Transparencia: deber de actuar con apego a la ley, apertura y publicidad que tienen los funcionarios públicos en el desempeño de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental;

Publicación proactiva de información pública: publicación de información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa de un particular;
Terceros interesados: personas que tienen un interés directo en impedir la divulgación de información que han proporcionado en forma voluntaria a una autoridad pública, ya sea porque dicha divulgación afecta su privacidad o sus intereses comerciales.

Capítulo II

Propósitos y principios básicos

ARTICULO 4º.- Propósitos. Los propósitos de la presente ley son:

- a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
- b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por ésta;
- c) Fijar estándares mínimos de transparencia en materia de datos;
- d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en las cuestiones públicas;

e) Sentar las bases para la práctica de la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados; y

f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.

ARTICULO 5º.- Principios. Son principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación de este ordenamiento, sus disposiciones complementarias y reglamentarias:

a) Máxima apertura y divulgación: toda información pública será accesible para todas las personas y estará sujeta a un sistema restringido de excepciones;

b) Transparencia activa: los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de forma actualizada, con el mayor nivel de desagregación y por la mayor cantidad de medios disponibles;

c) Promoción de gobierno abierto: las entidades públicas deben garantizar, implementar y hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo cual implica promover activamente una cultura de apertura gubernamental y una amplia conciencia pública de la presente ley;

d) Presunción de publicidad: la publicidad de la información es la regla y el secreto la excepción. Por ello, toda información en poder, control o custodia del Estado o de los demás sujetos obligados se presume pública y los respectivos funcionarios a cargo deberán prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso;

e) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto a quien se le requiere la información.

f) Informalidad: El acceso a la información se rige por el principio de informalidad. Ningún procedimiento formal puede poner en riesgo el ejercicio del derecho a acceder a la información pública. Los sujetos obligados no podrán rechazar una solicitud de información por el incumplimiento de algún requisito formal. Si alguna persona, por determinada circunstancia, no pudiera completar o redactar su pedido de información pública, el sujeto obligado y el organismo implicado, deberán instrumentar los medios para facilitar la presentación de las solicitudes de información;

g) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía procesal, sencillez y eficacia en todas las instancias de tramitación de las solicitudes de información pública.

Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta debe contar con la disponibilidad de una expedita vía recursiva suficiente;

h) Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito. Si se requiriera reproducción de la misma, las copias estarán a cargo del solicitante. En ningún caso el valor de las mismas puede exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá establecer una reducción de dichos costos cuando la solicitud haya sido realizada por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro, o vinculadas con actividades de interés público. En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública;

i) Oportunidad: los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar la respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios;

j) Apertura: la información deberá ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos y que permitan su reutilización o redistribución por parte de terceros. La información no estará sujeta a ninguna licencia, términos de uso y otras condiciones que restrinjan sus posibilidades de utilización o redistribución por parte de terceros;

k) Información parcialmente pública. Sistema de tachas: si algún dato, comentario o contenido de un documento que haya sido solicitado por un tercero revistiera carácter de secreto o reservado por alguna de las excepciones de esta ley, deberá ser tachado u ocultado para facilitar el acceso al resto de la información requerida;

l) Control: será objeto de fiscalización permanente el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. Frente a resoluciones que denegaren solicitudes de acceso a la información, como al silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta podrá recurrirse a otro órgano competente.

m) No discriminación: el acceso a la información pública está garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir expresión de causa o motivo de la solicitud;

n) Responsabilidad: los funcionarios públicos que incumplieran las obligaciones previstas por la presente ley estarán sujetos a las sanciones disciplinarias o penales que les correspondan;

o) Conservación: la información es un bien público y por ello debe ser conservada y resguardada de manera adecuada durante el transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser prioritaria en los organismos públicos;

p) In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información pública deberá ser efectuada siempre, en caso de duda, a favor de la mayor vigencia y alcance del derecho;

q) Interés público superior: ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información.

Capítulo III

De los sujetos obligados

ARTICULO 6º.- Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de la presente ley son:

a) La Administración Pública Nacional, conformada por la Administración Central y los organismos descentralizados;

b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionen en su ámbito;

c) El Poder Judicial;

d) El Ministerio Público Fiscal;

e) El Ministerio Público de la Defensa;

f) El Consejo de la Magistratura;

g) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

h) Los fideicomisos integrados total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;

i) Los entes reguladores de servicios públicos;

j) Los entes privados:

1. Cuando hayan recibido un subsidio o aporte proveniente del Estado nacional de manera directa o indirecta;

2. Cuando se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público. Quedan incluidas las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido contratadas por el Estado para la prestación de un bien o servicio en todo lo vinculado con el objeto de la contratación.

3. Cuando hayan recibido importes pagados por publicidad oficial o espacios similares, o difusión de actos de gobierno, campañas públicas, programas producidos en cualquier soporte o medio, otorgados por organismos del Estado.

Esta obligación de proveer la información es subsidiaria, para el caso de que los organismos del Estado no respondieran en tiempo y forma y queda siempre restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado; a la atinente a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo, y de los montos no erogados por condonación de deudas fiscales o impositivas;

k) Los entes públicos no estatales en el ejercicio de las funciones públicas;

l) Las organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, universidades y cualquier otra entidad privada a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado Nacional, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos;

m) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;

n) Las corporaciones regionales;

o) El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades financieras que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público nacional;

p) Los demás órganos de carácter federal creados por la Constitución Nacional.

La enumeración precedente no es taxativa.

TITULO II

Del órgano garante y la autoridad de aplicación

Capítulo I

De la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP)

ARTICULO 7º.- Creación. En el ámbito del Poder Ejecutivo, como organismo descentralizado de la Presidencia de la Nación, deberá crearse una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibirá instrucciones sobre su competencia específica de ninguna autoridad de la Nación. Esta oficina será, en el ámbito de su competencia, el órgano garante de la vigencia y aplicación de la presente ley.

ARTICULO 8º.- Objeto de la OAIP. La OAIP, como órgano garante de la presente ley, deberá velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos aquí establecidos, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública como así también de la correcta gestión de la información y promover medidas de transparencia.

ARTICULO 9º.- Integración. Duración del mandato. La OAIP estará integrada por tres directores que durarán cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser reelegidos por una única vez.

El Directorio de la OAIP se organizará a partir de un Presidente y dos vocales y las resoluciones se adoptarán por mayoría. La presidencia del Directorio será ejercida de forma rotativa entre sus miembros.

ARTICULO 10º.- Procedimiento de selección. El Presidente de la Nación deberá proponer, en un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles de entrada en vigencia la presente ley, los nombres y antecedentes curriculares de hasta cinco (5) candidatos para ocupar los cargos de directores de la OAIP. Asimismo, deberá recibir de personas físicas y/o jurídicas propuestas de candidatos durante cinco (5) días hábiles. Finalizado el plazo, deberá publicar el listado de los candidatos en la página web de la Presidencia de la Nación, el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación masiva durante tres (3) días hábiles.

Al día siguiente de finalizado este plazo se abrirá, durante los quince (15) días hábiles posteriores, un proceso de recepción de apoyos y observaciones de ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos. Las presentaciones deberán realizarse de manera escrita y estar fundadas y se presentarán en la mesa de entradas de la Presidencia de la Nación.

Finalmente, deberá convocarse a los cinco (5) días hábiles de terminado el plazo para la presentación de apoyos y observaciones, una audiencia pública que podrá tener una duración máxima de cinco (5) días hábiles.

Dentro del plazo de quince (15) días hábiles de terminada la última jornada de la audiencia, el Presidente de la Nación deberá proponer a sus candidatos, que deberán contar con acuerdo del Senado de la Nación para ser nombrados Directores de la OAIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, deberá elevar al Presidente de la Nación un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

Los candidatos propuestos deberán presentar:

a) Una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los

términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública y su reglamentación.

b) Una declaración que incluya la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados- si corresponde- a los que pertenecieron o pertenecen, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

ARTICULO 11°.- Rango y Remuneración. El Presidente del Directorio de la OAIP tendrá rango y remuneración equivalente a Secretario de Estado. Los vocales, rango y remuneración de Subsecretario de Estado.

ARTICULO 12°.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado Director de la OAIP se requiere ser ciudadano/a argentino/a, mayor de treinta (30) años y poseer título universitario. Deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función, vocación por la defensa del derecho de acceso a la información y promoción de la transparencia. No podrá ser Director ninguna persona que haya sido condenada por delito doloso en los últimos cinco (5) años, salvo que hubiere sido objeto de indulto o amnistía.

El ejercicio de la función en la OAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función.

Los directores de la OAIP no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.

ARTICULO 13°.- Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la OAIP:

- a) Diseñar su estructura orgánica y designar a su planta de agentes;
- b) Preparar su presupuesto anual;
- c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los sujetos obligados que estén en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional;
- d) Dictar instrucciones generales tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de acceso a la información y transparencia;
- e) Establecer criterios comunes para todos los sujetos obligados que estén bajo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recibir y responder solicitudes de información pública;

- f) Revisar la información en posesión de los sujetos obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, incluso mediante inspecciones in situ;
- g) Requerir a los sujetos obligados que estén bajo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a la normativa aplicable;
- h) Contar con un canal de comunicación para evacuar consultas de la ciudadanía sobre las solicitudes de información, en particular, colaborando sobre direccionamiento del pedido y refinamiento de la búsqueda;
- i) Formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor transparencia en la gestión y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
- j) Coordinar a los Responsables de Acceso a la Información designados por cada uno de los sujetos obligados que estén abarcados en el ámbito de competencia de la OAIP;
- k) Requerir a cada Responsable de Acceso a la Información datos sobre solicitudes recibidas, respuestas realizadas, denegatorias y cualquier otro dato que posibilite la confección de estadísticas;
- l) Elaborar estadísticas periódicas sobre requirentes, información solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra que permita el control ciudadano de lo establecido por la presente ley;
- m) Publicar periódicamente un índice y listado de la información frecuentemente requerida que permita evacuar consultas y solicitudes de información por vía de la página web de la OAIP;
- n) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de ejercer su labor;
- o) Elaborar un plan de difusión interna y externa de la normativa que incluya capacitaciones permanentes sobre los alcances de la presente ley;
- p) Elaborar reglamentaciones obligatorias para todos los sujetos obligados que establezcan guías, estándares, procedimientos o modalidades sobre tratamiento, recolección, almacenamiento, difusión, entrega, transporte o archivo de información pública;

- q) Determinar los procedimientos a implementar en casos de recepción de solicitudes de información enviadas a través de sobre cerrado o dirigidas a un particular funcionario.
- r) Elaborar un informe anual dirigido a ambas Cámaras del Congreso de la Nación que contenga las actividades realizadas por la OAIP para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
- s) Supervisar de oficio el cumplimiento de todas las disposiciones normativas sobre transparencia activa y acceso a la información;
- t) Recibir, tramitar y dar seguimiento a las denuncias de los particulares;
- u) Recibir y resolver los recursos administrativos que interpongan los solicitantes de información según lo establecido por la presente ley;
- v) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la OAIP tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
- w) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de lo establecido en la presente ley;
- x) Celebrar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
- y) Proponer políticas, planes, programas o anteproyectos de ley en todo lo referido a la materia de su competencia;
- z) Informar al público acerca de la desclasificación reciente de información en los casos que corresponda;
- aa) Revisar la información que haya sido clasificada como reservada o confidencial -a la que tendrá acceso bajo confidencialidad- por la autoridad pública competente y elaborar un informe, de carácter vinculante, sobre las condiciones de publicidad y reserva;
- bb) Publicar los índices de información reservada elaborados por los sujetos obligados previstos en el artículo 32º de la presente ley.

ARTICULO 14º.- Personal de la OAIP. La OAIP contará con el personal administrativo y técnico que establezca la Ley de Presupuesto anual.

ARTICULO 15º.- Presupuesto. El presupuesto anual de la OAIP se compondrá de:

- a) Los recursos que anualmente determine el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio de sus funciones;
- b) El producto de las operaciones financieras o venta de bienes patrimoniales que realice;
- c) Los subsidios, donaciones y cualquier otro recurso que se le destine;
- d) Lo recaudado por el cobro de las multas y sus correspondientes intereses por incumplimiento de lo aquí establecido.

ARTICULO 16º.- Cese y remoción de los Directores de la OAIP. Los Directores de la OAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Renuncia;
- b) Vencimiento de su mandato;
- c) Razones de salud o cualquier otra afección que torne imposible el ejercicio de la función.;
- d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

La remoción se hará efectiva a través del voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de una de las Cámaras del Congreso de la Nación, previa instrucción del sumario que garantice el derecho de defensa.

Producida una vacante en el directorio de la OAIP, tendrá lugar el proceso de designación indicado en el artículo 10º, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

ARTICULO 17º.- Órganos garantes en los demás poderes del Estado y sujetos obligados. La Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su ámbito y el de los tribunales federales inferiores, los Ministerios Públicos por decisión conjunta del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, designarán el órgano garante de las disposiciones de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, en un plazo no mayor a los 90 días desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial, a fin de velar por el cumplimiento de esta ley en sus respectivas jurisdicciones. La correspondiente creación deberá prever

que dichos órganos garantes tengan autonomía funcional y autarquía financiera, que no reciban órdenes de ningún poder de la Nación y que sus decisiones en materia de acceso a la información y resolución de reclamos administrativos sean vinculantes.

La designación de la persona a cargo de cada uno de dichos órganos deberá realizarse mediante un procedimiento de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.

ARTICULO 18º.- Reuniones entre los órganos garantes. Deberán celebrarse, de forma bimestral, reuniones entre los órganos garantes y un representante de la OAIP, con el objeto de fijar criterios comunes y lineamientos generales para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

En dichas reuniones se deberán analizar las solicitudes de acceso a la información que hayan sido rechazadas por el sujeto obligado requerido, para luego emitir un dictamen que, sin ser vinculante, podrá servir para revisar la decisión si correspondiere.

Capítulo II

Responsables de Acceso a la Información Pública

ARTICULO 19º.- Responsables de Acceso a la Información Pública. Cada uno de los organismos centralizados que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán nombrar a un Responsable de Acceso a la Información Pública quien se desempeñará como autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas dentro de su ámbito de competencia.

ARTICULO 20º.- Autoridad responsable. El funcionario que tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública deberá:

- a) Tener conocimiento efectivo de la información que está bajo su control o en el ámbito en donde desarrolla su tarea;
- b) Tener la potestad y el rango suficiente para hacer cumplir las disposiciones de esta ley;
- c) Estar sujeto al régimen ordinario de sanciones previsto para los funcionarios de la Administración Pública y demás organismos del Estado nacional.

ARTICULO 21º.- Funciones. Serán funciones de los Responsables de Acceso a la Información pública:

- a) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran ser poseedoras de la información requerida;

- b) Recibir, y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública remitiendo la misma a los funcionarios pertinentes;
- c) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;
- d) Implementar las resoluciones elaboradas por la OAIP;
- e) Publicar señalética de la normativa en áreas de acceso público;
- f) Promover prácticas de transparencia y de divulgación de información al interior del organismo al cual representa;
- g) En caso de corresponder, denegar de manera fundada la solicitud de información;
- h) Informar y justificar al requirente la utilización del plazo de prórroga;
- i) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
- j) Elaborar informes mensuales para ser remitidos al órgano garante sobre cantidad de solicitudes recibidas, plazos de respuesta, solicitudes respondidas y rechazadas;
- k) Mantener actualizada la página web del organismo y publicar de manera visible los datos de contacto del Responsable de Acceso a la Información y un formulario modelo para la realización de las solicitudes de información;
- l) Actualizar de manera periódica y publicar en la página web la información solicitada recurrentemente y cualquier otra que permita cumplir con los principios de transparencia activa;
- m) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
- n) Promover dentro de su organismo prácticas en relación al mantenimiento, archivo, conservación y publicación de la información como así también del sistema de procesamiento de la información;
- o) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación de las disposiciones de la presente ley.

TITULO III

Obligación de Transparencia Activa

ARTICULO 22º.- Sistematización de la información. Los sujetos obligados por esta ley, deberán prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información, como también su integración en línea a través de medios electrónicos,

en los términos que disponga la presente ley y su reglamentación, para asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.

Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia total de la información disponible en formato digital.

ARTICULO 23º.- Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, a través de sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de los medios interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con discapacidad.

ARTICULO 24º.- Información a publicar. Con excepción de la información secreta, reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo establezca la reglamentación, deberán poner a disposición del público en sus respectivos sitios electrónicos la información actualizada en el orden que a continuación se detalla:

- a) Un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando los horarios en que puede ser solicitada, como así también los costos de reproducción correspondiente;
- b) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
- c) Descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales y los procedimientos que se siguen para tomar decisiones;
- d) Los objetivos y acciones de conformidad con sus planes, programas y proyectos y los informes de las actividades realizadas;
- e) El presupuesto asignado a cada área, programa y función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
- f) Transferencias de fondos públicos provenientes de y dirigidas a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas;
- g) Las contrataciones públicas;
- h) Los informes de auditorías o evaluaciones internas y/o externas;
- i) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas;

- j) Detalles pertinentes sobre los servicios que brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al público;
- k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen funciones en forma permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual, detallando sus funciones o escalafón;
- l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado;
- m) Mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
- n) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder, las categorías de información que publica y las vías recursivas disponibles;
- o) Registro de solicitudes y denuncias, que contenga una lista de solicitudes recibidas y resúmenes de las solicitudes o denuncias interpuestas y la respuesta brindada;
- p) El domicilio y los datos de contacto;
- q) Cualquier otra información de utilidad, o que se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a un buscador que permita el acceso permanente y actualizado a la base de datos legislativa del Boletín Oficial de todas las normas jurídicas publicadas, ordenadas por tipo y número.

ARTICULO 25º.- Exhibición de la Ley de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados por la presente ley deberán exhibir en su acceso el texto de la presente ley junto con los datos de contacto de la autoridad de aplicación correspondiente, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTICULO 26º.- Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 24º. El sujeto obligado debe, en un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de la presentación del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo

apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que pudieran corresponderle.

TITULO IV

Del acceso a la información

Capítulo I

Excepciones

ARTICULO 27°.- Excepciones. Los sujetos obligados comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Información expresamente clasificada como reservada por una ley del Congreso de la Nación o un decreto del Presidente de la Nación, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
- b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
- c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado, o resulte en un beneficio indebido para el beneficiario de la información;
- d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
- e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
- f) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la Administración Pública Nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
- g) Información protegida por el secreto profesional;
- h) Información referida a datos personales de carácter sensible en los términos de la ley N° 25.326, salvo que se contara con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiera la información solicitada;
- i) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

j) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones internacionales;

k) Información preparada por los órganos de la Administración Pública Nacional dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por esos organismos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;

l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.

No podrá invocarse el carácter de reservado y/o confidencial de una información ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación judicial sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, trata de personas o delitos de lesa humanidad.

ARTICULO 28°.- Información parcialmente reservada. Cuando existiera un documento que contuviera parte de información con carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente ley, podrá permitirse el acceso y reproducción a la parte del documento que no revistiera carácter de reservada. Deberá indicarse qué parte del documento ha sido mantenida bajo reserva, así como la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atentare contra el interés protegido por la excepción.

ARTICULO 29°.- Restricciones al acceso a la información. La decisión que establezca excepciones al acceso a la información pública en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Identidad y cargo de quien adopta la decisión;
- b) Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
- c) El organismo que produjo la información o la fuente de donde fue obtenida;
- d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva o la fecha correspondiente a los diez (10) años de dispuesta la restricción original;
- e) Las razones que fundamentan la decisión;
- f) Las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservada y las que, por el contrario, están disponibles al acceso público.

ARTICULO 30°.- Motivación de la resolución. La clasificación de la información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado en el momento en que ésta se genere, obtenga o modifique, mediante resolución debidamente motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que su divulgación genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido, de acuerdo con las excepciones referidas en la presente ley.

ARTICULO 31°.- Duración de la clasificación. Al momento de clasificar información como reservada, se podrá establecer una fecha o evento en la cual la información será de acceso público en los términos de la presente ley. Esta fecha o evento no puede exceder el límite de diez (10) años desde el momento en que se dispuso la clasificación. Finalizado el período, la información será puesta a disposición en los términos de la presente ley, independientemente de que no hubiese ocurrido el evento o fecha que la decisión de la reserva estableció.

Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciese fecha o evento que le dé fin, la información será de libre acceso a los tres (3) años desde el momento en que fuera establecida como reservada. En caso de que cesaran las circunstancias que fundaron la restricción o hubiese razones de interés público superiores a las causas que dieron lugar a la reserva, la información se considerará pública, a pesar de que no se hubiera cumplido el plazo u ocurrido el evento establecido en la norma.

Podrá extenderse la reserva o volverse a restringir el acceso a la información siempre que se cumpla con lo establecido por esta ley por dos períodos sucesivos de diez (10) años cada uno. Ninguna información podrá mantener el carácter de reservada por más de treinta (30) años desde su primera clasificación como tal, con la única excepción de la que hubiera sido proporcionada por una fuente diplomática. En este caso, la reserva de información no podrá ser superior a cincuenta (50) años. En ningún caso una información que hubiera sido abierta al público podrá ser nuevamente reservada.

ARTICULO 32°.- Apertura al público de la información clasificada como reservada. Durante los doce (12) meses de entrada en vigencia la presente ley, toda información que hubiese sido establecida como reservada y hubiese cumplido el plazo de los diez (10) años, será de acceso libre para el público, salvo aquella en que se decida volver a restringir el acceso. Cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su reserva o cuando concurriera un interés público superior a dicha restricción, la información será de acceso público aunque no se hubiese cumplido el plazo establecido previamente.

Capítulo II Procedimiento

ARTICULO 33°.- Solicitud de información. La solicitud de información pública será presentada ante el sujeto obligado que posea o se presuma que posee la información. Se podrá realizar la presentación de manera escrita, por correo electrónico, correo postal, verbalmente o

por cualquier otro medio análogo, sin estar sujeta a ninguna formalidad. No será necesario manifestar las razones que motivan la solicitud ni la identificación del requirente, salvo los datos de contacto para una eventual consulta o envío de la información solicitada. En todos los casos debe brindársele al solicitante el número de expediente o cualquier otra constancia correspondiente a su pedido.

Si el requirente, por algún motivo, no pudiera dejar por escrito su pedido o los datos de contacto, el o la empleado/a que recibiera la solicitud deberá hacerlo por el solicitante.

La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deberán instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.

ARTICULO 34°.- Plazos. El sujeto obligado deberá responder al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Dicho plazo podrá ser prorrogado de manera excepcional y por única vez por otros diez (10) días hábiles mediante resolución del sujeto requerido, debidamente comunicada al solicitante, fundada en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los motivos concretos que motivaron tal decisión:

- a) Necesidad de buscar y reunir la información solicitada en otros establecimientos que estén separados de la oficina que procesa el pedido;
- b) Necesidad de buscar, reunir y examinar una gran cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un mismo pedido;
- c) Necesidad de realizar consultas a otro organismo;
- d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información en el plazo total estipulado en el primer párrafo.

ARTICULO 35°.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de brindar la información solicitada por no poseerla, deberá reenviar el pedido a la OAIP en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. Ésta deberá, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere la información requerida.

Asimismo, informará al solicitante en qué organismo se encuentra su requerimiento, la fecha de reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.

El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información deberá resolverla en los tiempos y en las formas

estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la solicitud remitida por la OAIP.

ARTICULO 36°.- Solicitud de plazo menor. En caso de que el solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 34° pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información solicitada, deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Responsable de Acceso a la Información, acreditando las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. El Responsable de Acceso a la Información evaluará la solicitud y resolverá, en un plazo no mejor a tres (3) días hábiles, sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a la solicitud, comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente el plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.

ARTICULO 37°.- Respuesta. La información pública debe ser dada en el estado y en el soporte en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.

La solicitud de información no implica la obligación del sujeto obligado de producir el material con el que no cuente al momento de realizarse el pedido, salvo que estuviera el ente u organismo obligado legalmente a producirla o haberla producido.

Cuando la información pública requerida contenga datos personales, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma tal de no afectar el derecho a la intimidad de terceros.

Toda respuesta, tanto las que concedieren la información como aquellas que la denegaran, deben incluir una leyenda que indique que si el solicitante no estuviera satisfecho con la respuesta podrá reclamar por las vías previstas en la presente ley. Deberán reproducirse textualmente los artículos que regulan las vías de reclamo.

ARTICULO 38°.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos, formatos electrónicos o en cualquier otro medio o soporte alternativo distintos al solicitado, se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.

ARTICULO 39°.- Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y el Estado no estuviera obligado a producirla, o que está incluida dentro de alguna de las excepciones taxativamente previstas en la presente ley.

El silencio del sujeto obligado como la ambigüedad o inexactitud de la respuesta será considerado como denegatoria injustificada a brindar la información.

La denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo y dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en la presente ley.

ARTICULO 40°.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dispongan la denegatoria de la solicitud en todos los supuestos previstos por la presente ley deben formularse por escrito y estar fundadas.

Capítulo III Vías de reclamo

ARTICULO 41°.- Recurso administrativo. En caso de denegación de una solicitud de información o de cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, el requirente podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante el órgano garante. Cuando se trate de un incumplimiento de las medidas de transparencia activa, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento.

Serán motivo de incumplimiento y negativa injustificada a permitir el acceso a la información la falta de respuesta o la respuesta ambigua, inexacta o incompleta.

ARTICULO 42°.- Requisitos formales. El recurso por incumplimiento será presentado por escrito y debe identificar a los sujeto/s obligado/s al o los cual/es se les hubiese presentado la solicitud de información y la fecha de la presentación. Deberá consignarse también nombre completo del solicitante y domicilio procesal y será necesario acompañar la solicitud de información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese otorgado el sujeto obligado.

ARTICULO 43°.- Audiencias entre partes. El órgano garante correspondiente podrá mediar entre el solicitante y el sujeto obligado con el objeto de permitir el acceso a la información, sin necesidad de que se hubiese agotado la instancia administrativa. En cualquier caso, el requirente podrá negarse a participar de la mediación o finalizarla en cualquier momento del proceso.

ARTICULO 44°.-Resolución del recurso interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del recurso, el órgano garante deberá decidir:

- a) Rechazar el recurso;
- b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.

El rechazo deberá ser fundado. Serán motivos de rechazo:

- a) Cuando se hubiese presentado fuera del plazo previsto;
- b) Cuando ya hubiera resuelto la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información;
- c) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la presente ley;
- d) Cuando se trate de información reservada según lo establecido por la presente ley.

La decisión del órgano garante es vinculante y deberá ser notificada en un plazo de 3 (tres) días hábiles al solicitante de la información y al sujeto obligado, al mismo tiempo que deberá ser publicada en su página web. Si la resolución no implicara la publicidad de la información, la notificación deberá informar sobre el derecho a recurrir a la justicia y los plazos del proceso.

Si la resolución del órgano garante fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido con las disposiciones de la presente ley deberá entregar la información solicitada en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde la notificación de la autoridad de aplicación.

El sujeto obligado podrá recurrir esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo en casos de arbitrariedad.

ARTICULO 45°.-Acción judicial de acceso a la información. El solicitante de la información pública, sea una persona humana o jurídica, pública o privada, cuyo derecho de acceso a la información pública hubiese sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de acceso a la información.

Las actuaciones judiciales que se inicien en virtud de lo establecido por esta ley gozarán del beneficio de la justicia gratuita. Si la parte demandada demostrara mediante incidente la solvencia de la parte actora, este beneficio quedará sin efecto.

ARTICULO 46°.- Trámite. La acción judicial se presentará ante los tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal cuando el obligado sea un ente u órgano estatal y los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea un ente público no estatal o ente privado. La acción de acceso a la información tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley. No será necesario agotar la instancia de apelación administrativa establecida por la presente ley.

En caso de que una acción de acceso a la información se interponga estando pendiente la resolución del recurso administrativo, se tendrá por desistido dicho recurso. La acción de acceso a la información

deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a cuarenta (40) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:

- a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud o del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley;
- b) La notificación de la resolución que rechace el recurso administrativo previsto en el artículo 35° o el vencimiento del plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación administrativa, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

Cuando la acción de acceso a la información tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesta en cualquier momento.

El demandante deberá informar si ha iniciado otra acción con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.

ARTICULO 47°.- Carga de la prueba. La carga de la prueba de la existencia de una de las excepciones previstas en esta ley, deberá recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá establecer:

- a) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática;
- b) Que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por esta ley;
- c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño sea superior al interés público en la divulgación de la información.

TITULO V

Responsabilidad

ARTICULO 48°.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le correspondan.

Las conductas que se consideran falta disciplinaria y las sanciones que les corresponden son las siguientes:

- a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días;
- b) La entrega o puesta a disposición de información en forma incompleta o defectuosa, o con omisión de las formas y plazos

establecidos en esta ley y en sus reglamentaciones, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y veinticinco (25) días;

c) El incumplimiento de las resoluciones del órgano garante de la presente ley sobre recursos de apelación administrativa será sancionado con cesantía;

d) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por las oficinas de acceso a la información pública o la obstaculización de cualquier modo del cumplimiento de esta ley será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.

Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.

Si la comisión de alguna de las infracciones precedentes fuera invocada por culpa o negligencia serán sancionadas con una pena de hasta un tercio de la prevista para la infracción correspondiente.

El solicitante de la información, los terceros interesados y el órgano garante podrán actuar instando los procedimientos sumariales.

El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario.

La resolución que impusiere la sanción será impugnabile únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.

ARTICULO 49°.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario estipulado el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional, Secretarios y Subsecretarios de Estado, los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

ARTICULO 50°.- Responsabilidad de los demás sujetos obligados. Los responsables de alguna de las conductas tipificadas que pertenecieran a un sujeto obligado cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueran funcionarios públicos, se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos vitales y móviles.

La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante de la información y su monto se graduará de acuerdo con los estándares mencionados en el artículo 48° y con la capacidad económica del sujeto.

Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

ARTICULO 51°.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el sitio web del órgano garante, dentro de los cinco (5) días a partir de su imposición.

TITULO VI

Disposiciones Finales

ARTICULO 52°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen previsto por esta ley

ARTICULO 53°.-. Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por los regímenes especiales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por estos.

ARTICULO 54°.- Entrada en Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 55°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.

ARTICULO 56°.- Vigencia del Decreto 1172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por Decreto 1172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto la OAIP quede definitivamente conformada y se dispongan las normas que lo reemplacen.

ARTICULO 57°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvia del Rosario Giacoppo.-

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto busca resguardar lo actuado por el Senador Morales y el Bloque de la UCR, en su afán de promover la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública, asegurando la transparencia del Estado, fomentando la rendición de cuentas y el gobierno abierto.

Sus propósitos son regular este derecho para garantizar a toda persona el acceso a la información pública, lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública, proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados en esta ley, asegurar estándares mínimos de transparencia, permitir la efectiva participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas y sentar las bases que rigen en el futuro sobre las prácticas de rendición de cuentas por parte de todos los sujetos obligados.

Ante la trascendente obligación de sancionar una ley en materia de Acceso a la Información Pública, convendría pensar en quienes han sido los promotores de una herramienta eficiente y cuáles las dificultades que se han planteado en el tiempo, las consagraciones parciales y los desafíos aún pendientes.

A partir de allí insistir una vez más, y todas las que sean necesarias, para cumplir con la omisión de reglamentar como derecho humano el Acceso a la Información Pública, consagrado luego de la Reforma del año 1994 en el llamado Bloque de Constitucionalidad.

En el Derecho Argentino, nuestro sistema de fuentes demanda la creación de una ley nacional para reglamentar este derecho de jerarquía constitucional. En ese sentido aspiramos a una buena norma jurídica, y una vez más, con la experiencia que los y las representantes del radicalismo jujeño han acumulado en el trabajo legislativo de todos estos años, acercamos esta nueva iniciativa, para impulsar un debate amplio y superador.

En agosto de 2008, la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, en el PRINCIPIO 4 reconoce que "El acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano fundamental de los individuos" el cual "solo admite limitaciones excepcionales que deben estar previamente establecidas por ley".

Ya en la consagración de la Declaración de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1948, el artículo 19 se refiere a que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Resalto tres aspectos de la misma: la referencia a “todo individuo” y sin “limitación de fronteras” que indica el carácter universal del Derechos a la Información y el orden con el cual se mencionan los distintos supuestos evolutivos del derecho en la historia: primero la libertad de opinión, luego de expresión y finalmente el de la información, además de la mención “por cualquier medio”, que da cuenta de la apertura de los diversos canales de comunicación que se suponía tendrían lugar en el tiempo.

Pocos años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) indica en el Artículo 19.2 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Pero también en el punto 3, dice que este ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales (...) que deberán (...) estar expresamente fijadas por la ley”. En el mismo sentido se manifiesta el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Lo que hace necesario reiterar la necesidad de sanción de una norma nacional, que permita cumplir con nuestros compromisos institucionales, con la que venimos insistiendo desde hace más de una década, cuando presentamos nuestro primer proyecto. Ya entonces éramos conscientes que con una ley como ésta, aspirábamos a transparentar la actividad gubernamental, a hacer efectivos los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y a conocer y controlar la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Vislumbrábamos que el derecho de acceso a la información permite también el ejercicio de otros derechos y obligaciones que, complementarios de la libertad de expresión, fomentan la participación ciudadana y la vida cívica. Este creaba al mismo tiempo, la conciencia de la rendición de cuentas, de la integridad en el manejo de los recursos públicos, del deber del buen gobierno, así como de controlar el destino de los fondos asignados para las políticas públicas que nos incumben como ciudadanos, de nuestros derechos como usuarios del servicio público o del transporte y de los que competen a nuestra salud, educación, ambiente o seguridad pública, etc.

Paralelamente, entre los años 90 y principios del 2000 ya se habían sancionado más de la mitad de las aproximadas 80 leyes vigentes en esta materia en el mundo, sobre todo en América Latina, las que bregaban por fortalecer la transparencia como motor para erradicar la corrupción y como mecanismo de control en manos de la ciudadanía.

También registrábamos el avance jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en esta materia, receptada por los tribunales de diversos Estados nacionales así como la propuesta de una “Ley Modelo de Acceso a la Información”, como resultado de una lucha comenzada por las organizaciones de la sociedad civil mucho tiempo antes.

Ya en el 2006, en el marco de estos antecedentes, presentamos un proyecto de ley que consistía en reconocer la conquista de los

gobernados en su lucha por la democracia representativa, en muchos casos mediante las asociaciones, tomando como referente el principio sostenido en el caso “Claude Reyes vs. Chile” por la CIDH que sostiene, ante una demanda por el ambiente sano, la idea de que las autoridades públicas deben guiarse en su accionar por el “principio de máxima divulgación”, estableciendo que toda la información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones (Corte I DH Caso CR y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Seria CN°151, párrafo 92).

En esta causa, donde el Estado chileno niega la información que se le solicitara, hay tres cuestiones importantísimas a señalar y que reafirman la Convención: La primera es que destaca que no es necesaria la demostración de interés legítimo ni la fundamentación del pedido. La segunda se refiere al interés legítimo de que la regla general debe ser la publicidad de la actividad estatal para permitir a la ciudadanía el monitoreo de la gestión pública; y la tercera especifica que los límites a su ejecución deben estar establecidos por la ley. Fijar un marco legal para garantizar el derecho de todos y todas a solicitar y recibir información sigue siendo una deuda de la democracia recuperada en 1983.

Con motivo de la sanción del 2010 en la Cámara Alta, entre cuyos antecedentes se contaba un proyecto del radicalismo, el Senador Morales dio cuenta de un caso testigo que protagonizó haciendo uso del Decreto 1172/03 ante el denominado “Caso Greco”. El incumplimiento del Poder Ejecutivo derivó en una presentación ante la Justicia que dio nacimiento al caso conocido como “Morales y otro C7 el Ministerio de Economía s/amparo por mora” donde en segunda instancia la Cámara confirmó su derecho de acceder a la información necesaria en el caso mencionado.

El Bloque de la UCR, un especialista en la materia, ha elaborado sistemáticamente pedidos de informes haciendo uso del Decreto 1172/03 con el objetivo de conocer información detallada, ante la negativa del oficialismo de ese momento de aprobar los “Pedidos de Comunicación” presentados por la oposición. Los mismos pueden ser consultados en nuestra web donde también puede observarse el bajo rendimiento de respuestas de este instituto legislativo. No fue una tarea fácil. Ya es hora de revertir todas las acciones utilizadas por el Gobierno anterior para limitar el ejercicio del derecho a la información así como las deficiencias del Decreto 1172/03 a través de una ley que nos proteja integralmente de las desviaciones del poder político, de los poderes del Estado, de sus empresas, y también de partidos políticos, sindicatos, o cualquier otra organización que produzca información necesaria para el cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos.

La propuesta que vengo a presentar en esta oportunidad intenta superar deficiencias de los proyectos anteriores, tomando como referencia las iniciativas tratadas en ambas Cámaras y los múltiples debates y audiencias Públicas que hemos protagonizado en estos años, bregando por esta legislación tan necesaria para la transparencia y el ejercicio de la ciudadanía.

La transparencia activa y la rendición de cuentas, las respuestas certeras, oportunas completas y accesibles a través de un organismo independiente como la Oficina de Acceso a la Información Pública que creamos en esta ley, ágil y confiable para los ciudadanos, reduce la discrecionalidad y con ello la posibilidad de abuso, la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo, permitiendo avanzar hacia la calidad de las instituciones democráticas. Esto es un deber de todos pero especialmente de los partidos políticos que deben asumir, más temprano que tarde, los cambios que la sociedad reclama y que la Constitución les habilita.

Silvia del Rosario Giacoppo.-